



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Dirección General de Estudios de Posgrado

Facultad de Ciencias Sociales

Unidad de Posgrado

**Etnografía de la corrupción en estudios de abogados de
Lima**

TESIS

Para optar el Grado Académico de Magíster en Antropología

AUTOR

Hector Daniel QUIÑONEZ ORÉ

ASESOR

Renatto Jorge MERINO SOLARI

Lima, Perú

2018



Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

Referencia bibliográfica

Quiñonez, H. (2018). *Etnografía de la corrupción en estudios de abogados de Lima*. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Sociales / Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.



6P8 R.
162 P8 A.

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

UNIDAD DE POSGRADO

**ACTA PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE
MAGÍSTER EN ANTROPOLOGÍA**

En Lima, a los veintiún días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho, reunidos en la Sala de Grados de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a horas 12:00 m., bajo la Presidencia del Dr. TEODOMIRO PALOMINO MENESES y con la concurrencia de los demás Miembros del Jurado Examinador, se inició el acto académico invitando al graduando **HECTOR DANIEL QUIÑONEZ ORE**, para que realice la sustentación de su Tesis para optar el Grado Académico de Magíster en Antropología, titulada:

**“ETNOGRAFÍA DE LA CORRUPCIÓN EN ESTUDIOS DE ABOGADOS DE
LIMA”**

A continuación fue sometido a las objeciones por parte del Jurado. Terminada esta prueba y verificada la votación; se consignó la calificación correspondiente a:

B MUY BUENO 17

Por cuanto, el Jurado, de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos, acordó recomendar a la Facultad de Ciencias Sociales para que proponga que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos otorgue el Grado Académico de Magíster en Antropología, al Bachiller **HECTOR DANIEL QUIÑONEZ ORE**. Siendo las 01:00 p.m. y para constancia dispuso se extendiera la presente Acta y firmaron:

Dr. Teodomiro Palomino Meneses.
PRESIDENTE

Mg. Luis Alberto Suárez Rojas.
MIEMBRO

Dr. Pedro Maguín Jacinto Pazo.
MIEMBRO

Mg. Pablo Gustavo Sandoval López.
MIEMBRO

Mg. Renatto Jorge Merino Solari.
ASESOR



Dr. JULIO VÍCTOR MEJÍA NAVARRETE
DIRECTOR (e)

PABELLÓN JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI – CIUDAD UNIVERSITARIA

Teléfono: 6197000 Anexo 4003, 4004. Lima – Perú.

Correo: upg.sociales@unmsm.edu.pe, upgccss@yahoo.es,

Web: <http://sociales.unmsm.edu.pe/>

A la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

ÍNDICE GENERAL

| | |
|---|-----------|
| RESUMEN | V |
| ABSTRACT | VI |
| CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN | 1 |
| 1.1. Situación Problemática..... | 1 |
| 1.2. Formulación del Problema | 4 |
| 1.3. Justificación teórica | 5 |
| 1.4. Justificación práctica..... | 6 |
| 1.5. Objetivos..... | 6 |
| 1.5.1. Objetivo general | 6 |
| 1.5.2. Objetivos específicos | 7 |
| CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO | 8 |
| 2.1. Antecedentes de la Investigación..... | 8 |
| 2.1.1. Microcorrupción en los alrededores e interiores del Palacio de Justicia de Lima. El estudio de Jaris Mujica | 8 |
| 2.1.2. Corrupción judicial y mecanismos de vigilancia y participación ciudadana. El estudio de la Comisión Andina de Juristas | 11 |
| 2.1.3. Microcorrupción en el Poder Judicial. El caso de los depositarios judiciales. El estudio de Coahila, Quinteros, Castillo y Chávez..... | 14 |
| 2.1.4. Corrupción y administración de justicia en comunidades. El estudio de Deborah Poole | 16 |
| 2.1.5. Los Abogados de Lima y la Administración de Justicia. El estudio de Luis Pásara..... | 19 |
| 2.1.6. Balance de las investigaciones analizadas..... | 21 |
| 2.2. Bases Teóricas | 23 |
| 2.2.1. Antropología y Derecho. Por una Antropología del Derecho más allá de los márgenes | 23 |
| 2.2.2. Campo Jurídico | 36 |
| 2.2.2.1. El entendimiento tradicional del Derecho | 36 |
| 2.2.2.2. Por una concepción amplia del estudio del Derecho. El campo jurídico..... | 43 |
| 2.2.3. Enfoques de la corrupción | 50 |
| 2.2.3.1. Enfoque económico de la corrupción | 52 |
| 2.2.3.2. Enfoque institucional y neoinstitucional de la corrupción | 55 |

| | | |
|---|--|------------|
| 2.2.3.3. | Enfoque histórico y cultural de la corrupción | 58 |
| 2.2.3.4. | Enfoque adoptado en la investigación | 62 |
| 2.3. | Descripción de Términos Centrales | 68 |
| 2.4. | Hipótesis | 75 |
| CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA | | 76 |
| 3.1. | Tipificación de la Investigación | 76 |
| 3.2. | Diseño de Investigación | 80 |
| 3.3. | Observación Participante | 83 |
| 3.4. | Instrumentos de recolección de datos | 90 |
| 3.5. | Procedimiento de análisis de los datos | 91 |
| 3.6. | El estudio de casos | 91 |
| 3.7. | Cronograma | 93 |
| CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN | | 94 |
| 4.1. | Presentación, análisis e interpretación de los datos | 94 |
| 4.1.1. | El espacio de análisis: Los estudios de abogados y su participación en litigios judiciales | 95 |
| 4.1.2. | Sujetos en la sombra: Los procuradores | 99 |
| 4.1.3. | Presentación de escritos fuera de plazo | 107 |
| 4.1.4. | Impulsos procesales | 115 |
| 4.1.5. | Emisión de Resoluciones Judiciales en interés de una de las partes | 120 |
| 4.1.6. | Elaboración de Resoluciones Judiciales por una de las partes | 124 |
| 4.1.7. | Desaparición de expedientes judiciales | 127 |
| 4.1.8. | Obtención de copias simples de Resoluciones y expedientes judiciales | 130 |
| 4.1.9. | Gastos de procuración | 134 |
| 4.2. | Prueba de hipótesis y discusión de los resultados | 138 |
| CONCLUSIONES | | 148 |
| RECOMENDACIONES | | 151 |
| REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | | 152 |

LISTA DE GRÁFICOS

| | |
|--|------------|
| Gráfico N° 01: Campo de análisis de la investigación..... | 99 |
| Gráfico N° 02: Relaciones mantenidas por el procurador..... | 103 |
| Gráfico N° 03: Relación del estudio de abogados, procuradores y poder judicial..... | 106 |

RESUMEN

La presente tesis constituye el resultado de una investigación realizada en el transcurso de dos años. Su objetivo fue describir y entender la relación existente entre práctica jurídica y corrupción desde la actuación de los estudios de abogados de Lima. Se plantea que los estudios de abogados recurren, en determinados casos, al ejercicio de prácticas corruptas a efectos de conseguir resultados eficientes en los litigios que llevan a cabo ante los diversos órganos del Poder Judicial.

La investigación encuentra justificación en los pocos estudios existentes en la actualidad que tienen por finalidad describir la relación entre práctica jurídica privada (estudios de abogados) y redes de corrupción. Asimismo, la presente investigación contiene una metodología poco usual en los estudios que abordan el tema de la corrupción, toda vez que plantea un estudio de carácter cualitativo, el cual se ha visto reflejado en el desarrollo de una etnografía.

Los resultados confirmaron la hipótesis planteada en la investigación, esto es, que los estudios de abogados participan en las redes de corrupción existentes a efectos de obtener resultados eficientes en los litigios llevados a cabo ante el Poder Judicial, para lo cual cuentan con personal que participa y actúa en estas redes.

Palabras Clave: Corrupción - estudio de abogados - práctica jurídica – etnografía.

ABSTRACT

This thesis is the result of an investigation carried out over the course of two years. Its objective was to describe and understand the relationship between legal practice and corruption from the performance of the law firms of Lima. It is argued that the law firms, in certain cases, perform corrupt practices in order to obtain efficient results in the litigation that they carry out in courts.

The research finds justification in the few existing studies that describe the relationship between private legal practice (law firms) and corruption networks. Likewise, this research contains an unusual methodology in the studies that address the issue of corruption, since it proposes a qualitative study, which has been reflected in the elaboration of an ethnography.

The results confirmed the hypothesis raised in the investigation: the law firms participate in the existing corruption networks in order to obtain efficient results in the litigation carried out in courts, for which they have workers who participate and act in these networks.

Key words: Corruption – Law firms – legal practice - ethnography

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1. Situación Problemática

La corrupción se ha convertido en uno de los temas centrales de la agenda de nuestro país. A lo largo de nuestra historia, se ha podido apreciar que la corrupción se encuentra presente en nuestra sociedad. Las esferas de poder han estado implicadas en actos corruptos que han significado la pérdida cuantiosa de innumerables recursos en beneficio de unos pocos.

Según el ranking elaborado por Transparencia Internacional en el año 2016, nuestro país ocupa el puesto 101 de 176 países a nivel mundial. El ranking mencionado, no vislumbra ninguna mejora, pues hemos disminuido tres puntos con relación a los rankings elaborados desde el año 2013. El mismo panorama se muestra para la mayoría de países sudamericanos, en los cuales los niveles de corrupción han ido en aumento, con excepción de Chile y Uruguay, quienes registran los menores índices de corrupción a nivel latinoamericano.

La consecuencia de tener altos índices de corrupción afecta la imagen del país y la convivencia existente en los países latinoamericanos, toda vez que merma la confianza ciudadana en la institucionalidad, dando lugar a la existencia de actos transgresores que incentivan y fomentan la realización de prácticas corruptas.

En el Perú, con mayor énfasis en la década de los noventa, la corrupción se instituyó como una forma natural y cotidiana de hacer política (Degregori: 2012, Quiroz: 2013). Los estudios comparativos realizados ubican al régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) en el séptimo lugar del ranking de los gobiernos más corruptos a nivel mundial de los últimos veinte años. Esta experiencia ha mermado el desarrollo económico y social de nuestro país, toda

vez que gran parte de los fondos nacionales fueron destinados al enriquecimiento de la cúpula de poder que gobernó nuestra nación durante la década de los noventa. En términos sociales, las consecuencias de la cotidianeidad de la corrupción ha sido la institucionalización de la transgresión de las normas sociales y jurídicas como una manera idónea y aceptable de actuación entre nuestros connacionales.

Lo mencionado se refleja en la percepción de los ciudadanos, quienes creen mayoritariamente que en nuestro país el nivel de corrupción es demasiado alto. Como se puede apreciar, la corrupción constituye un tema prioritario en la agenda nacional, siendo de vital importancia contar con aportes que expliquen cómo y por qué se generan redes de corrupción que permiten el funcionamiento y la vigencia de dichas prácticas.

Manifestar que la corrupción ha estado presente de manera constante en nuestra historia nacional no es afirmar una suposición vacía. En efecto, el estudio realizado por Quiroz confirma lo mencionado al señalar lo siguiente:

“Los costos de la corrupción para el desarrollo económico del Perú a lo largo de la época republicana han sido consistentemente altos o muy altos a pesar de las variaciones cíclicas detectadas. Al alcanzar niveles que en promedios anuales llegaron a ubicarse entre el 20 y 30% de valor presupuestario desviado por corrupción y el 3-4% del PBI, el Perú ha perdido por concepto de corrupción alrededor del 40 o 50% de sus posibilidades históricas para el desarrollo”. (Quiroz: 2005, 91).

Como se puede apreciar, tal ha sido la magnitud de la corrupción a lo largo de nuestra historia republicana que dichos actos han impedido la realización de un verdadero desarrollo nacional, toda vez que la pérdida cuantiosa de

recursos públicos en beneficio de unos pocos ha impedido el desarrollo y ejercicio de políticas públicas en beneficio de las grandes mayorías.

Al ser la corrupción un fenómeno social que involucra a diversas capas de nuestra sociedad, es común encontrar al Poder Judicial y, en general, a la práctica jurídica como uno de los sectores más corruptos de nuestro país. En efecto, el ejercicio de la práctica jurídica no se encuentra ajeno al velo de la corrupción, razón por la cual, según las encuestas realizadas regularmente, la percepción de la ciudadanía con respecto al Poder Judicial es que resulta ser una de las instituciones más corruptas de nuestro país.

La consecuencia de la percepción ciudadana con respecto a la práctica jurídica es la falta de confianza en la institucionalidad del Poder Judicial, lo cual conlleva a la generación de prácticas informales que, de manera paralela, se constituyen en mecanismos de resolución de conflictos. Lo mencionado, constituye tan solo una parte de las consecuencias nefastas que genera en la ciudadanía la existencia de prácticas corruptas en nuestro país.

La percepción ciudadana se asocia, generalmente, al espacio ocupado por el Poder Judicial, el cual es visto como una de las instituciones más corruptas de nuestro país, existiendo un desbalance con la percepción que se tiene con respecto a la práctica jurídica privada que, si bien por las consecuencias del reciente escándalo en el caso “Oldrebecht” se ha visto mermada, aún se mantiene alejada de la problemática de la corrupción.

En atención a lo mencionado, nos enfocaremos en el estudio y análisis de las relaciones de corrupción que se tejen en el ejercicio de la práctica jurídica, a efectos de describir, explicar y comprender cómo la práctica jurídica privada puede participar de las redes de corrupción existentes.

1.2. Formulación del Problema

Los estudios y análisis sobre la corrupción se han enfocado en tratar de brindar explicaciones generales sobre el por qué en nuestro país la corrupción se ha enquistado en nuestra sociedad, a tal punto de ver que en distintos aspectos de la cotidianeidad nos encontramos frente a actos transgresores de normas.

La revisión de la bibliografía dedicada al tema de la corrupción evidencia distintos enfoques que explican dicho fenómeno centrándose en el estudio de la corrupción en espacios públicos; es decir, en las instituciones que tienen a su cargo el manejo de recursos públicos y la gestión de intereses sociales y generales. Por el contrario, existen pocos estudios en sede nacional que han tratado a la corrupción desde el sector privado y local; es decir, se cuentan con pocas contribuciones que describan y expliquen las dinámicas de corrupción existentes que no se presenten en el espacio público y estatal.

Al enfocarnos en el aspecto privado del fenómeno no quiere decir que lo entendamos como un fenómeno aislado. Es decir, el estudio de la corrupción desde el sector privado implica necesariamente el análisis de las relaciones que mantiene con el sector público, en el entendido que el fenómeno de la corrupción se presenta de manera relacional, mediante la creación y establecimiento de redes que lo viabilizan.

En este contexto, planteamos realizar un estudio y análisis de las prácticas corruptas que se generan en los estudios de abogados de Lima en los litigios judiciales llevados a cabo ante el Poder Judicial. Hemos elegido un espacio de actuación privado y local, en el cual trataremos de explicar y comprender que la corrupción como práctica transgresora puede convivir con el desarrollo de la práctica jurídica. La práctica profesional que describimos consiste en la asesoría prestada por los estudios de abogados de Lima en los litigios judiciales llevados ante el Poder Judicial; de allí, que los casos prácticos a

presentar se circunscriban a la práctica procesal reflejada en la interacción entre los estudios de abogados y los órganos jurisdiccionales.

Para tal efecto, las preguntas que pretendemos responder en la presente investigación son las siguientes:

- ¿De qué manera los Estudios de Abogados de Lima acceden, intervienen y participan en las redes de corrupción que se desarrollan en la práctica jurídica, específicamente en las Cortes y Juzgados de Justicia de Lima?
- ¿Por qué los Estudios de Abogados de Lima recurren al ejercicio de prácticas corruptas en el desarrollo de su práctica jurídica?
- ¿En qué casos los Estudios de Abogados de Lima recurren al ejercicio de prácticas corruptas en el desarrollo de su actividad profesional?

1.3. Justificación teórica

Hemos elegido la relación que existe entre práctica jurídica desarrollada en los estudios de abogados de Lima y las prácticas corruptas que se desarrollan en él como objeto de estudio de la presente tesis, debido a la poca existencia de investigaciones que den cuenta de la relación antes mencionada, ya sea tanto desde el Derecho como desde la Antropología. El estudio realizado toma en cuenta las prácticas locales que se dan en el sector privado, cuestionando que el desarrollo del trabajo jurídico, en determinadas ocasiones, solo se limite al aspecto meramente técnico.

En cuanto a la metodología utilizada, consideramos que la perspectiva cualitativa de tipo etnográfico resulta un aporte para el campo disciplinar, pues existen pocas investigaciones que desde este diseño analicen el fenómeno de la corrupción en el campo del Derecho. Han predominado las investigaciones desde una perspectiva positivista cuantitativa enfocándose en las

consecuencias generales que implica la realización de actos corruptos. El enfoque etnográfico nos permite un acercamiento a las prácticas específicas que definen y conforman el fenómeno.

1.4. Justificación práctica

La justificación práctica radica en que las instituciones privadas suelen ser espacios poco abordados en los estudios que tienen por finalidad analizar y entender el fenómeno de la corrupción. Los accesos no se brindan con facilidad cuando se trata de indagar acerca de prácticas que prohíben las normas o que se consideran no correctas, razón por la cual su investigación en estas instituciones expone a mayores limitaciones al proceso de investigación e incluso a eventuales riesgos.

Sin perjuicio de lo mencionado, se ha podido obtener accesos fundamentales para la elaboración de la etnografía que presentamos, teniendo en cuenta la posición que el investigador ha desarrollado, así como de su conocimiento del campo de estudio en virtud la formación jurídica recibido en su formación profesional.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

El objetivo general de la investigación consiste en: describir las prácticas corruptas que los estudios de abogados de Lima realizan en el ejercicio de su práctica profesional en los litigios llevados a cabo ante el Poder Judicial, a efectos de comprender y explicar cómo la utilización de dichas prácticas convive con el ejercicio profesional de la abogacía.

1.5.2. Objetivos específicos

Los Objetivos específicos de la investigación son los siguientes:

- Explicar la forma en que los estudios de abogados de Lima participan en las redes de corrupción existentes, a efectos de obtener resultados eficientes en los litigios llevados a cabo ante el Poder Judicial.
- Describir la acción del personal que labora en los estudios de abogados y cuya función consiste en activar estas redes de corrupción en beneficio para el estudio y, por consiguiente, para los clientes.
- Analizar las posibles causas que conllevan a la práctica jurídica desarrollada por los estudios de abogados de Lima a recurrir, en determinados casos, a prácticas corruptas con la finalidad de obtener resultados favorables en los litigios patrocinados.

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la Investigación

En el presente apartado daremos cuenta de las principales investigaciones que tienen relación con la investigación desarrollada en la presente tesis.

2.1.1. Microcorrupción en los alrededores e interiores del Palacio de Justicia de Lima. El estudio de Jaris Mujica

El estudio más completo que se ha desarrollado en nuestro país sobre la relación existente entre corrupción y práctica jurídica, es el de Jaris Mujica en su libro *“Micropolíticas de la Corrupción. Redes de Poder y Corrupción en el Palacio de Justicia de Lima”*. El estudio analiza las distintas redes de corrupción que se tejen en los alrededores y al interior del Palacio de Justicia de Lima, sede de los juzgados y salas penales y de las instalaciones correspondientes a la Corte Suprema de Justicia de la República.

El autor demuestra que la corrupción se encuentra presente en el desarrollo de la práctica jurídica en el Palacio de Justicia de Lima y en sus alrededores, mediante las distintas redes que se establecen entre tramitadores, falsificadores, trabajadores, abogados, asistentes de juzgados, relatores y hasta jueces, cuya labor se encuentra íntimamente relacionada con prácticas corruptas. Dichas redes de corrupción constituyen, a criterio del autor, una forma de hacer política mediante la cual se generan alianzas y relaciones de reciprocidad entre los actores intervinientes.

Al analizar a la corrupción desde un aspecto general y teórico, el autor manifiesta lo siguiente:

“El trabajo está en comprender que estrategias de corrupción, lejos de romper las redes estructurales o la organización misma, generan prácticas de unión (fusión), generan mecanismos para constituir estructuras de poder y, quizás, sea una de las partes más importantes del funcionamiento de los poderes políticos en su vida local, cotidiana. La corrupción, por tanto, cobra un sentido fundamental, pues funciona no solo como una mera actividad económica y de interés personal, sino que es un mecanismo de construcción de redes y, a su vez, uno de los canales que deben ser lubricados para poder recrear y mantener las uniones entre estas. El poder y la autoridad se construyen, entonces, sobre estas redes y deben performar en esa dirección. De ahí que la corrupción sea una estrategia y el poder local sea un campo para el uso de sus tecnologías. Como hemos dicho, más que una simple ruptura, la corrupción parece ser un lenguaje complejo que fecunda las prácticas políticas y le da consistencia a la estructura de relaciones al interior de la política formal (aunque debe quedar claro que no es el único factor)”. (Mujica: 2011, 151)

Para Mujica el entendimiento y análisis de la corrupción, implica el estudio de las redes en la que esta opera, las cuales se encuentran conformadas por una serie de actores quienes, debido a su participación, hacen posible que el funcionamiento de dichas redes pueda obtener los objetivos previamente trazados.

El enfoque planteado por Mujica postula que el estudio y análisis de la corrupción se realice desde una perspectiva dinámica, dando cuenta de la actuación de las redes que hacen posible la realización de las prácticas corruptas. Para el autor la realización de prácticas corruptas lejos de constituirse en una actuación que se manifiesta en los márgenes o en los exteriores del sistema, forma parte de este, toda vez que los actores

intervinientes se han constituido en sus principales impulsores, a efectos de adentrarse al sistema y generar beneficios propios y a favor de terceros. Así:

“la corrupción, en lugar de excluir, incluye en el sistema. Y esto resulta una paradoja funcional y perversa: la informalidad en este caso, es parte de lo formal. En este sentido, la corrupción le da una estructura diferente a la política”. (Mujica: 2011, 155).

La falsificación de documentos, el pago de coimas, la desaparición de expedientes, el tráfico de influencias, entre otras actuaciones, constituyen las manifestaciones de que en el Palacio de Justicia de Lima se han generado toda una red que permite el desarrollo de prácticas corruptas, en cuyo seno se desenvuelve la práctica jurídica judicial. En esta compleja dinámica:

“las redes de corrupción en el exterior y en el interior del Palacio de Justicia no operan con la lógica de una mafia, ni de un cártel ni de clientelas estables, sino más bien a través de la reunificación de segmentos que operan fusionándose y fisionándose de acuerdo con los objetivos y coyunturas” (Mujica: 2011, 93).

Las redes de corrupción advertidas por Mujica se constituyen en un modo de hacer, esto es, de adentrarse en las relaciones que se tejen en las redes de corrupción existentes, a efectos de obtener resultados obviando las vías establecidas por la formalidad; de allí, que estas redes operen en la extralegalidad, y operan como parte del día a día de las prácticas que se generan en el Palacio de Justicia de Lima, constituyéndose en prácticas que les permiten entrar al sistema formal.

El aporte que nos brinda Mujica es fundamental, toda vez que revela hechos que forman parte del trabajo cotidiano del ejercicio jurídico realizado en Palacio

de Justicia, acreditando que lejos de agotarse en los canales formales establecidos por las normas jurídicas respectivas, acude a prácticas informales e ilegales, que no constituyen bajo ningún punto de vista actuaciones residuales ni mucho menos excepcionales en el desarrollo de la práctica jurídica.

El establecimiento de alianzas, reciprocidades y favores entre los actores protagonistas revela que el ejercicio de las prácticas corruptas forma parte del desarrollo del trabajo jurídico en la principal sede de administración de justicia de nuestro país, esto es, el Palacio de Justicia de Lima. Ello, ha llevado a afirmar que:

(...) La idea es que en el seno del sistema de justicia la corrupción resulta una herramienta fundamental, un instrumento que puede ser utilizado con diversos fines y que se mantiene latente” (Mujica: 2011, 93).

Si bien es cierto consideramos que el estudio realizado se enfoca principalmente en el sector público, en lo cual ahondaremos más adelante, manifestamos que el trabajo realizado por Mujica visibiliza actuaciones que se han considerado marginales y excepcionales por mucho tiempo en la academia. El hecho de demostrar que no ha sido así, sustenta a nuestro criterio la importancia del estudio realizado.

2.1.2. Corrupción judicial y mecanismos de vigilancia y participación ciudadana. El estudio de la Comisión Andina de Juristas

La Comisión Andina de Juristas realizó en el año 2003 un estudio sobre la corrupción en el Poder Judicial en nuestro país. Dicho estudio tuvo como objetivo mostrar, principalmente, los efectos que la década fujimorista tuvo sobre el Poder Judicial, incidiendo que durante el régimen de los noventa dicha

institución del Estado formó parte esencial de la amplia red de corrupción que saqueó los recursos públicos del país durante el gobierno de Alberto Fujimori.

El estudio constituye un diagnóstico que la Comisión Andina de Juristas elaboró mostrando las causas que coadyuvaron a considerar al Poder Judicial como uno de los órganos más corruptos del Estado. En él se esbozan tres hipótesis concernientes a las causas que incentivan la presencia de la corrupción en el Poder Judicial:

“Una primera hipótesis que explica el fenómeno de la corrupción judicial es que dada la naturaleza de los bienes y problemas que se discuten ante los órganos jurisdiccionales es posible que se incrementen las probabilidades de que sus operadores empleen sus poderes, atribuciones y facultades excediendo los límites permitidos y en beneficio propio (...) Una segunda hipótesis, que a nuestro juicio explica la corrupción, es la existencia en el Poder Judicial de problemas estructurales crónicos que la incentivan, tales como la forma de organizar el despacho judicial, la falta de control del juez sobre los empleados que intervienen en el trámite de los expedientes (...) Una tercera hipótesis es la debilidad del modelo de control disciplinario para investigar, identificar, perseguir y sancionar los actos de corrupción (...) (Comisión Andina de Juristas: 2003, 18-19).

Si bien el estudio mencionado aborda el tema desde el plano institucional, describe de manera bastante interesante y certera los actores que a su criterio intervienen en la generación de actuaciones corruptas formando parte de las redes de corrupción existentes en el seno del Poder Judicial. Así, el citado estudio cuenta con un apartado de interés para la presente investigación, en donde se menciona a los abogados litigantes y a los estudios de abogados

como sujetos que participan de las redes de corrupción que se tejen en el sistema judicial. Al respecto, se señala lo siguiente:

“El abogado litigante como usuario del sistema judicial, interviene en las diferentes áreas operativas del mismo, y cuando actúa como agente corruptor promueve la comisión de actos indebidos entre los funcionarios judiciales y los funcionarios administrativos. En este cotidiano encuentro con los operadores del sistema, muchos abogados impulsan actos menores de corrupción que les permiten establecer y sondear las vetas de corrupción mayor en el sistema” (Comisión Andina de Juristas: 2003, 71).

El estudio muestra como un agente interviniente en las redes de corrupción existentes a los abogados litigantes, quienes promueven el ejercicio de prácticas corruptas mediante su participación activa. Sin embargo, el estudio de la Comisión Andina de Juristas no solo se limita a señalar de manera general la presencia de los abogados litigantes en estas redes; sino también en base a entrevistas realizadas, señalan a los estudios de abogados como partícipes de dichas redes, describiendo inclusive, algunos actos que le fueron manifestados. Así, en el citado estudio se reporta lo siguiente:

“Una forma no ética y extendida de reclutar abogados o funcionarios en el sector privado es aquella mediante la cual las empresas (entre ellas los estudios de abogados) contratan a ex-funcionarios públicos para que pasen de ser operadores del sistema a ser usuarios del mismo, aportando los privilegios de información y relaciones funcionales, e incluso políticas, que sus cargos públicos les han dado (...) Otro tipo de modalidades de corrupción desde el foro se da cuando algunos estudios de abogados, con la finalidad de no correr el riesgo que para su

imagen podría implicar ser detectados en actos de corrupción, subcontratan a pequeños estudios de abogados para que den la cara ante la opinión pública y desplieguen los actos de corrupción directamente. Este es el caso de los llamados «estudios satélites», (...) Se dijo también en las entrevistas que otras prácticas antiéticas suficientemente expresivas del mantenimiento de estrechos lazos con la corrupción, se dan comúnmente con el ofrecimiento por parte de algunos estudios de abogados (e incluso importantes empresas) de opulentos almuerzos, cenas o «desayunos de trabajo», ofrecidos a algunos jueces para influir en el sentido de sus decisiones o para consolidar o hacer «fraternos» los lazos de corrupción” (Comisión Andina de Juristas: 2003, 71-75).

El estudio además de brindarnos un certero diagnóstico sobre la situación del sistema judicial en nuestro país; nos presenta a uno de los actores que usualmente ha sido olvidado en los trabajos sobre la corrupción en la práctica jurídica: los abogados litigantes y a los estudios de abogados, lo cual constituye un aporte relevante para nuestra investigación.

El estudio resulta relevante para los fines de la presente investigación, dado que no solo limita su análisis al sector público, sino también a los sujetos privados, describiendo de manera general, algunas de las prácticas en los que los protagonistas son los estudios de abogados.

2.1.3. Microcorrupción en el Poder Judicial. El caso de los depositarios judiciales. El estudio de Coahila, Quinteros, Castillo y Chávez

Coahila, Quinteros, Castillo y Chávez (2013) analizan las prácticas corruptas que se generan en la designación de depositarios judiciales en el Poder Judicial, los cuales son terceros a quienes se les designa la responsabilidad

de custodiar bienes (ya sea muebles o inmuebles) que se encuentran dentro de una controversia judicial.

La atención que le brindaron al caso de los depositarios judiciales se debió a que gran parte de los casos de corrupción en el Poder Judicial (31 %) tiene que ver con la actuación e intervención de los depositarios judiciales, quienes hacen uso indebido de los bienes objeto de custodia. A pesar de no formar parte de la estructura del Poder Judicial, es decir no ser funcionarios públicos designados, su intervención en los distintos procesos judiciales en materia de corrupción, llama la atención a efectos de analizar la importancia de su función.

Al respecto, en la investigación se señala lo siguiente:

“Los casos de corrupción de la PPEDC (*Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción*) en los que están implicados depositarios judiciales dan cuenta de cierta regularidad: *la negativa a entregar los bienes que mantienen en custodia*. En varios casos, se ha comprobado que esta negativa obedece a que los depositarios judiciales han hecho uso indebido de los bienes o los han comercializado, es decir, que han obtenido una ganancia económica con ellos” (Coahila, Quinteros, Castillo y Chávez: 2013, 8).¹

El estudio revela que los casos de corrupción en el seno del Poder Judicial son cometidos por funcionarios públicos que trabajan en sus instituciones; sin embargo, en la mayor cantidad de casos de corrupción que se cometen son aquellos en los cuales terceros ajenos a la estructura del Poder Judicial intervienen en las controversias presentadas, siendo el caso paradigmático el caso de los depositarios judiciales.

¹ Las cursivas corresponden al texto citado.

En una de las conclusiones se afirma lo siguiente:

“Los depositarios judiciales, sin ser necesariamente personal del Poder Judicial sino más bien particulares designados por un juez como depositarios o custodios de bienes embargados, representan el mayor porcentaje de personas imputadas por delitos de corrupción en agravio de este poder del Estado”. (Coahila, Quinteros, Castillo y Chávez: 2013, 13).

El estudio se enfoca solo en el caso de los depositarios judiciales designados por el Juzgado, señalando que la mayoría de los casos que se han presentado por corrupción en el Poder Judicial, tiene como protagonista a estos sujetos. La importancia de este estudio para la presente investigación reside en que el depositario judicial es un tercero, el cual por lo general es un *abogado*. En este caso, por ende, se advierte que uno de los casos de corrupción más recurrente en los litigios judiciales tiene como protagonista a un privado.

2.1.4. Corrupción y administración de justicia en comunidades. El estudio de Deborah Poole

Deborah Poole en su artículo *“Los dos cuerpos del Juez: Comunidad, Justicia y Corrupción en el Perú de los neoliberales”* da cuenta de las prácticas de corrupción que pudo visualizar en el trabajo de campo que desarrolló en la zona sur del Cusco y en el norte de Ayacucho. Si bien, en dicho trabajo la autora manifiesta no tener como objetivo descubrir las prácticas corruptas, da cuenta de cómo las reformas neoliberales de la justicia peruana han permitido la existencia de un clima de corrupción en los juzgados de paz situados en las zonas antes mencionadas.

Poole refiere la existencia de conflictos de intereses en la designación de los jueces de paz, quienes en varios lugares son parte de la élite mercantil o tienen

fuertes vínculos con las familias terratenientes, siendo en otros casos abogados de profesión cuyo interés no sólo es resolver el conflicto, sino tener la posibilidad de llevar los casos a las cortes judiciales. Todo ello en atención al marco normativo que desde el Estado se ha impuesto para los Jueces de Paz no letrados.

Poole refiere lo siguiente:

“En muchas áreas rurales – incluyendo aquellas donde hice mi trabajo de campo (el sur de Cusco y el norte de Ayacucho) – los despachos principales de la justicia de paz eran tradicionalmente monopolizados por las élites mercantiles o familias de terratenientes. En estos casos, las “tradiciones” de donde estas autoridades judiciales extraían su “sentido común” o “leal saber”, frecuentemente involucran el uso de formas personalizadas (y técnicamente ilegales) del castigo físico y coerción económica. Una variante moderna de este problema puede ser observada en Arequipa, donde casi la mitad de los jueces de paz no letrados tiene formación como estudiantes o profesionales en el derecho. En estos casos, suele ocurrir que el juez de paz (que, se supone, debe conducir los conflictos hacia una conciliación extrajudicial) es el mismo abogado que se interesa profesional y económicamente en llevar el caso a los tribunales” (Poole: 2005, 63).

La autora critica la ambigüedad establecida en la Constitución Política de 1993, en el sentido de que si bien se permite a los jueces de paz resolver conforme a su leal saber y entender, se les obliga a que sus decisiones no contravengan el ordenamiento jurídico oficial, lo cual conlleva a la existencia de un dilema que enfrenta el contexto cultural y social en base al cual el Juez

de Paz va a resolver y el ordenamiento jurídico oficial reflejado en las leyes y normas aplicables².

Esto genera una situación de ambigüedad e indeterminación que posibilita la existencia de prácticas transgresoras:

“las prácticas y los problemas de los mismos jueces locales sugieren que, para muchos peruanos, la corrupción es registrada como problema moral y político, no tanto en términos de los grandes (y con mayor frecuencia, también pequeños) escándalos que se debaten en los diarios de Lima, sino en los pequeños eventos de la vida cotidiana en un mundo local, donde el imperativo neoliberal para resolver problemas, a través de los medios locales, puede convertirse en acusaciones con sanciones penales en las cortes nacionales” (Poole: 2005, 75).

El estudio constituye un trabajo de importancia, toda vez que a diferencia de los trabajos analizados precedentemente, da cuenta de las prácticas y tensiones que se generan en el interior del país, analizando la problemática que involucra a los Jueces de Paz, quienes no solo se encuentran entre la aplicación de la Ley Estatal y los usos y costumbres reconocidos

² Lo mencionado en el texto principal, ha sido profundizado por Deborah Poole en otro estudio (2006), en el cual analiza las tensiones que los jueces de paz en las comunidades campesinas deben afrontar al tener que aplicar tanto la Ley Estatal como los usos y costumbres de su entorno en la resolución de controversias. Así, Poole señala al respecto (2006, 15): “En mi trabajo etnográfico he tratado de entender cómo sienten y perciben los propios jueces esta doble carga. Lo que he aprendido de ellos es que no la consideran un privilegio o derecho, sino más bien una amenaza recurrente. El prevaricato, por ejemplo, designado en los manuales como “delito propio al cargo de juez de paz”, tiene lugar “cuando el juez dicta una resolución que contradice claramente el texto de la ley” (artículo 418). Pero si se supone que el juez no tiene que basarse en “el texto de la ley”, ¿cómo saber cuándo éste contradice la ley y cuándo sus acciones y decisiones han pasado al terreno de la extralegalidad? Según este mandato, al igual que los reyes medievales, y a diferencia de todos los demás rangos de la judicatura, el juez de paz *debe* ocupar dos cuerpos: uno, el del funcionario desinteresado que simboliza el espíritu de la ley y, el otro, el de carne y hueso, que representa el conocimiento personal y la intimidad con su comunidad”.

constitucionalmente, sino también frente acusaciones de corrupción derivadas de las tensiones y problemáticas anteriormente mencionadas.

Estas problemáticas han dado lugar a que se acuse de corrupción a los jueces de paz quienes, al salirse del marco normativo vigente con la finalidad de resolver la controversia según sus usos y costumbres, son acusados de tergiversar el sentido de las normas a efectos de favorecer a una de las partes en conflicto.

2.1.5. Los Abogados de Lima y la Administración de Justicia. El estudio de Luis Pásara

El abogado y sociólogo Luis Pásara cuenta con un estudio titulado “*Los Abogados de Lima y la Administración de Justicia*”, en donde en base a entrevistas y encuestas realizadas a jueces, fiscales y abogados litigantes analiza la percepción que se tiene de la práctica jurídica en los litigios llevados a cabo ante las Cortes de Justicia.

En lo referente a la corrupción, Pásara señala lo siguiente:

“los magistrados y abogados que participaron en las reuniones convocadas para discutir el tema (*prácticas corruptas*) se refirieron a ellas como características adoptadas por el ejercicio profesional en los últimos años. Según estos informantes, la práctica profesional que prevalece actualmente se disuelve en una problemática social mayor, correspondiente tanto a la agudización de determinadas carencias como a una devaluación ética, ocurridas en la sociedad peruana en tiempos recientes”. (Pásara: 2005, 79).

El estudio de Pásara si bien no se enfoca exclusivamente en analizar cómo la corrupción se encuentra en íntima relación con el ejercicio de la práctica jurídica, cuenta con testimonios y entrevistas que revelan que dicha relación no es ajena a la percepción de los propios abogados, quienes manifiestan conocer de manera efectiva que el ejercicio de prácticas corruptas constituye una constante en el ejercicio del Derecho.

Así, uno de los testimonios más interesantes que recoge el citado estudio, señala lo siguiente:

“Tenemos grandes estudios de abogados con gente técnicamente muy preparada, muy capaz pero, por lo mismo, con esa capacidad para manejar las cosas de una manera indebida. El concepto del abogado exitoso termina siendo el abogado que gana los casos; el problema es cómo los gana. En el ejercicio profesional no necesariamente una falta de preparación técnica es lo que motiva este tipo de conductas; suele ocurrir, y muchísimo, en grandes estudios con mucho reconocimiento”. (Pásara: 2005, 75).

El testimonio citado, tiene estrecha relación con la hipótesis que planteamos en la presente tesis, puesto que se corrobora que el aspecto técnico no es el único utilizado por los estudios de abogados a efectos de contar con resultados exitosos, siendo muchas veces utilizadas prácticas ilegales y corruptas que coadyuvan a la obtención de dichos resultados.

Testimonios adicionales señalan lo siguiente:

“La cuestión del ejercicio profesional estaría "inmersa en una problemática social donde la pérdida de valores en los últimos tiempos ha sido tan grande que nos hemos acostumbrado e

identificado con lo corrupto", según apuntó un magistrado. Una fiscal recordó, complementariamente: "En otras profesiones sucede lo mismo; es algo que viene de la familia y viene de la sociedad." De allí que deba considerarse "voluntarista y hasta pueril sostener que el dictado de cursos de ética profesional hará mejores a los abogados en ejercicio", como a menudo se propone en el medio. Se está ante un problema social de gran calado, del que probablemente la conducta del abogado es una de sus expresiones más salientes, que no puede ser encarado seriamente como si correspondiera a una insuficiencia de conocimientos o habilidades". (Pásara: 2005, 79).

El estudio de Pásara cuenta con valiosa información como resultado de la realización de entrevistas a profundidad, realizadas a abogados y jueces, quienes brindan su apreciación sobre la relación existente entre la administración de justicia y los abogados, señalando que en el caso de la corrupción existe una suerte de prácticas que han mermado la credibilidad y la confianza en la institucionalidad del Poder Judicial.

2.1.6. Balance de las investigaciones analizadas

Como hemos podido apreciar, los estudios citados revelan la relación existente entre la corrupción y el ejercicio de la práctica jurídica profesional. Las investigaciones han descubierto que paralelamente al sistema formal de ejercicio de la práctica jurídica, existen una serie de relaciones y dinámicas que se vienen constituyendo en prácticas cotidianas y, en algunos casos, esenciales en el ejercicio de la abogacía.

Las etnografías de Mujica y Poole se enfocan en el estudio de espacios locales, constituidos por los juzgados y cortes de justicia. Ambas investigaciones se enfocan en instituciones públicas, desde las cuales se

analizan las dinámicas y relaciones de corrupción que se generan en dichos espacios. Los estudios mencionados presentan solo una de las partes en las relaciones de corrupción existentes, enfocando la realización de prácticas corruptas en espacios en donde los principales protagonistas vienen a ser trabajadores estatales y funcionarios públicos. En ambos casos se dejan de lado las prácticas y dinámicas existentes en los espacios locales de carácter privado, como lo es el caso de los estudios de abogados, desde donde se generan e incentivan la realización de prácticas corruptas que forman parte de las redes de transgresión que se generan en el devenir del trabajo jurídico.

Estos estudios constituyen los únicos trabajos etnográficos que se han realizado en nuestro país con respecto a la relación entre corrupción y práctica jurídica. Ambos se sustentan en la observación participante desarrollada en espacios locales, dando cuenta de las prácticas de corrupción registradas en estos.

También el trabajo desarrollado por Cohalia, Quinteros, Castillo y Chávez tiene como objeto de estudio el espacio público, reflejado en el Poder Judicial. Dicho estudio analiza una determinada práctica, materializada en los casos de corrupción que se han ocasionado en la designación de los depositarios judiciales. El estudio en mención acoge como su principal fuente de información, el número de casos de corrupción registrados a la fecha de la elaboración del informe, concluyendo que la mayoría de casos de corrupción existentes en el Poder Judicial proviene de la designación de depositarios judiciales, quienes no son trabajadores del Poder Judicial.

El estudio realizado por Pásara si bien nos brinda información importante sobre la percepción que se tiene de los abogados frente a la administración de justicia, en lo que se refiere a la corrupción no muestra las prácticas que la reflejan, limitándose a mencionar que esta constituye un problema

fundamental que es necesario remediar a efectos de que el trabajo jurídico pueda ejercerse de manera transparente.

Por último, hemos analizado también el estudio realizado por la Comisión Andina de Juristas, el cual si bien tuvo como objeto de análisis la corrupción existente en el Poder Judicial durante el gobierno de Alberto Fujimori, nos proporciona información relevante sobre algunas prácticas corruptas que los estudios de abogados han realizado en el ejercicio de la profesión jurídica. Este estudio es el único de las cinco investigaciones analizadas que da cuenta de la participación de los estudios de abogados en las redes de corrupción, brindando como sustento una serie de casos que hemos citado en el apartado pertinente.

2.2. Bases Teóricas

En el presente apartado expondremos, brevemente, las bases teóricas en las que se sustenta la investigación, reflejada en la relación entre la Antropología y el Derecho, incidiendo en la importancia de la perspectiva antropológica y de sus herramientas metodológicas a efectos de entender el ejercicio de la práctica jurídica y su relación con la corrupción. Asimismo, esbozaremos los principales enfoques de análisis que se han gestado para entender al fenómeno de la corrupción para, finalmente, brindar nuestra opinión sobre ellos.

2.2.1. Antropología y Derecho. Por una Antropología del Derecho más allá de los márgenes

A nuestro juicio, una de las disciplinas que coadyuvan a entender de manera crítica el Derecho es la Antropología. Esta disciplina constituye una herramienta que nos anima a cuestionar los postulados generales, abstractos y normalizantes planteados desde el Derecho. Cuando hablamos de

postulados normalizantes nos referimos a aquellas categorías que con el devenir del tiempo se consideran hegemónicas y superiores, no existiendo crítica ni cuestionamiento alguno hacia ellas. Así, a modo de ejemplo, podemos considerar la aludida supremacía de la propiedad privada sobre otras formas distintas de apropiación, la pretendida universalidad de los Derechos Humanos, el monopolio de la justicia y emisión de normas jurídicas por parte del Estado, entre otras categorías que forman parte de un consenso casi unánime en el análisis y estudio del Derecho.

Paolo Grossi, quien al analizar los postulados sobre los que se basa el derecho occidental moderno, del cual deriva nuestro ordenamiento jurídico, señala lo siguiente:

“esta civilización, que tiene la cuidadosa pretensión de proponerse como desacralizadora y demoledora de mitos, se encuentra por el contrario como gran constructora de los mitos (...) Aquí se puede encontrar la más inteligente, la más consciente, la más hábil creación de mitos jurídicos jamás halladas en la larga historia jurídica occidental; un conjunto de mitos orgánicamente imaginados y unidos para dar vida a una verdadera y auténtica mitología jurídica” (Grossi: 2003, 40).

La Antropología se erige como una herramienta indispensable para cuestionar y derrumbar los mitos existentes en el Derecho. A nuestro juicio, la Antropología constituye una disciplina decididamente subversiva y crítica. Al respecto, compartimos lo señalado por Esteban Krotz (2002, 29), para quien la Antropología “pone en crisis a la sociedad, pues exige que sea justificado explícitamente el orden vigente, el cual en mayor o menor medida es desenmascarado como posible de otra forma”.

De la misma manera resulta relevante lo señalado por Augé y Colleyn, para quienes la Antropología “pone en crisis el decorado de las verdades establecidas, ya que, durante su estancia sobre el terreno, el investigador está obligado a dejar atrás la protección que supone el conformismo con respecto a un orden concreto del mundo” (Augé y Colleyn: 2005).

En base a lo manifestado, podemos afirmar que la Antropología constituye una disciplina de indudable importancia para el análisis y entendimiento del Derecho. El aporte de la perspectiva antropológica lo sintetizamos en cuatro puntos:

Reconocimiento de la alteridad y pluralidad. El objeto predilecto de estudio de la Antropología es la cultura (Degregori: 2009, 21). Dado la existencia de distintas formas de organización y entendimiento del mundo (cultura), la Antropología se erige como la disciplina de la alteridad, esto es, del conocimiento y entendimiento del denominado “otro”, a fin de entender como ese “otro” desarrolla sus actividades y organiza su entorno.

Alteridad, pluralidad e identidad son los signos distintivos de la Antropología. Así, Augé señala al respecto:

“si admitimos que la noción de pluralidad remite a todas las diversidades y no tan sólo a las que han sido connotadas como exóticas o, para decirlo en lenguaje más científico, como etnográficas, y si prestamos atención a la relación alteridad/ identidad y al hecho de que siempre es una reflexión sobre la alteridad lo que precede y permite toda definición de identidad podemos llegar a la conclusión de que toda antropología es tripolar (a saber, que tiene la vocación de concebir juntas la pluralidad, la alteridad y la identidad) y de que su objeto central y hasta único es lo que se podría llamar la doble alteridad, es decir,

la concepción que otros se hacen del otro y de los otros". (Augé: 1998, 82)

Teniendo en cuenta la alteridad y pluralidad existentes en nuestras sociedades, podremos vislumbrar distintas formas de entender el Derecho, comprendiendo que el orden establecido es sólo una manera más de entender y organizar las relaciones sociales existentes.

La alteridad al cual hacemos referencia no nos debe conllevar a idealizar ni mucho menos a exotizar al otro, debiendo entender que existen procesos de indudable intercambio y comunicación que lejos de concebir el aislamiento de determinadas culturas y organizaciones, nos permite entender que estas se encuentran en constante cambio e intercambio. Lo mencionado, tiene sentido, incluso, en sociedades postcoloniales como la nuestra, en donde la relación existente entre ciudad-campo y/o urbano-rural (al margen de las existentes desigualdades económicas existentes) se ha ido tejiendo en base a un diálogo constante (Al respecto, Appadurai: 2001).

Lo mencionado anteriormente debe ser tomado en cuenta por los operadores jurídicos, quienes al adentrarse al estudio antropológico del Derecho pueden caer en idealizaciones que les impidan ver las dinámicas sociales y los procesos de cambio que indudablemente se han dado, por ejemplo, en las comunidades campesinas y nativas en el Perú. Pretender establecer un discurso "orientalista" conforme lo señala Edward Said (2008) o "andinista" tal cual lo denunció Orin Starn (1992) en la antropología peruana, lejos de establecer diagnósticos certeros, contribuye a formar trayectorias erradas que no coadyuvarían a la realización de verdaderos cambios a favor de los denominados "subalternos".

Por lo mencionado, el estudio del otro y de la alteridad sobre el cual se erige la Antropología, no debe buscar la existencia de sujetos alejados, ni de

culturas prístinas ubicadas en la llamada “otredad”. Un de las tareas pendientes de la Antropología desde nuestro punto de vista, es entender que convivimos en sociedades en las cuales los procesos de mestizaje e intercambio cultural se han presentado de manera bastante fuerte, lo cual no quiere decir que convivamos en un contexto de homogeneidad cultural, sino de enriquecedora diversidad que debe tratarse bajo un clima intercultural, de provechoso intercambio y aprendizaje.

Asimismo, entendemos que el estudio de la cultura y de la alteridad en la Antropología no tiene porque únicamente materializarse en investigaciones que solo tengan por objeto estudiar comunidades y localidades alejadas del ámbito urbano o de la ciudad, toda vez que la diversidad cultural, así como la existencia de una práctica cultural puede presentarse en diversos ámbitos y regiones, no siendo imprescindible “la constatación de lejanías” para la validación de un estudio o una investigación proyectada.

Disciplina holística. La Antropología tiene una ventaja con respecto a las demás Ciencias Sociales: es una disciplina holística. El hecho de que la Antropología tenga en cuenta la alteridad y pluralidad, hace que su interés rebase ámbitos “estrictamente culturales”, enfocándose también en análisis que se pueden entender como macro-sociales.

El carácter holístico de la Antropología se encuentra comprobado por quienes dentro de las Ciencias Sociales han realizado estudios que van desde planos culturales hacia los estudios y análisis del poder (A modo de ejemplo, Pierre Bourdieu y en el Perú Julio Cotler, ambos con formación antropológica). Entender a la Antropología como una disciplina que se aboca a temas estrictamente culturales es tener una concepción reducida del estudio antropológico, el cual es consciente de la interdisciplinariedad que requiere el análisis de la realidad social a efectos de establecer diagnósticos certeros y aproximados a lo que ocurre en el contexto analizado.

La Antropología se nutre del conocimiento de distintas disciplinas a efectos de poder entender, comprender y explicar los fenómenos culturales estudiados. No se puede pretender brindar una explicación que se limite solo al enfoque cultural sin entender las dinámicas sociales existentes ni los factores externos que influyen en la existencia de dichas dinámicas y prácticas sociales.

Desde nuestro punto de vista, el carácter holístico de la Antropología se vislumbra desde dos planos reflejados en i) el necesario entendimiento del contexto y de los fenómenos y factores que existen al momento de analizar los aspectos culturales y ii) la entrada que el entendimiento de la cultura y la alteridad de un determinado objeto nos proporciona para abordar temáticas que exceden el aspecto cultural. Ambos planos se relacionan de manera recíproca, permitiendo que el desarrollo de la investigación antropológica sea marcadamente interdisciplinaria.

Esto aplicado el Derecho resulta fundamental para la realización de un análisis interdisciplinario de las categorías jurídicas, lo cual exige que el investigador no se circunscriba exclusivamente al análisis normativo, sino que evalúe el contexto y las prácticas culturales que se materializan en la aplicación de las normas de una determinada institución jurídica.

Trabajo de campo. El método por antonomasia que identifica a la Antropología es la observación participante, consistente en la inmersión del investigador en el campo, en el cual tratará de descubrir y entender la perspectiva de los actores. Es en el campo en donde el investigador obtiene la información más relevante, en donde al convivir con los actores apreciará la racionalidad de sus actos y el porqué de su organización y de sus decisiones.

Para el operador jurídico la experiencia de campo será gratificante. Así, Augé señala que:

“para quien la práctica, la experiencia de campo provoca una doble pero beneficiosa incomodidad. En primer lugar una incomodidad material, que le permite comprender que no hay una única definición previa de lo que sería la vida normal. Y, en segundo lugar, una incomodidad más arriesgada, la de verse obligado a rasgar el tejido de hábitos e ideas preconcebidas que le protegía hasta entonces”. (Augé: 1998, 82)

El trabajo de campo constituye una herramienta fundamental para escapar del análisis dogmático y formalista existente en el Derecho, puesto que rebasa el plano institucional sobre el cual tradicionalmente se sustenta su análisis, para dar visibilidad a las prácticas y dinámicas plasmadas en la realidad social.

El estudio de campo implica la utilización de herramientas cualitativas y cuantitativas, a partir de las cuales podremos construir conocimiento y contrastar postulados. El trabajo de campo será una herramienta útil a efectos de proponer una investigación crítica, la cual tendrá como finalidad partir de la realidad social a efectos de poder cuestionar los postulados que desde el Derecho se nos presentan asiduamente como abstractos y universales.

La herramienta metodológica que nos encontramos abordando es prácticamente inexistente en los estudios e investigaciones que se realicen desde el Derecho. En la academia jurídica son protagonistas los estudios dogmáticos y positivistas, los cuales basan su análisis en el estudio de teorías, normas jurídicas y jurisprudencia, en base a las cuales se emiten las opiniones sobre una determinada institución jurídica.

Son nulos los estudios e investigaciones en el Derecho que recurran al trabajo de campo. Esta falencia en el estudio del Derecho puede ser corregida con la ayuda de las disciplinas sociales, entre las cuales la Antropología tiene mucho que aportar. En efecto, el trabajo de campo realizado a través de la

observación participante y las entrevistas libres o a profundidad, constituirían herramientas fundamentales para analizar el comportamiento y las prácticas que se analizan en el Derecho. El entendimiento de la corrupción, la criminalización de la protesta social, entre otros temas de connotación jurídica, pueden ser investigados mediante la realización de un trabajo de campo que complemente el análisis legal tradicional.

Entendimiento de trayectorias y prácticas consuetudinarias. La antropología rebasa el plano formal e institucional del análisis de las sociedades. El estudio antropológico privilegia la observación y entendimiento de las prácticas sociales, las cuales muchas veces no se condicen con los postulados normativos entendidos desde el Estado.

Las características mencionadas anteriormente son los rasgos distintivos de la Antropología, las cuales aplicadas al Derecho nos ayudarán a superar sus bases tradicionales. En base a ello, se hace necesaria una estrecha relación entre la antropología y el Derecho, teniendo la primera una serie de aportes y virtudes que acercarán al Derecho hacia la realidad y praxis social. Así, compartimos lo mencionado por Adonon, para quien:

“uno de los mayores aportes de la antropología jurídica es el de contextualizar, relativizar y eventualmente cuestionar la pertinencia de algunos de los principios fundamentales del pensamiento jurídico occidental moderno buscando ampliar el concepto mismo de derecho y de juridicidad”. (Adonon: s/a, 1).

La Antropología del Derecho nos brinda las herramientas teóricas y metodológicas que servirán para desentrañar el entramado de relaciones sociales que se encuentran enmarcadas en el formalismo jurídico sobre el cual se cimentan las instituciones jurídicas. Cuestionar los postulados abstractos, generales, universales y dogmáticos propios del razonamiento jurídico es una

tarea fundamental que nos abocamos a realizar mediante la investigación y propuesta de la Antropología del Derecho.

El desarrollo de la tesis que presentamos intenta ser una contribución desde la llamada Antropología del Derecho. En efecto, la presente tesis busca ampliar los espacios de esta, la cual en nuestro país se ha encontrado y desarrollado fundamentalmente en “los márgenes”.

Lo señalado anteriormente describe la situación que hemos podido apreciar en el desarrollo de la Antropología del Derecho peruana, en la cual se han estudiado e investigado temas tradicionales de la Antropología, los cuales aplicados al Derecho han recaído sobre los estudios en torno a la Propiedad Comunal, Organización Comunal, Pluralismo Jurídico, consulta previa, Derechos Humanos en contextos interculturales, entre otros.

Los temas antes referidos han sido tratados por distintos investigadores e instituciones públicas y privadas, las cuales han tratado de visibilizar y entender las distintas prácticas existentes en los márgenes, dando cuenta de que el Derecho occidental y moderno que es promulgado y aplicado desde el Estado, presenta grietas y fisuras que no toman en cuenta las distintas prácticas que se realizan desde la llamada subalternidad.

Cuando nos referimos a los márgenes, hablamos de aquellos espacios que son desatendidos por los paradigmas convencionales, los cuales solo se enfocan en las dinámicas “modernas” y “urbanas”, dejando de lado las distintas formas de organización y entendimiento del Derecho que existe en nuestro territorio. La Antropología del Derecho peruana se ha presentado como la voz que reclama el entendimiento y la atención de las prácticas legales realizadas desde los márgenes, reflejados en la organización y práctica jurídica esbozadas por las distintas comunidades campesinas y nativas, en las cuales

el concepto tradicional de Derecho que manejamos cotidianamente, en muchos casos, no es compartido³.

Creemos que el hecho de que la Antropología del Derecho peruana se haya enfocado en los márgenes ha sido de suma importancia para el desarrollo de ambas disciplinas, las cuales en base a un diálogo constante han establecido puentes a efectos de cuestionar la universalidad y la pretendida generalidad que se presenta de manera usual en el Derecho⁴. Estudios que han tenido por finalidad visibilizar las distintas formas de organización y manejo de los recursos, que cuestionan el denominado monismo jurídico, que abogan por una concepción intercultural de los Derechos Humanos, entre otros, han logrado llamar la atención sobre la existencia de “otros derechos”.

No obstante ello, creemos también que el solo hecho de enfocarse en los márgenes constituye un error en la Antropología del Derecho peruana. En efecto, si bien de manera tradicional se entendía que un estudio antropológico del Derecho se circunscribía al estudio de las prácticas legales desarrolladas en las comunidades, creemos que dicha concepción ha cambiado actualmente.

Lo mencionado anteriormente, se manifestaba en atención a la división tradicional que se concebía entre la Antropología y la Sociología, la cual aplicada al Derecho, concebía que mientras que en un estudio antropológico del Derecho se circunscribiría al estudio de las comunidades campesinas y nativas en el aspecto rural, la Sociología del Derecho se enfocaría en el estudio

³ Lo mencionado en el texto principal, se puede ver de las Conclusiones a las cuales arribó el I Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, más conocido como el RELAJU: “En este sentido, la antropología del derecho es un instrumento de análisis y diálogo que puede servir para expandir los márgenes de autonomía de los pueblos indígenas y de las organizaciones sociales consuetudinarias. Para eso resulta crucial encontrar la consonancia entre el trabajo académico y las reivindicaciones de los actores sociales”.

⁴ Así, Adonon (s/a, 1), para quien “uno de los mayores aportes de la antropología jurídica es el de contextualizar, relativizar y eventualmente cuestionar la pertinencia de algunos de los principios fundamentales del pensamiento jurídico occidental moderno buscando ampliar el concepto mismo de derecho y de juridicidad”.

del Estado y las instituciones jurídicas que lo conforman en el denominado aspecto urbano.

La tradicional división existente entre la Antropología y Sociología del Derecho en el contexto actual constituye, a nuestro criterio, una barrera institucional formal que no impide que ambas disciplinas se crucen y dialoguen⁵. En efecto, actualmente el diálogo que existe entre ambas disciplinas hace que las investigaciones compartan metodologías y se enfoquen en temas que tradicionalmente se estudiaban de manera cerrada e inconexa⁶.

La Antropología actualmente tiende a estudiar y explicar las relaciones que se tejen entre distintos individuos, en las cuales se encuentran presentes relaciones de identidad y alteridad, la cual no solo se presenta en el entendimiento del otro como lejano ni exótico, sino como aquel que se encuentra cerca de nosotros, en nuestro mismo contexto⁷. Así, compartimos lo manifestado por Augé y Colleyn para quien:

⁵ Así, Bourdieu (2001, 73): “Permítaseme examinar algunas de estas antinomias que, desde mi punto de vista, son profundamente nocivas para la práctica científica. En primer lugar, están las oposiciones entre disciplinas. Tomando la oposición entre sociología y antropología: esta absurda división, que carece absolutamente de cualquier fundamento que no sea el histórico y es un producto prototípico de la “reproducción académica”, favorece la generalización y el plagio incontrolado mientras impide una genuina fertilización cruzada (alogamia). Por ejemplo, creo que no podría haber entendido todo lo que ahora expreso con el concepto de “capital simbólico” si no hubiera analizado las estrategias del honor entre los campesinos argelinos, así como las estrategias de las firmas que compiten en el campo de la alta costura”.

⁶ Ejemplo de lo mencionado en el texto principal, lo constituye el estudio que realizaron Das y Poole (2008: 19-20), quienes al plantear realizar una etnografía del Estado desde los márgenes, manifestaron lo siguiente: “La antropología es frecuentemente entendida como la disciplina que habla por aquellas poblaciones que han sido marginadas de las estructuras políticas y económicas de los dominios coloniales y postcoloniales. Más aún, la etnografía es una forma de conocimiento que privilegia la experiencia, lo que le permite introducirse en los dominios de lo social que no son de fácil acceso si se siguen los protocolos formales de los que se sirven otras disciplinas. En tanto tal, la etnografía ofrece una perspectiva única del tipo de prácticas que parecen deshacer al Estado en sus márgenes territoriales y conceptuales (...)”.

⁷ Teniendo en cuenta lo señalado en el texto, resultan ilustrativas las palabras de Carlos Iván Degregori, quien al analizar sobre el objeto de la antropología después de analizar su curso evolutivo en nuestro país, señala lo siguiente: “¿Cuál sería entonces el objeto de estudio de la antropología? Podríamos decir que el mismo: la diversidad cultural. Pero la perspectiva ha cambiado radicalmente, puesto hoy no pasa por buscar la aculturación homogeneizadora ni el respecto al “buen salvaje” sino por la construcción de un Nosotros diverso, reivindicando el derecho de unos y otros a la igualdad y a la diferencia. Derecho a la igualdad, no como

“el antropólogo estudia las relaciones intersubjetivas entre nuestros contemporáneos, sean nambikwara, arapesh, adeptos de un culto del candomblé brasileño, nuevos ricos de Silicon Valley, ciudadanos de las nuevas ciudades, dirigentes de empresa o diputados europeos. Estas relaciones de alteridad y de identidad no son inmutables, se hallan en constante recomposición”. (Augé y Colleyn: 2005, 19).

De la misma manera, Sally Falk Moore señala al respecto:

“Mientras que el proyecto tradicional de la antropología ha sido el estudio de entornos desconocidos, hoy, esa perspectiva comparativa ha cambiado hacia nuevos enfoques. Los antropólogos consideran ahora los aspectos socio - jurídicos del Estado moderno en dos ambientes muy diferentes: los subcampos no oficiales pero organizados socialmente que existen dentro de los Estados-nación , y los campos transnacionales o globales que atraviesan y trascienden los estados , algunos de ellos oficiales, alguno de ellos no oficiales”. (Sally Falk Moore: 2005, 34)⁸.

Como se puede apreciar, el entendimiento de la Antropología actual rebasa los límites que tradicionalmente encuadraban a la Antropología a las denominadas sociedades tradicionales, o lo que es lo mismo a las comunidades campesinas y nativas. Actualmente, el análisis antropológico se

sinónimo de uniformidad sino como superación de la existencia de seres humanos de primera y de segunda categoría. (Degregori: 2009, 63).

⁸ Traducción del autor.

enfoca en el estudio de todo tipo de relaciones sociales, en donde los conflictos de identidad, cultura y alteridad se encuentran presentes^{9 10}.

Lo mencionado anteriormente, constituye el sustento en virtud al cual abogamos por un estudio antropológico del Derecho que no solo se circunscriba al estudio y entendimiento de las prácticas legales ejercidas desde los márgenes, sino también al cuestionamiento de cómo el ejercicio de las prácticas legales se desenvuelven dentro de la denominada “normalidad”, la cual es presentada como neutral y técnica¹¹.

A nuestro juicio, la Antropología constituye una disciplina decididamente crítica y, para algunos hasta subversiva,¹² dado que critica y cuestiona aquello que es presentado como normal y cotidiano. Ello, ha llevado a afirmar que:

“un estudio antropológico del derecho “no conoce barreras y desconfía de los conceptos preconstituidos sobre la naturaleza autónoma del derecho, entendido como no alterado por las

⁹ Augé y Colleyn (2005,19): “Independientemente de las preferencias teóricas de los investigadores, la especificidad del punto de vista antropológico reside en este interés central por el estudio de la relación con el otro tal como esta se construye en su contexto social. La cuestión del sentido, es decir, de los medios con que los seres humanos que habitan un espacio social se ponen de acuerdo sobre el modo de representarlo y de actuar sobre él, es el horizonte de las actividades antropológicas”.

¹⁰ Supiot (2007, 77): “Un orden jurídico no cumple su función antropológica sino cuando le garantiza a cada recién llegado al mundo por un lado la preexistencia de un mundo dado, que le asegura su identidad a largo plazo, y por otro lado la posibilidad de transformar ese mundo e imprimirle su propio sello. No existe un sujeto libre si no está sometido a una ley que lo funde”.

¹¹ Siguiendo el razonamiento seguido en el texto principal, traemos a colación lo señalado por el historiador del Derecho Paolo Grossi que, si bien habla desde el punto de vista del historiador, creemos también que se aplica también para aquel que busca analizar las instituciones jurídicas desde una perspectiva antropológica. Así, Grossi señala lo siguiente: “El historiador del derecho, en su función primaria de conciencia histórica del jurista dedicado al derecho positivo, desconfía de panoramas demasiado simples, recuerda que la complejidad es la riqueza de todo clima histórico, y así avanza legítimamente la sospecha que esa geometría simple es fruto de un sapiencial artificio, de que se resuelve en una construcción adulterada”. (Grossi: 2003, 42).

¹² Krotz (2002, 29), para quien la antropología “pone en crisis a la sociedad, pues exige que sea justificado explícitamente el orden vigente, el cual en mayor o menor medida es desenmascarado como posible de otra forma”.

relaciones sociales y económicas, por las fuerzas políticas y por los fenómenos culturales, desenmascarando en este modo la existencia de mitos ideológicos”. (Nader: 2003, 72).

En base a lo mencionado planteamos un estudio antropológico del Derecho que rebase los límites tradicionales, cuestionándonos en la presente tesis la manera cómo se desarrolla y ejerce la práctica jurídica en los estudios de abogados de Lima. El estudio antropológico realizado, ha buscado mediante la observación participante y la realización de entrevistas (ya sea libres o a profundidad) revelar como la práctica jurídica se desarrolla *en realidad*, la cual no solo se circunscribe al aspecto técnico, sino que también busca utilizar mecanismos informales e ilegales para su eficiente ejercicio.

2.2.2. Campo Jurídico

2.2.2.1. El entendimiento tradicional del Derecho

Tradicionalmente se entiende que el ejercicio del Derecho se encuentra circunscrito al plano estrictamente normativo; esto es, al entramado de relaciones jurídicas que se generan en virtud de la promulgación de las normas jurídicas. El ejercicio del derecho se enfocaría en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, las cuales establecen los parámetros de actuación en base a las cuales se deben resolver las controversias.

Lo mencionado anteriormente, se circunscribe dentro de un enfoque positivista del Derecho, desde el cual este y su práctica se encuentran delimitados por el ordenamiento jurídico formal. La subordinación del Derecho a la lógica positivista implica que este pueda ser concebido como una disciplina neutral e independiente, libre de toda influencia externa que contamine su creación y aplicación.

La labor del intérprete y del investigador, consistiría en entender al Derecho dentro del marco normativo impuesto por el Estado, desde el cual se establecen las normas jurídicas que regulan las instituciones sociales y desde el cual se establecen los parámetros en base a los cuales los sujetos deberán ejecutar sus conductas.

Ejemplo paradigmático de lo mencionado anteriormente, lo constituye la denominada “*Teoría Pura del Derecho*”, la cual aboga por una concepción normativista del Derecho, señalando que se identifica con la norma jurídica, expresada por el ordenamiento jurídico emanado desde el Estado. Es el Estado y solo el Estado el ente creador de normas jurídicas, las cuales representan lo que se debe entender por Derecho. Así, Kelsen al definir el objeto del Derecho señala:

“El derecho que constituye el objeto de la ciencia jurídica es el derecho positivo, ya se trate del derecho de un Estado particular o del derecho internacional. Solo un orden jurídico positivo puede ser descrito por las reglas de derecho y una regla de derecho se relaciona necesariamente con tal orden”. (Kelsen: 1982, 50).

Como se puede apreciar, según el enfoque positivista del Derecho, este se encuentra conformado por el orden jurídico positivo impuesto desde el Estado, reflejado en el ordenamiento jurídico estatal conformado por el conglomerado de normas jurídicas estatales. Para Kelsen, el Derecho está solo conformado por las normas jurídicas estatales, no existiendo lugar para dotar de “juricidad” a normas emanadas por otros organismos sociales.

Explicando el pensamiento de Kelsen, Pérez Luño señala lo siguiente:

“la teoría del derecho debe tomar como objeto de estudio al derecho en sí, es decir, al derecho en cuanto estructura

normativa autosuficiente, autorreferente y coherente. Para individualizar lo que diferencia al derecho de la realidad, Kelsen se remite a la distinción kantiana entre ser y deber ser, situando al derecho y a la ciencia jurídica en el campo del deber ser” (Pérez Luño: 2005, 49).

Se puede afirmar que la comprensión positivista del derecho tiene por objetivo trabajar en base a las normas jurídicas emitidas, las cuales en virtud de un silogismo lógico encuadran sus postulados a lo expresado en la realidad. El positivismo, por ende, concibe al Derecho como un conjunto de normas, las cuales encuentran su fundamento y correspondencia en el ordenamiento jurídico emitido desde el Estado.

El Derecho, reflejado por el conglomerado de normas que conforman el ordenamiento jurídico, se encuadraría dentro del plano del deber ser, en virtud del cual las normas establecen los parámetros de conductas que las instituciones y los sujetos de derecho deben seguir. El ordenamiento jurídico, por ende, se erige en la base que brinda sustento a toda decisión y acuerdo fundado en Derecho; esto es, a las decisiones adoptadas por la jurisprudencia y a los acuerdos a los que arriben los privados, mediante la celebración de contratos, etc.

El entendimiento positivista del Derecho si bien ha tenido desarrollos posteriores, que han entendido que el Derecho no solo debe ser entendido ni reducido únicamente a la norma jurídica, entiende que toda decisión y resolución que se adopte en Derecho, debe sustentarse en el ordenamiento jurídico emitido por el Estado, el cual constituye el fundamento de validez y juricidad de las decisiones adoptadas.

El positivismo, pues, constituye una de las corrientes más importantes dentro del Derecho y que, ciertamente, ha establecido los parámetros a partir de los

cuales se han elaborado los estudios y análisis que se han realizado por muchos años. En efecto, la enseñanza jurídica y el método de investigación que se ha incentivado con esta corriente, parten desde el análisis de las normas jurídicas, ya sea desde el plano exegético o también desde el plano dogmático, enfocándose en el estudio de instituciones jurídicas que tienen sustento y base en el ordenamiento jurídico emanado desde el Estado.

En la actualidad, desde nuestro punto de vista, el estudio del Derecho se encuentra inmerso en una comprensión dogmática y formalista, motivado por los mismos centros de enseñanza, quienes privilegian una formación legalista, en donde solo se procura la comprensión de textos jurídicos de manera positivista, concentrando la misma en su aplicación práctica (Gonzales: 2006; Wolkmer: 2003). Lo mencionado ha llevado a afirmar de manera certera que la formación jurídica a nivel latinoamericano encuentra sus raíces en el formalismo jurídico europeo (Courtis: 2003)¹³.

¹³ Así, Courtis (2003, 77-78) al analizar los fundamentos de la enseñanza del Derecho desde el formalismo jurídico europeo, señala lo siguiente:

“Desde el punto de vista del método de enseñanza, la tendencia hegemónica en la formación jurídica de la región reproduce los cánones del formalismo jurídico europeo:

- Se concede una importancia central a la memorización del contenido de normas, fenómeno que transmite un juicio implícito, sea del carácter “racional” de la legislación, sea de la legitimidad de su contenido;
- Se asigna particular énfasis a la enseñanza de “teorías generales” formalizadas, destinadas a dar cuenta de los rasgos fundamentales de cada rama o institución jurídica;
- El estudio de la jurisprudencia o derecho judicial tiene un lugar secundario, destinado simplemente a completar algunas dudas o puntos oscuros que puedan desprenderse de la exposición del “sistema” o de las “teorías generales”;
- Aún más recóndito es el espacio pedagógico concedido a la sociología normativa, al estudio de la efectividad de las normas vigentes o a la sociología de aquellas prácticas que reemplazan efectivamente las ordenadas normativamente por el derecho oficial vigente;
- Como consecuencia del efecto conjunto de la epistemología positivista y del énfasis pedagógico del formalismo, la discusión interdisciplinaria tiene un lugar nulo o marginal en la enseñanza del derecho. Esto redundo, por ejemplo, en la consideración del derecho oficial vigente como un dato fijo y en el escaso estímulo para discutir la legislación desde ángulos de justificación distintos a los de su mera vigencia, como el moral, político, económico, sociológico o antropológico;
- Por último, el lugar que ocupan en la enseñanza del derecho materias tales como la filosofía del derecho, la economía política, la sociología o la historia es también marginal, sirviendo apenas como barniz de “cultura general” que complementa el carácter central del aprendizaje de las materias codificadas”.

Creemos que una de las consecuencias de la importancia que el método positivista ha tenido dentro del Derecho es ciertamente la influencia de la dogmática y del legalismo en la enseñanza y aprendizaje del Derecho. En efecto, la enseñanza en base a lo expuesto a las normas jurídicas y a los libros de teoría y dogmática, han posibilitado que la práctica jurídica se circunscriba al entendimiento y comprensión del “deber ser” por encima del “ser” (realidad).

Lo mencionado anteriormente, ha sido manifestado de manera certera por Gorki Gonzales, quien al respecto señala lo siguiente:

“Varios años después de la experiencia de la reforma de los años setenta, la enseñanza en las facultades de Derecho del Perú parece haberse mantenido, en líneas generales, ajena y distante de las demandas sociales. Esta visión, articulada a la idea del Derecho como ciencia, se ha visto alimentada en el proceso pedagógico por la separación entre el saber teórico – o dogmática jurídica – y el sentido que el Derecho adquiere en su contacto con la vida social: el primero, correspondiente al ámbito de lo académico; el segundo, ubicado al margen de este”.
(Gonzales Mantilla: 2008, 39).

La cita de Gonzales Mantilla, nos refleja la influencia que el entendimiento positivista y dogmático del Derecho ha ejercido en nuestro país, en donde se tiene como consecuencia el divorcio existente entre la realidad jurídica proclamada en las normas emitidas por el Estado, así como la expuesta en las facultades y aulas universitarias, con la realidad extrajurídica, en donde se vislumbran todas las dinámicas y conflictos sociales que ciertamente el Derecho muchas veces no entiende¹⁴.

¹⁴ De la misma manera, resulta interesante lo afirmado por Hardt y Negri con respecto al pensamiento de Kelsen, que si bien lo analizan desde la perspectiva del Derecho Internacional, esclarecen la idea principal que animó el marco teórico del citado autor. Así, ambos autores afirman lo siguiente: “Kelsen creía que la construcción formal y la validez del

De la misma manera, Robert Gordon, señala al respecto lo siguiente:

“(...) los discursos jurídicos corrientes a menudo producen representaciones tan gravemente distorsionadas de la vida social, que sus categorías generalmente pasan por alto fenómenos tales como la complejidad, la variedad, la irracionalidad, la imprevisibilidad, el desorden, la crueldad, la coerción, la violencia, el sufrimiento, la solidaridad y el auto-sacrificio”. (Gordon: 2009, 525).

Una de las consecuencias, por ejemplo, de entender que el Derecho es solo producido desde el Estado es avalar su fundamento monista, consistente en reconocer que solo el Estado es el ente productor de las normas jurídicas, desconociendo fenómenos como lo es el denominado pluralismo jurídico¹⁵. El mito monista del Derecho ha sido cuestionado por nuevos aportes, los cuales buscan ampliar el concepto mismo de juridicidad, señalando que el Derecho no puede entenderse solamente con un conglomerado de normas jurídicas emitidas desde el Estado¹⁶.

sistema eran independientes de la estructura material que lo organizaba, pero de algún modo la estructura debe existir en la realidad y organizarse materialmente. ¿Cómo puede construirse el sistema en la realidad? Llegados a este punto, advertimos que el pensamiento de Kelsen ya no es útil: es meramente una utopía fantástica”. (Hardt y Negri: 2005, 26).

¹⁵ Una definición de Pluralismo Jurídico es la siguiente: “la coexistencia e interacción de diferentes ordenamientos normativos sobre las mismas situaciones sociales en un espacio geopolítico determinado (e.g., estado-nación, imperio, confederación). Basados en esta realidad, los teóricos de la pluralidad legal plantean una premisa central, a saber, que el derecho no es un monopolio del estado. Por eso afirman que en oposición a las teorías monistas sobre la vigencia de un sólo sistema legal en un espacio y tiempo determinado, lo que ocurre es que diversos “derechos” tienen vigencia social en forma simultánea y conflictiva. En rigor, esta pluralidad es una cualidad estructural de cualquier sociedad porque ninguna está completamente subordinada a una sola fuente productora de derecho” (Guevara Gil: 2009, 64).

¹⁶ Así, Ardila Amaya (2002, 53) señala lo siguiente: “Hoy puede reconocerse un conjunto de dinámicas diferencias de las del derecho estatal que compiten con él en la regulación social, para cuya definición se acude a la categoría de pluralismo jurídico. Con tal concepto se abarca una amplia diversidad de dinámicas sociales de regulación entre las que se destacan las que se dan al interior de las comunidades tradicionales, o en nuevas comunidades excluidas o marginalizadas; las que se emergen como resultado de la acción de los nuevos movimientos sociales; las que se presentan en casos de crisis institucional, e incluso, las que son el resultado de los procesos de globalización del capital”.

De la misma manera, la enseñanza dogmática y positivista del Derecho, amparados en los postulados de científicidad y neutralidad, invisibilizan los factores externos que intervienen en su creación y aplicación. Así, es importante tener en cuenta las críticas que Duncan Kennedy realiza a la dogmática y al positivismo, al afirmar lo siguiente:

“(...) Pero es muy importante subrayar que creer en una doctrina coherente y racional equivale a creer que las instituciones básicas del capitalismo son racionales y coherentes. Aseverar que la propiedad privada, los contratos y la responsabilidad civil son racionales es aseverar que el capitalismo es racional, que entendemos como racional un sistema basado estrictamente en la propiedad privada, el libre intercambio y la estricta limitación de toda clase de deberes colectivos o comunitarios de las personas entre sí”. (Kennedy: 2012, 29).

Lo mencionado anteriormente, acredita que las críticas que se le hacen a la concepción positivista y dogmática del Derecho no solo se enfocan en denunciar su falta de atención y análisis de la realidad social y cultural, sino también revelan el carácter conservador de dicho marco teórico, el cual no cuestiona la influencia política e ideológica que se plasma en la creación, entendimiento y aplicación del Derecho.

De la misma manera que Duncan Kennedy, Boaventura de Souza Santos manifiesta lo siguiente en torno al entendimiento del Derecho:

“El manejo reconstructivo de los excesos e insuficiencias de la modernidad no podía, sin embargo, ser realizado únicamente por la ciencia. Requería del concurso, subordinado pero fundamental, del derecho moderno. Tal participación era subordinada porque, como mencioné antes, la racionalidad moral

– práctica del derecho, para ser efectiva, debía rendirse a la racionalidad cognitivo-instrumental de la ciencia. Pero el papel del derecho fue fundamental porque, al menos a corto plazo, el manejo científico de la sociedad tenía que ser garantizado contra una eventual oposición mediante la integración normativa y la coerción suministradas por la ley. En otras palabras, la despolitización de la vida social a través de la ciencia se lograría mediante la despolitización de conflicto y de la rebelión social a través del derecho”. (De Souza Santos: 2009, 34).

Como se puede apreciar, las críticas antes citadas, revelan el componente ideológico del Derecho moderno, cuyo entendimiento está conformado por el análisis positivista y dogmático, los cuales al enfocarse en el análisis y estudio del ordenamiento jurídico y las instituciones jurídicas, dan cuenta que los resultados obtenidos (emisión, aplicación de normas, etc.) se dieron en base a consensos, dejando de lado el conflicto y la “politización” que entiende al Derecho como una disciplina en donde el poder se encuentra presente.

En base a lo mencionado, en la presente investigación adoptaremos un marco teórico distinto al que hemos tratado en el presente apartado, a efectos de entender y conceptualizar al Derecho. Así, daremos cuenta en el siguiente apartado del concepto de “campo jurídico” a efectos de reflejar el Derecho y su práctica.

2.2.2.2. Por una concepción amplia del estudio del Derecho. El campo jurídico

Como hemos podido apreciar, el enfoque positivista y tradicional del Derecho no toma en cuenta las dinámicas y las relaciones que se generan al momento de su creación y aplicación. El concebir al Derecho como un sistema cerrado e independiente impide poder apreciar el sustrato material que se presenta en

el ejercicio de la práctica jurídica, en base a la cual se puede apreciar que esta no puede concebirse de manera pura y neutral, existiendo diversas dinámicas y relaciones de poder que encuentran en el Derecho un mecanismo esencial para obtener notoriedad y acumular capital (Bourdieu: 2001). El capital al cual nos referimos puede ser tanto económico como simbólico; esto es, enfocado ya sea en la acumulación de dinero o en la obtención de una posición de prestigio¹⁷.

El capital a obtener desde nuestro punto de vista busca obtener una posición de poder, desde la cual los agentes que logran obtener una posición de supremacía o de monopolio en el campo, llegan a imponer sus condiciones, estableciendo todo un sistema de reglas en base al cual pueden desarrollar sus prácticas (Foucault: 1999).

En base a lo mencionado, preferimos hablar de la existencia de un campo jurídico, en el cual existe una constante lucha entre los operadores jurídicos por alcanzar capital y poder. Antes de ello, es preciso definir qué es lo que se entiende por campo, el cual en palabras de Bourdieu:

“puede ser definido como una red o una configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones están objetivamente definidas, en su existencia y en las determinaciones que imponen sobre sus ocupantes, agentes e instituciones, por su situación presente y potencial (*situs*) en la estructura de distribución de espacios de poder (o capital) cuya posesión ordena el acceso a ventajas específicas que están en juego en el campo, así como por su relación objetiva con otras posiciones (dominación, subordinación, homología, etcétera”. (Bourdieu y Wacquant: 2008, 134-135)

¹⁷ Bourdieu (2001, 133): “En efecto, es imposible dar cumplida cuenta de la estructura y el funcionamiento del mundo social a no ser que reintroduzcamos el concepto de *capital en todas sus manifestaciones*, y no solo en la forma reconocida por la teoría económica”.

Como se puede apreciar, el concepto de campo implica la existencia de un determinado espacio social que se encuentra conformado por agentes e instituciones, quienes actúan conforme a determinadas reglas y proposiciones, las cuales establecen los parámetros de actuación y de la existencia del propio campo. A efectos de estudiar un determinado campo, siguiendo a Bourdieu, es preciso proceder en tres momentos:

“Primero, se debe analizar la posición del campo frente al campo de poder (...) Segundo, es necesario trazar un mapa de la estructura objetiva de las relaciones entre las posiciones ocupadas por los agentes o instituciones que compiten por la forma legítima de autoridad específica del campo. Y, tercero, hay que analizar los habitus de los agentes, los diferentes sistemas de disposiciones que han adquirido al internalizar un determinado tipo de condición social y económica, condición que se encuentra en su trayectoria dentro del campo oportunidades más o menos favorables de actualización” (Bourdieu y Wacquant: 2008, 143).

Un punto importante a tomar en consideración es que la existencia de un campo implica, necesariamente, la lucha interna que se establece entre los agentes, los cuales buscan incesantemente una posición de supremacía en el campo, a efectos de poder obtener primacía y determinar las reglas que conllevarán al desarrollo del campo. Así, se afirma que “el campo es el locus de relaciones de fuerza – no solo de significado – y de luchas que apuntan a transformarlo, y por tanto de cambio ilimitado” (Bourdieu y Wacquant: 2008, 142).

En este aspecto, es importante tomar en cuenta lo mencionado por Bourdieu, que al respecto señala que:

“en el campo jurídico se desarrolla una lucha por el monopolio del derecho a decir el derecho, es decir, por establecer cuál es la buena distribución (nomos) o el buen orden. Lucha en que se enfrentan agentes investidos de una competencia inseparablemente social y técnica, consistente en lo esencial en la capacidad socialmente reconocida de interpretar (de manera más o menos libre o autorizada) un cuerpo de textos que consagran la visión legítima, recta, del mundo social” (Bourdieu: 2000, 161).

El campo jurídico involucra a actores que se desarrollan en la práctica jurídica, desde los que tienen el poder de crear y promulgar el Derecho, aquellos que tienen el poder de interpretar e impartir teorías, hasta los que utilizan el Derecho en el desarrollo de su ejercicio profesional. Dicho campo está lejos de constituirse en un conjunto de prácticas guiadas o desarrolladas bajo el plano estrictamente normativo, puesto que se encuentra conformado por un conjunto de relaciones que rebasan el plano formal desde el cual tradicionalmente se entiende el Derecho. La lucha en la que se encuentran inmersos los actores jurídicos implica el conocimiento de las reglas y normas que regulan el campo, lo cual permite que los operadores jurídicos puedan actuar en base a un *habitus*¹⁸.

Las relaciones antes mencionadas buscan obtener una posición de primacía en el ejercicio, interpretación y aplicación del Derecho, puesto que con su actuación se puede llegar a obtener una posición de poder que posibilite la obtención de beneficios. Así, desde las relaciones que se tejen desde el plano académico por el posicionamiento de teorías y doctrinas¹⁹ hasta aquellos que

¹⁸ Bourdieu (1990, 136): “Para que funcione un campo, es necesario que haya algo en juego y gente dispuesta a jugar, que este dotada de los *habitus* que implican el conocimiento y reconocimiento de las leyes inmanentes al juego, de lo que está en juego, etcétera”.

¹⁹ Así, el estudio de Bourdieu (2008) con respecto a la academia francesa y a las relaciones de poder que se tejían en base a ella.

en el ejercicio técnico del Derecho buscan una mayor participación y ganancias en el mercado, como lo es el caso de los estudios de abogados.

Siguiendo el marco teórico elaborado por Bourdieu, García Villegas al referirse al campo jurídico, señala lo siguiente:

“El derecho es un campo social – conjunto de relaciones objetivas e históricas entre posiciones de actores sociales que compiten por poder o capital – en el cual los participantes luchan por la apropiación del poder simbólico que está implícito en los textos jurídicos. Así, el derecho se convierte en la forma por excelencia del poder simbólico – y de violencia simbólica – dada las posibilidades que tienen sus practicantes para crear instituciones, y con ellas, realidades históricas y políticas mediante el simple ejercicio de poner nombres. La dinámica interna del campo está asociada con la cuestión de la dominación. El potencial del derecho para establecer clasificaciones que son esenciales en el orden social – legal/ilegal, justo/injusto, verdadero/falso – implica un enorme poder político. La autoridad legal es la forma privilegiada del poder, especialmente en términos de violencia simbólica legítima – monopolizada por el Estado, la cual es producida y practicada por el Estado”. (García Villegas: 2010, 236).

El poder simbólico antes mencionado, se desprende de la capacidad de nombrar con la que cuenta el Derecho, la cual como hemos podido apreciar, cuenta con el poder de decidir qué cosa es o no lo correcto, así como la posibilidad de crear instituciones, lo cual lleva a que los sujetos que intervienen en el campo jurídico se encuentren en una situación de constante lucha por el manejo y protagonismo en la creación y regulación de dichas instituciones.

Las luchas a las cuales se aluden en el campo jurídico se vislumbran en las distintas teorías que se enfrentan en la academia jurídica, los distintos lobbys que se realizan al momento de la promulgación y emisión de normas; así como en la competencia de los distintos operadores jurídicos (estudios de abogados) que se desarrolla en el mercado a efectos de obtener mayor cantidad de clientes. El espacio de lucha del cual hablamos, constituye un lugar dinámico y en constante actuación, en donde los agentes protagonistas utilizan diversas estrategias (legales e ilegales) que les permitirán alcanzar una posición de predominio en el sector en donde se desempeñen²⁰.

El campo jurídico, por ende, viene a ser un constante enfrentamiento entre los operadores jurídicos quienes buscan obtener *poder*, entendido como una posición de supremacía frente a los demás operadores, con quienes compiten a efectos de gozar de los beneficios y ganancias esperadas. El poder al fin y al cabo es una posición que permite la creación de realidades, las cuales subsumen a los distintos agentes en las teorías y/o prácticas que se ejercen (Foucault: 1999).

Creemos que entender al Derecho como un campo en el cual nos encontramos frente a una lucha constante entre operadores que buscan una posición de supremacía frente al resto, nos brinda un marco de análisis mucho más amplio que nos permitirá entender las razones y el sustento que motiva las actuaciones que los agentes desarrollan en el campo en el que se encuentran inmersos²¹.

²⁰ Un estudio en donde se revela las dinámicas del espacio de lucha al cual nos referimos en el texto principal en un nivel internacional, es el libro de Dezalay y Garth (2002).

²¹ Al respecto, resulta completamente aplicable lo señalad por Foucault, que en relación a la teoría del conocimiento, señala lo siguiente: "Si se quiere realmente conocer el conocimiento, saber que es, captarlo en su raíz, en su producción, uno debe acercarse no tanto a los filósofos, cuanto a los políticos, se debe comprender cuales son las relaciones de lucha y poder. Únicamente en estas relaciones de lucha y de poder; en el modo como las cosas y los hombres se odian, luchan, intentan dominarse unos a otros, quieren ejercer relaciones de poder unos sobre otros, es como se comprende que en consiste el conocimiento". (Foucault: 1999, 181).

Lo mencionado anteriormente nos invita a pensar de manera más amplia el aspecto de lo jurídico, el cual no solo se debe enfocar en la promulgación y mera interpretación y aplicación de normas jurídicas. Lo jurídico rebasa el plano formal establecido desde el Estado, abarcando también el conjunto de redes y relaciones que se establecen a efectos de poder obtener un espacio de poder en el campo en el cual los agentes se desarrollan²².

El concepto de campo jurídico que adoptamos en la presente investigación nos ayudará a desmitificar postulados que tradicionalmente se han mantenido firmes en el entendimiento del Derecho. Así, compartimos lo mencionado por Fortich y Moreno para quienes:

“lo específico del campo jurídico es la ilusión de neutralidad, de universalidad, de autonomía, de desinterés (incluso bajo la apariencia de interés general) que constituye discursos y rige prácticas, construyendo imaginarios, representaciones y redes de significación de los ocupantes del campo.” (Fortich y Moreno: 2012, 49).

En base a lo mencionado, compartimos la manera de entender el campo jurídico por parte de Boaventura de Souza Santos (1998, 19) para quien este

²² De manera similar a lo señalado por Bourdieu en el texto principal, pero desde un marco teórico distinto, Vincenzo Ferrari, teniendo como sustento la denominada “teoría de los roles”, refiere lo siguiente: “Los roles jurídicos, diferenciados de esta manera, tienden a consolidarse dando vida a grupos de individuos que los comparten y, si bien con amplias variaciones, a status sociales comparables. Estos grupos son más fuertes y coherentes mientras más sus roles y status de pertenencia corresponden a posiciones socialmente privilegiadas en términos de disponibilidad económica, influencia política o prestigio cultural.

Una de las tareas típicas de la sociología del derecho consiste en estudiar estos grupos en sus articulaciones internas, en sus relaciones recíprocas, así como también en las relaciones que ellos establecen con cualquier otro agregado social. Se trata de complejas redes de interacciones sociales, cuyo estudio resulta fundamental para comprender sociológicamente no solo el fenómeno jurídico, sino más en general el ordenamiento político de una sociedad. El derecho, en efecto, es el principal reflejo simbólico, no solo del sentimiento común y de la moralidad difusa en una sociedad, sino también de la distribución del poder: que es también, sino sobre todo, poder de crear, interpretar y aplicar normas jurídicas”. (Ferrari: 2006, 182-183).

se encuentra constituido por una “constelación de legalidades (e ilegalidades) diversas, que operan en espacios y tiempos locales, nacionales y transnacionales”. La definición citada, revela el sentido del concepto asumido en la presente investigación, la cual como podemos apreciar rebasa el plano formal y normativo sobre el cual se sustenta y desarrolla la teoría tradicional de Derecho.

El concepto aquí adoptado nos va a permitir apreciar las distintas dinámicas y relaciones que se constituyen de manera paralela al plano formal de ejercicio de la práctica jurídica. Los sujetos de nuestra investigación buscan decididamente obtener una posición importante dentro del campo de prestación de servicios legales, por lo que utilizan toda una serie de técnicas adicionales a la defensa técnica en un litigio judicial, a efectos de obtener la mayor cantidad de resultados positivos en los casos patrocinados.

2.2.3. Enfoques de la corrupción

Esbozar una definición de corrupción representa una empresa difícil, toda vez que los diversos estudios que se han enfocado en el tema, se sustentan en marcos teóricos que proveen su propia definición y entendimiento de lo que se entiende por dicho fenómeno. No existe hasta el momento una definición unánime que pueda representar el fenómeno que nos encontramos tratando en el presente estudio.

Dado ello, se han planteado diversos enfoques de lo que se entiende por corrupción. Así, podemos hablar de estudios que se centran en el aspecto económico de la corrupción, otros que buscan entender su incidencia desde el plano institucional, analizando las diversas instituciones públicas que propician el fomento de prácticas corruptas, y otros enfoques que tratan de encontrar una explicación cultural e histórica a la incidencia de prácticas corruptas.

Los enfoques antes mencionados van a ser tratados en el siguiente apartado. No obstante, antes de empezar ello, es preciso señalar que dichos enfoques asumen que la corrupción constituye una práctica transgresora, es decir, una práctica que implica el quebrantamiento de normas legales y/o sociales. En base a ello, podemos afirmar en primer lugar que la corrupción constituye una práctica que se ejercita en violación a determinadas normas. Dicha violación se realiza en atención a determinados incentivos, los cuales motivan a que los agentes infractores recurran a prácticas corruptas para obtener determinados beneficios (ya sea patrimoniales o no).

Nos parece bastante interesante e ilustrativa la definición esbozada por Malem Seña para quien:

“se puede definir los actos de corrupción, entonces, como aquellos que constituyen la violación, activa o pasiva, de un deber posicional o del incumplimiento de alguna función específica realizados en un marco de discreción con el objeto de obtener un beneficio extraposicional, cualquiera sea su naturaleza”. (Malem Seña: 2002, 35).

La definición antes esbozada, nos presenta una definición amplia de lo que se entiende por corrupción, la cual se presenta, en primer lugar, como un acto de transgresión y de violación, dado que nos encontramos ante una actuación que vulnera normas, ya sean de carácter legal o social. En segundo lugar, no circunscribe a la corrupción en un determinado escenario como sí lo hacen diversos estudios que la enfocan sólo desde el lado público, olvidando que las prácticas corruptas se generan y se presentan también en el sector privado.

En tercer lugar, nos parece rescatable en la definición anteriormente citada el hecho de que la obtención del beneficio derivado de la ejecución de prácticas corruptas no se circunscribe solo al aspecto monetario o económico, toda vez

que se hace referencia a que el beneficio obtenido puede ser de cualquier naturaleza. Así, la obtención de un cargo importante derivado de una práctica corrupta no implica la obtención de un beneficio de carácter económico, sino simbólico.

Los aspectos antes mencionados (la corrupción como transgresión, la amplitud de su incidencia y la obtención de un beneficio) deben ser tomados en cuenta a efectos de analizar los actos que nos proponemos estudiar, los cuales nos revelan que el ejercicio de prácticas corruptas puede realizarse en espacios privados, siendo los propios agentes privados quienes buscan formar parte de las distintas redes de corrupción que se tejen en diversos escenarios.

En base a lo mencionado, en los siguientes apartados analizaremos los distintos enfoques que han tratado de analizar y explicar a la corrupción.

2.2.3.1. Enfoque económico de la corrupción

Los estudios sobre la corrupción, en su mayoría, han estado enfocados en analizar el aspecto económico; es decir, en explicar las consecuencias y los efectos negativos que ha significado el desvío de fondos públicos mediante la actuación de prácticas corruptas. Estas investigaciones se han concentrado en estudiar las implicancias de la corrupción en la economía, con la finalidad de mostrar cómo estos han mermado el crecimiento económico y el desarrollo en los diferentes países.

El análisis mencionado, se desarrolla en el estudio del espacio público, el cual al estar íntimamente relacionado con el presupuesto público ha dado lugar a que diversos funcionarios opten por gestionar beneficios privados utilizando su investidura. Un ejemplo del enfoque antes mencionado, constituyen los estudios elaborados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y Organismos no Gubernamentales como Transparencia Internacional, los

cuales analizan constantemente las pérdidas que ocasiona la corrupción en la economía de distintos países, afirmando que la corrupción constituye el principal obstáculo de desarrollo y crecimiento económico para los países subdesarrollados.

Una pregunta típica que obedece al análisis de la corrupción desde un enfoque económico es la planteada por Fernández quien señala:

“¿Qué hubiera pasado con el crecimiento del PBI potencial si los recursos derivados hubiesen sido invertidos en proyectos públicos o privados? Se confirma que la corrupción tiene un impacto negativo en el crecimiento económico y se muestra que se puede llegar a perder hasta poco menos de 1% de crecimiento económico anual por casos de corrupción sistémica”.
(Fernández: 2005, 245)

La pregunta antes mencionada, nos presenta el marco sobre el cual trabajan los estudios orientados hacia el enfoque económico de la corrupción, los cuales buscan determinar las consecuencias económicas que se ocasionan a consecuencia del ejercicio de prácticas corruptas. Dicho cuestionamiento tiene por objetivo analizar la utilización de los cargos públicos en beneficio privado, desviando la finalidad para lo cual estos se han instituido.

En base al enfoque antes mencionado, se ha definido a la corrupción como “*el abuso del poder público para la obtención de un beneficio privado*”. Dicha definición ha sido adoptada por organizaciones internacionales como lo es el caso del Banco Mundial y Transparencia Internacional, así como por distintos estudiosos que se han enfocado en analizar a la corrupción desde una perspectiva económica y pública. Así, tenemos la definición adoptada por Kaufmann, quien manifiesta lo siguiente:

“Dentro del marco de nuestros estudios definimos como corrupción como “el abuso de un cargo público para obtener beneficios personales”. Vale decir, y de acuerdo con esta definición, la corrupción siempre involucra a un funcionario público. Esto implica incluir las relaciones deshonestas entre el sector privado y el sector público. Queda fuera de este marco el fraude que ocurre solo dentro del sector privado”. (Kaufmann: 2000, 368)

De la misma manera, tenemos la definición de Van Klaveren, quien presenta a la corrupción:

“como la utilización de cargos públicos como una plataforma para obtener ingresos ilegales. El ingreso del servidor público corrupto depende, en este caso, de las condiciones del mercado y sus habilidades para extraer la mayor cantidad de recursos de la demanda del público. En este caso, el servidor público opera como un monopolista que maximiza su renta”. (Arjona Trujillo: 2002, 3).

Como se puede apreciar, las definiciones citadas encuadran a la realización de prácticas corruptas dentro del sector público, puesto que todo acto de corrupción, según su entender, tiene como protagonista a un funcionario público, quien debido al cargo que ostenta, hace mal uso de los fondos públicos destinados a su cargo.

El enfoque económico de la corrupción, como se puede apreciar, se esfuerza en demostrar que la corrupción se encuentra enquistada en el sector público, siendo los funcionarios que forman parte de la carrera pública, los principales protagonistas y responsables de la realización de prácticas corruptas dentro del Estado. Estos funcionarios, según este enfoque, realizan un análisis y

valoración de los incentivos y costos con los que cuentan a efectos de realizar prácticas corruptas, accediendo a su realización debido a la posición privilegiada con la que cuentan.

Finalmente, como hemos podido apreciar al inicio, el enfoque estudiado se preocupa en describir y determinar cuáles han sido las pérdidas que se han generado como consecuencia de la realización de prácticas corruptas, teniendo como objetivo también, la realización de una adecuada cuantificación de los costos que implican la realización de actos corruptos.

2.2.3.2. Enfoque institucional y neoinstitucional de la corrupción

Desde el plano institucional, también se ha pretendido entender y estudiar a la corrupción. Así, según este enfoque “las deficiencias en las instituciones políticas, económicas y sociales estimulan las conductas corruptas y no instituyen mecanismos de detección y sanción” (Aroche: 2005, 232).

Lo mencionado, enfoca el problema de la corrupción en la debilidad de las instituciones públicas, las cuales no son lo suficientemente sólidas, puesto que no han desarrollado mecanismos adecuados que puedan neutralizar la realización de prácticas corruptas. Ante instituciones débiles, estas no encuentran mayor resistencia, toda vez que se desarrollan sin poder ser fiscalizadas.

De la misma manera, manifestar que “la corrupción no es un problema que tenga que ver sólo con las personas; es decir no es un tema cultural ni un dilema moral, sino que es un asunto estructural e institucional”, a efectos de proponer que “para combatir la corrupción, es indispensable lograr que ser corrupto deje de ser una decisión más provechosa que el ser honesto. Para lograr eso, se requiere reformar las instituciones antes que persuadir o

intimidar a las personas”²³, nos revela un marco teórico institucional, dado que se pone énfasis en el estudio y análisis de las instituciones, manifestando que una buena y eficiente regulación sobre estas, mermará la actuación de prácticas corruptas.

Así, siguiendo la perspectiva institucionalista, se ha manifestado que:

“la posibilidad de que se produzcan actos corruptos se incrementará si el marco institucional, o las normas establecidas por un gobierno, no establecen los incentivos y los medios de cumplimiento obligatorios y adecuados para evitar que los funcionarios públicos y los usuarios perciban mayores ventajas por infringir las normas que por cumplirlas” (Izaga Gómez: 2005, 20).

Este enfoque también ha sido promovido por organismos internacionales como lo son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, quienes han señalado que una de las causas principales de la corrupción es el mantenimiento de instituciones débiles, las cuales deben ser objeto de una reforma en donde no se permita la existencia de prácticas corruptas en el seno del Estado. Al igual que el enfoque económico, las reformas que se plantean desde este marco teórico tienen por finalidad reducir la burocracia y establecer canales más ágiles de acercamiento entre los privados y el sector público.

En atención a lo mencionado en el párrafo anterior, se plantea la necesidad de reformar las instituciones públicas. Ejemplo saltante de este enfoque es el brindado por Kaufmann para quien:

²³ <http://altavoz.pe/2013/05/02/opinion/editorial/la-corrupcion-es-un-problema-institucional-no-un-problema-moral/>

“Reformas eficaces en este ámbito incluyen la creación de instituciones profesionales independientes; la introducción de un sistema integral de gestión del desempeño, según el cual las remuneraciones y los ascensos dependan del desempeño de los funcionarios; niveles de remuneraciones del personal de gerencia y profesional competitivos con los del sector privado, y simplificar, monetizar y definir con transparencia las bonificaciones y los beneficios no pecuniarios”. (Kaufmann: 2000, 379).

De la misma manera que se ha hablado desde un punto de vista institucional, también se ha tratado a la corrupción desde un enfoque denominado neoinstitucional. A criterio de Ortiz de Zevallos y Calderón, este marco teórico plantea lo siguiente:

“La aparición del marco de análisis neoinstitucional permite combinar elementos culturales y económicos para un mejor análisis de este fenómeno. El aporte de este enfoque va mucho más allá de un refinamiento cultural de la aproximación microeconómica”. En base a ello, para los autores mencionados “el enfoque neoinstitucional parte de afirmar que los agentes económicos maximizarán sus beneficios, en el marco de las reglas de juego formales e informales (instituciones) que perciben como vigentes y exigibles”. (Ortiz de Zevallos y Calderón: 2005, 132).

Como se puede apreciar, el enfoque antes mencionado presta atención no solo a las instituciones, sino también a los actores, teniendo en cuenta su comportamiento y la manera cómo actúan de acuerdo a los incentivos que se presenten. Para ello, buscan analizar el contexto y las influencias que este puede tener con respecto a las decisiones que se adopten, no agotando el

análisis en el estudio de las instituciones públicas, las cuales deben ser analizadas en contexto, poniendo énfasis en las actuaciones de los agentes.

El denominado enfoque neoinstitucional es consciente que el solo entendimiento económico del fenómeno que se analiza, no brinda soluciones adecuadas y eficientes al entendimiento y realización de las prácticas corruptas. Para ello, se parte por ir más allá de la estructura y estudiar las características y la fisionomía de los acuerdos corruptos (Boehm y Graf Lambsdorff: 2009).

2.2.3.3. Enfoque histórico y cultural de la corrupción

Por último, tenemos estudios que han tratado de explicar y entender a la corrupción desde un enfoque histórico y cultural, en donde se han estudiado los matices que identifican a las sociedades que conviven con la corrupción. Así, en nuestro país tenemos el documentado e interesante estudio de Quiroz, para quien la presencia de una cultura de corrupción en nuestro país, puede encontrar explicación en las prácticas clientelistas desarrolladas y promovidas desde la Colonia, las cuales se han mantenido durante la historia republicana de nuestro país.

Al respecto, el referido estudio señala lo siguiente:

“la historia del Perú ha sido en parte la historia de sucesivos ciclos de corrupción, seguidos por periodos sumamente breves de reformas anticorrupción, interrumpidos por intereses creados contrarios a la reforma. Según los cálculos estimados mostrados, en el largo plazo (1820 a 2000), estas sucesivas olas de corrupción podrían haber implicado la pérdida directa o indirecta, el desvío o la mala asignación de fondos equivalentes a un promedio de entre 30 o 40 por ciento de los gastos

gubernamentales, y de entre 3 y 4 por ciento del producto bruto interno. Estas inmensas pérdidas debidas a la corrupción representarían entre el 40 y 50 por ciento de las posibilidades de desarrollo del país en el largo plazo (considerando que para que este tenga lugar, debe alcanzarse un crecimiento sostenido de entre 5 y 8 por ciento del PBI). Los costos institucionales no cuantificables de la corrupción también fueron enormes. No ha habido ningún periodo o ciclo histórico de poca o baja corrupción: todos los ciclos examinados estuvieron caracterizados por indicadores de corrupción moderadamente altos y hasta muy altos”. (Quiroz: 2013, 424-425).

El documentado estudio de Quiroz, revela que en nuestro país el ejercicio de prácticas corruptas ha estado presente durante toda nuestra historia republicana, la cual ha sido afectada en diversa medida dependiendo de los ciclos de corrupción presentados. La corrupción, por ende, se ha instituido casi como una práctica común y cotidiana, en donde lo verdaderamente extraño es la no presencia de prácticas corruptas.

A efectos de entender porque vivimos en una sociedad en donde la corrupción se encuentra presente, tenemos lo manifestado por Gonzalo Portocarrero, para quien estamos inmersos en una “sociedad de cómplices”, en donde se tolera la transgresión a la Ley y no existe ningún respeto por la autoridad. Así, el citado sociólogo señala que: “para una conceptualización más potente de la sociedad de cómplices es necesario definirla como un contrato social imaginario. Es decir, una fantasía colectiva que autoriza a todo el mundo a hacer lo que le viene en gana” (Portocarrero: 2005, 121).

En base a lo mencionado en el párrafo anterior, el mismo autor señala al respecto que:

“en una sociedad como la peruana, donde la ley pública no tiene prestigio, están dadas las condiciones para que la desviación deje de ser excepcional para convertirse en un comportamiento institucionalizado en una regla. Entonces, la corrupción y el abuso con los débiles se convierten en hechos normales, aceptados como naturales e inevitables. Se desarrolla así una tolerancia con la transgresión que socava el orden moral y dificulta cualquier empresa común, pues fragmenta la sociedad en grupos que le dan la espalda a los valores y normas que supuestamente todos estamos obligados a acatar”. (Portocarrero: 2010, 190)

Al hablar del enfoque cultural de la corrupción se apunta inevitablemente a la realización de un análisis antropológico de esta, en donde se estudien las prácticas transgresoras como parte de una denominada cultura de la corrupción. Así, Huber plantea la necesidad de un estudio antropológico de la corrupción, desde a la cual se la entiende:

“no como una práctica objetiva, con índices estandarizados y mensurables, sino como “categoría cultural”, con significados distintos para gente diferente y por razones diferentes, que además varían con el tiempo y que pueden ser comprendidos sólo en su contexto sociocultural e histórico específico” (Huber: 2005, 23).

De la misma manera que lo planteado por Huber, tenemos lo señalado por Haller y Shore, quienes brindan interesantes razones por las cuales se debe realizar un estudio antropológico de la corrupción. Así, los citados autores señalan lo siguiente:

“En primer lugar, la corrupción plantea cuestiones de gran importancia conceptual y epistemológica. Si la antropología se ocupa de la comprensión de las reglas y normas que rigen la conducta social, entonces una buena manera de explorar estos códigos es examinar las instancias en donde estas son violadas, cómo la gente reacciona a tales transgresiones, y las estrategias y tácticas que los actores utilizan para negociar entre las diferentes normas y reglas (...) estudiar la corrupción y sus manifestaciones culturales provee una óptica para examinar problemas políticos y sociales más complejos, incluyendo concepciones sobre ciudadanía, estilos de gobierno y la construcción del Estado como una entidad imaginaria” (Haller, Dieter y Shore Cris: 2005, 8)²⁴.

Como se puede apreciar, un estudio antropológico de la corrupción nos ayudará a entender la manera como los actores realizan prácticas corruptas y como con su actuar transgreden las normas establecidas. La manera como se conducen los sujetos al ingresar en las redes de corrupción existentes, los códigos de conducta que impone el ejercicio de prácticas corruptas, así como las reglas impuestas desde la ilegalidad en el ejercicio de dichas prácticas, pueden ser develadas gracias a la antropología, la cual como bien lo señala la cita antes mencionada, se encarga de analizar, desmenuzar y comprender las conductas desplegadas por actores en un determinado lugar o espacio.

La descripción y comprensión de las reglas que rigen las prácticas corruptas pueden ser obtenidas gracias al trabajo etnográfico, que constituye el principal método de investigación propuesto desde la antropología. Así, certeramente se ha señalado lo siguiente:

²⁴ Traducción del autor.

“La antropología, como una subdisciplina de las ciencias sociales, tiene un inventario de instrumentos metodológicos adecuados para analizar lo habitualmente oculto y comunicarse con las ilegítimas e ilegales prácticas de corrupción. Como una primera aproximación a un campo en el que la corrupción no es muy conocido o descrito, a fin de formular nuevas hipótesis y comprobar la aplicabilidad de las teorías existentes derivados de otros estudios, los métodos de campo utilizados por la antropología son especialmente fructíferos”. (Tone Kristin Sissener: 2001, 5)²⁵.

2.2.3.4. Enfoque adoptado en la investigación

Como se puede apreciar, existen distintos enfoques desde donde se ha analizado el fenómeno de la corrupción, los cuales tratan de explicar según, cada cual su marco teórico, las causas y las consecuencias de esta. Todo ello a efectos de brindar propuestas que puedan coadyuvar a aminorar los actos de corrupción que se cometen asiduamente.

Desde nuestro punto de vista la corrupción, de manera general, debe ser analizada desde distintos ángulos, teniendo en cuenta las distintas aristas que revelan a la corrupción ciertamente como un fenómeno complejo. A nuestro juicio, la corrupción no puede ser tratada de manera aislada, existiendo la necesidad de utilizar diversos enfoques que nos puedan brindar una explicación amplia del fenómeno que nos encontramos estudiando. Lo mencionado, aboga por una comprensión interdisciplinaria del fenómeno de la corrupción, toda vez que nos encontramos ante un fenómeno que a lo largo de nuestra historia se ha encontrado presente.

²⁵ Traducción del autor.

El hecho de analizar a la corrupción de manera aislada tiene como consecuencia:

“la complejidad de la corrupción, las dificultades de encontrar siquiera una definición del término que aplique satisfactoriamente a entornos políticos y culturales divergentes, ha cedido a la divulgación universal y homogeneizante de las normas de la racionalidad occidental, en detrimento de un análisis crítico de los orígenes, las dinámicas y los impactos de la corrupción en contextos desiguales. En suma, la inmensa cantidad de estudios sobre la corrupción que se ha producido en los últimos diez o quince años se caracteriza por una cierta tendencia hacia la simplificación y un enfoque que busca soluciones de laboratorio y no tanto una comprensión del problema” (Huber: 2005,3).

Como se puede apreciar, el análisis de la corrupción no puede ser realizado de manera aislada y simplificada. Es preciso tener en cuenta las relaciones y las redes que se tejen en base a ella, en donde los actores hacen uso de estas a efectos de obtener réditos y beneficios. Así, Quiroz (2013, 30) señala lo siguiente:

“La corrupción constituye, en realidad, un fenómeno amplio y variado, que comprende actividades públicas y privadas. No se trata tan solo del tosco saqueo de los fondos públicos por parte de unos funcionarios corruptos como usualmente se asume. La corruptela comprende el ofrecimiento y la recepción de sobornos, la malversación y la mala asignación de fondos y gastos públicos, la interesada aplicación errada de programas y políticas, los escándalos financieros y políticos, el fraude electoral y otras transgresiones administrativas (...)”.

El estudio de la corrupción, por tanto, debe llevarse a cabo mediante un enfoque amplio, en donde se entienda que esta no se ejecuta en un solo determinado espacio de actuación, como lo entienden aquellos que ubican su presencia dentro de la esfera netamente pública, omitiendo el ejercicio de prácticas corruptas en el sector privado (Huber: 2005, 17; Mateo: 2005, 314). De la misma manera, no se puede pretender entender y explicar a la corrupción, teniendo en cuenta solo las pérdidas económicas que genera o señalando que la causa de su realización obedezca a la debilidad de las instituciones existentes, como es el caso de los enfoques económico (Soto: 2003, 5; Durand: 2005, 289) e institucional y neoinstitucional de la corrupción.

Es preciso entender que el ejercicio de la corrupción implica una serie de actuaciones y prácticas que obedecen a lógicas predispuestas y creadas que se han venido practicando durante mucho tiempo, las cuales se han ido sofisticando a tal punto que es posible encontrar redes que involucran a toda una serie de actores que participan y obtienen beneficios y ventajas de la realización de dichas prácticas.

En base a lo mencionado, creemos que el ejercicio de estas prácticas corruptas debe ser entendido en su *dinámica*, es decir en *real su actuación*, desentrañando las razones por las cuales estas se gestan de manera constante, al punto de haberse convertido en muchas ocasiones en formas naturalizadas del ejercicio de la práctica cuya realización se da en relaciones corruptas.

Teniendo en cuenta lo manifestado, compartimos lo mencionado por Mujica, quien señala que “hay que intentar entender la corrupción como si se tratara de un modo de relacionarse, como un vínculo, como la formación de sistemas de relaciones sociales, con un sentido y con una lógica de acción” (Mujica: 2005, 32).

En base a ello, podemos entender que el ejercicio de las prácticas corruptas se genera en redes²⁶, en relaciones que implican la existencia de dos o más partes que entienden la lógica de actuación de las prácticas a realizarse. Nos encontramos frente a toda una dinámica de acciones que tienen por finalidad transgredir los canales formales y legales de actuación, lo cual resulta un obstáculo para que los agentes infractores puedan conseguir los beneficios deseados. Por tal razón, la corrupción no puede ser analizada, por ejemplo, únicamente mediante el enfoque institucional, toda vez que resulta necesario ir más allá de los canales formales e institucionales, siendo necesaria el estudio de los actores y sus prácticas.

El estudio de las redes de corrupción que se generan en el ejercicio de las prácticas corruptas no puede ser estudiado desde un solo enfoque. Es necesario entender que nos encontramos frente a prácticas que se vienen desarrollando por la iniciativa de los propios agentes, quienes incentivan y recurren al ejercicio de dichas prácticas, aun cuando los resultados o beneficios a obtener, pueden ser conseguidos mediante la utilización de los canales formales.

Ahora bien, si bien entendemos y valoramos la importancia de los aportes expuestos por cada uno de los enfoques que tratan de entender y explicar a la corrupción, manifestamos que para la presente investigación ha sido particularmente relevante la perspectiva antropológica en el estudio y análisis de esta. En efecto, desde nuestro punto de vista la antropología no solo nos brinda herramientas teóricas que nos ayudarán a comprender y explicar la realización de prácticas corruptas, sino también nos proporciona herramientas metodológicas que nos ayudarán a obtener la información esencial para

²⁶ Así, Ugarteche (2005, 112): “Un elemento central de las conductas corruptas es que se hacen en red (...) En líneas generales, no es posible un funcionario corrupto aislado o un ministro aislado o un general corrupto. En grandes líneas, la corrupción funciona sobre la base de un traslado de información que le permite a un agente externo al Estado completar la información para una operación desde adentro del mismo en beneficio del cliente privado”.

proceder a analizar las prácticas que constituyen el objeto de estudio. El trabajo de campo desarrollado por la antropología resulta relevante para entender las prácticas que se ejercen en las redes de corrupción, más aún cuando nos encontramos ante un terreno en donde la ilegalidad es manifiesta²⁷.

Adicionalmente a lo mencionado, y como ya lo hemos manifestado anteriormente, un estudio antropológico de la corrupción nos enseña la inexistencia de un significado universal y unívoco del concepto corrupción, el cual puede ser entendido de diferentes maneras dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Así, se manifiesta al respecto lo siguiente:

“Creemos que la antropología tiene mucho que ofrecer a los debates sobre la corrupción. En particular, nos puede ayudar a entender lo que significa la corrupción en diferentes partes del mundo y de la forma en que está incrustado en la vida cotidiana; ¿por qué la intolerancia a la corrupción es mayor en algunos lugares que en otros? ¿Cómo se ha institucionalizado y producido en todos los aspectos de la vida social? (...)” (Haller, Dieter y Shore, Cris: 2005, 8)²⁸.

Si queremos señalar los aportes que la perspectiva antropológica brinda al estudio de la corrupción, podemos resumirla en tres aspectos: i) El entendimiento cultural del fenómeno “corrupción”, ii) Análisis de las tácticas y estrategias utilizadas por los actores en el ejercicio de prácticas corruptas y iii) Entendimiento de la perspectiva de los actores.

²⁷ Así Guber señala lo siguiente: “A diferencia de lo que ocurre cuando se utilizan instrumentos tales como encuestas y entrevistas formalizadas – que exigen a los sujetos alterar, siquiera momentáneamente sus actividades habituales – el antropólogo intenta pasar desapercibidos, valiéndose de técnicas menos intrusivas de recolección de datos” (Guber: 2004, 68).

²⁸ Traducción del autor.

Ya hemos manifestado sobre el componente “cultural” que la disciplina antropológica brinda al estudiar a la corrupción, poniendo énfasis en el análisis contextual al entender que no es posible brindar un concepto universal ni homogéneo de la corrupción, así como también debemos entender qué tipo de prácticas se circunscriben como “corruptas” en el espacio en el que se desarrolla el estudio (Huber: 2005).

Un punto que queremos resaltar y que, efectivamente, constituye un aporte fundamental desde la antropología en el estudio y análisis de la corrupción, es la atención que se brinda a las tácticas y estrategias que los actores realizan con la finalidad de violentar los canales formales y regulares a efectos de cometer actuaciones corruptas (Torsello: 2014). En efecto, la antropología cuenta con las herramientas metodológicas adecuadas para visibilizar y dar cuenta de las prácticas corruptas que se cometen. Así, mediante la inmersión del investigador en el campo a través de las herramientas de investigación cualitativa (observación participante, entrevistas libres, a profundidad, etc.), se puede advertir y describir la manera como los actores ejecutan prácticas corruptas (Andres and Nujten: 2007).

La descripción detallada de las prácticas que el investigador realiza constituye la visibilización de las técnicas y estrategias utilizadas por los actores, teniendo en cuenta que el ejercicio de prácticas corruptas implica la actuación y funcionamiento de redes de corrupción, las cuales cuentan con determinados códigos de conducta que permiten la generación de actuaciones corruptas (Torsello: 2011, Blundo: 2017)²⁹. Es preciso mencionar que para la realización de la presente investigación, se ha tenido muy cuenta este aporte que la

²⁹ En torno al riesgo al cual se encuentra sujeto el investigador al describir las prácticas corruptas, resulta relevante lo estipulado por Blundo (2007, 24): “El riesgo para el observador/descriptor es ser atraído solo por la espectacular dimensión de la “visible” corrupción, esto es por negocios sensacionalistas, o por los escándalos que los hacen visibles en los periódicos. Una buena descripción de las prácticas de corrupción debe, por el contrario, devolverlos a su vanidad, cotidianeidad, ordinaria dimensión y ambivalencia”. (Traducción del autor).

Antropología brinda al estudio de la corrupción, toda vez que en la etnografía elaborada describimos y detallamos una serie de actuaciones corruptas que los estudios de abogados de Lima realizan en los litigios llevados a cabo ante el Poder Judicial.

Asimismo, el enfoque antropológico de la corrupción permite entender la perspectiva de los actores en la ejecución de actuaciones corruptas. La utilización de herramientas cualitativas en el trabajo de campo permite apreciar la racionalidad de los actores y la construcción de sus narrativas frente a la realización de actuaciones corruptas (Gupta: 2005). En la presente investigación, tratamos de entender por qué los estudios de abogados, conformadas por personas con formación universitaria, realizan actuaciones corruptas en las redes de corrupción que se establecen.

En atención a lo mencionado, queremos manifestar que entendemos que el análisis y estudio de la corrupción debe tener en cuenta los enfoques que, desde distintas disciplinas, se han construido para explicarla, toda vez que nos encontramos frente a un fenómeno social de carácter amplio y general. Sin embargo, manifestamos que el enfoque antropológico, a través de las herramientas teóricas y metodológicas de la antropología ha sido sumamente importante para la elaboración de la etnografía que presentamos, dado que en virtud a la observación participante y a la realización de entrevistas libres y a profundidad, se ha podido describir y visibilizar de manera detallada, las prácticas corruptas que los estudios de abogados de Lima realizan en los procesos judiciales llevados a cabo ante los distintos órganos del Poder Judicial.

2.3. Descripción de Términos Centrales

Los conceptos fundamentales que hemos utilizado en la presente tesis son los siguientes:

- **Estudio de Abogados:** Entendemos por Estudio de Abogados a aquella sociedad civil formada por profesionales del Derecho que tienen por finalidad brindar servicios de carácter jurídico, como lo es el patrocinio de procesos judiciales, así como la consultoría y asesoría legal en general.

La asesoría brindada por un estudio de abogados, implica el asesoramiento a personas naturales y jurídicas desde distintas especialidades, las cuales se circunscriben ya sea desde la óptica del Derecho Privado (Derecho Civil, Derecho Comercial, etc.) o del Derecho Público (Derecho constitucional, Derecho Penal, etc.).

El estudio de abogados al ser una sociedad civil, se encuentra integrado por profesionales del Derecho, quienes desde sus respectivas especialidades buscan brindar soluciones eficientes a los clientes. No obstante, no solo un estudio de abogados se encuentra conformado por profesionales del Derecho, sino también por personal administrativo, tramitadores y estudiantes de derecho, quienes colaboran en las distintas tareas dirigidas a la prestación del servicio jurídico brindado por la institución.

Para la elaboración de la etnografía que sustenta la tesis se tuvo en cuenta el estudio de casos, reflejado en el análisis de cuatro estudios de abogados, cuyo detalle y explicación específico se puede observar en el apartado referido al “estudio de casos” del presente trabajo.

- **Campo Jurídico:** En este aspecto, es importante tomar en cuenta lo mencionado por Pierre Bourdieu, que al respecto señala que:

“en el campo jurídico se desarrolla una lucha por el monopolio del derecho a decir el derecho, es decir, por establecer cuál es la

buena distribución (nomos) o el buen orden. Lucha en que se enfrentan agentes investidos de una competencia inseparablemente social y técnica, consistente en lo esencial en la capacidad socialmente reconocida de interpretar (de manera más o menos libre o autorizada) un cuerpo de textos que consagran la visión legítima, recta, del mundo social” (Bourdieu: 2000, 161).

El campo jurídico involucra a actores que se desarrollan en la práctica jurídica, desde los que tienen el poder de crear y promulgar el Derecho, aquellos que tienen el poder de interpretar e impartir teorías, hasta los que utilizan el Derecho en el desarrollo de su ejercicio profesional. Dicho campo está lejos de constituirse en un conjunto de prácticas guiadas o desarrolladas bajo el plano estrictamente normativo, puesto que se encuentra conformado por un conjunto de relaciones que rebasan el plano formal desde el cual tradicionalmente se entiende el Derecho. La lucha en la que se encuentran inmersos los actores jurídicos implica el conocimiento de las reglas y normas que regulan el campo, lo cual permite que los operadores jurídicos puedan actuar en base a un *habitus*³⁰.

- **Práctica Jurídica:** En el desarrollo de la presente tesis, hemos aludido al concepto de práctica jurídica, toda vez que el objetivo que pretendemos alcanzar con la investigación es describir, explicar y entender la relación existente entre práctica jurídica y corrupción en los estudios de abogados de Lima.

Entendemos por práctica jurídica al ejercicio de la actividad desarrollada por los abogados litigantes en ejecución de la actividad profesional. En

³⁰ Bourdieu (1990, 136): “Para que funcione un campo, es necesario que haya algo en juego y gente dispuesta a jugar, que este dotada de los *habitus* que implican el conocimiento y reconocimiento de las leyes inmanentes al juego, de lo que está en juego, etcétera”.

ese sentido, cuando aludimos al concepto de práctica jurídica, queremos incidir las actividades que los abogados litigantes realizan en los litigios judiciales llevados a cabo ante cualquiera de las instancias del Poder Judicial.

La práctica jurídica a la cual aludimos en la presente tesis, se enfoca en las actividades desplegadas por los estudios de abogados de Lima, quienes interactúan con los diversos órganos e instancias del Poder Judicial, en el desarrollo de los litigios que tienen a su cargo.

- **Redes de Corrupción:** Como lo hemos señalado en los capítulos anteriores, para el desarrollo de la presente tesis, compartimos la opinión de Malem Seña, quien define a la corrupción de la siguiente manera:

“se puede definir los actos de corrupción, entonces, como aquellos que constituyen la violación, activa o pasiva, de un deber posicional o del incumplimiento de alguna función específica realizados en un marco de discreción con el objeto de obtener un beneficio extraposicional, cualquiera sea su naturaleza”. (Malem Seña: 2002, 35)

De lo mencionado, entendemos por corrupción a aquellos actos que implican una transgresión de normas, en virtud del cual el agente infractor busca obtener un beneficio, el cual no necesariamente resulta ser económico. Asimismo, entendemos que la corrupción se desarrolla mediante la existencia de redes, las cuales permiten que los sujetos intervinientes puedan conseguir los objetivos propuestos mediante el ejercicio de las prácticas corruptas.

No obstante, en la presente tesis no solo nos abocamos a entender y explicar lo que se entiende por corrupción, sino más bien por entender y explicar cómo actúa las distintas redes de corrupción que se relacionan con la práctica jurídica. Así, entendemos por redes de corrupción a aquel entramado de relaciones, cuya dinámica implica el ejercicio de prácticas corruptas. La corrupción como fenómeno, se desarrolla y actúa en base a redes, gracias a las cuales se pueden conseguir los resultados esperados.

El ejercicio de prácticas corruptas se actúa gracias al conjunto de relaciones existentes, las cuales hacen posible que los resultados esperados pueden ser conseguidos gracias a los contactos que se generan al entrar y formar parte de estas redes de corrupción. Compartimos la opinión esbozada por Jaris Mujica, para quien:

“La corrupción, por tanto, cobra un sentido fundamental, pues funciona no solo como una mera actividad económica y de interés personal, sino que es un mecanismo de construcción de redes y, a su vez, uno de los canales que deben ser lubricados para poder recrear y mantener las uniones entre estas”. (Mujica: 2011, 152).

Como se puede apreciar, el conocimiento y estudio de las redes de corrupción a las cuales hacemos referencia en el presente apartado, resulta fundamental para el entendimiento de las prácticas corruptas que nos proponemos analizar, toda vez que estas se circunscriben y se desarrollan dentro de una serie de relaciones que posibilitan el conseguimiento de resultados eficientes de manera paralela a los canales formales existentes.

- **Cultura de corrupción:** Entendemos por cultura de corrupción a una serie de prácticas con rasgos y patrones comunes que tienen como objetivo la obtención de resultados (cual sea su naturaleza), los cuales no se conseguirán siguiendo los canales formales, sino transgrediendo una serie de normas de carácter social y jurídico, las cuales de manera paralela se constituyen en prácticas institucionalizadas gracias a su regularidad.

La cultura de la corrupción implica la existencia de un imaginario social mayor, en el cual los ciudadanos son conscientes de la existencia de prácticas corruptas, las cuales forman parte de su código de conducta, llegando a justificar y entender la racionalidad, importancia y, en muchos casos, la necesidad de realización de dichas prácticas.

Lo mencionado anteriormente, ha llevado a Portocarrero a conceptualizar a nuestra sociedad peruana, como una “sociedad de cómplices”. Así, el citado autor refiere al respecto:

“¿De una sociedad de cómplices a una sociedad de ciudadanos? Una sociedad de cómplices tolera la transgresión. Todos tenemos rabo de paja, todos moramos en el fango. Nadie puede tirar la primera piedra. La transgresión que hoy disculpo en el otro es la misma que mañana yo mismo puedo cometer. Mi disponibilidad de evadir la ley me compromete a no exigir moralidad a los otros. Todos somos solidarios en la culpa. Estamos enfeudados a la admiración que nos despierta el vivo, el que la sabe hacer. Una admiración secreta, un deseo de estar en su lugar, nos hace sentir que seríamos inconsecuentes e hipócritas si juzgamos y descalificamos al transgresor”. (Portocarrero: 2005, 119).

Como se puede apreciar, la existencia de una cultura de la corrupción implica necesariamente el entendimiento y comprensión de una sociedad que tolera la transgresión, y que como tal, admite y justifica la realización de prácticas corruptas.

- **Etnografía:** Entendemos por etnografía a aquella descripción que busca explicar y comprender las manifestaciones advertidas como consecuencia de la realización de un trabajo de campo, el cual en el caso de la antropología, lo constituye la denominada observación participante. La etnografía, viene a ser la herramienta que da cuenta de la observación realizada, en cuya descripción se encontrará la caracterización del objeto observado, así como su comprensión y análisis.

Al respecto, nos parece interesante la definición compartida por Guber, quien señala lo siguiente:

“En suma las etnografías no sólo reportan el objeto empírico de investigación -un pueblo, una cultura, una sociedad— sino que constituyen la interpretación/descripción sobre lo que el investigador vio y escuchó. Una etnografía presenta la interpretación problematizada del autor acerca de algún aspecto de la "realidad de la acción humana". (Guber: 2001, 4).

En base a lo mencionado, la etnografía en el presente caso, tendrá como finalidad la descripción y entendimiento de las prácticas corruptas que se desenvuelven en el ejercicio de la práctica jurídica desarrollado por los estudios de abogados de Lima en los litigios llevados a cabo ante el Poder Judicial.

2.4. Hipótesis

La hipótesis que esbozamos en la presente investigación supone que la corrupción y las relaciones que se tejen en torno a ella, constituyen un elemento importante y, en muchos casos esencial, para el ejercicio de la práctica jurídica desarrollada por los estudios de abogados de Lima en los litigios llevados a cabo en el Poder Judicial.

El desarrollo de la hipótesis será tratado en los siguientes capítulos de la presente investigación.

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA

3.1. Tipificación de la Investigación

La presente tesis es de carácter cualitativo, toda vez que es el resultado de la observación participante y de la realización de entrevistas libre y a profundidad que realizamos en nuestra permanencia constante en el campo a efectos de obtener una comprensión profunda de la temática que abordamos.

Al respecto, es necesario definir qué es lo que entendemos por una investigación de carácter cualitativo. Así, siguiendo a Vasilachis, compartimos lo siguiente:

“(…) Las investigadoras e investigadores cualitativos indagan en situaciones naturales, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en los términos del significado que las personas les otorgan. La investigación cualitativa abarca el estudio, uso y recolección de una variedad de materiales empíricos –estudio de caso, experiencia personal, introspectiva, historia de vida, entrevista, textos observacionales, históricos, interaccionales y visuales– que describen los momentos habituales y problemáticos y los significados en la vida de los individuos”. (Vasilachis: 2006, 24-25).

Siguiendo a Vasilachis, consideramos que el proceso de investigación cualitativa supone lo siguiente:

“a) la inmersión en la vida cotidiana de la situación seleccionada para el estudio, b) la valoración y el intento por descubrir la perspectiva de los participantes sobre sus propios mundos, y c) la consideración de la investigación como un proceso interactivo

entre el investigador y esos participantes, como descriptiva y analítica y que privilegia las palabras de las personas y su comportamiento observable como datos primarios”. (Vasilachis: 2006, 26).

Como se puede apreciar, una investigación de carácter cualitativo se preocupa por describir y explicar el comportamiento de los actores en el contexto estudiado, a efectos de poder determinar las motivaciones y racionalidades de sus actuaciones, para lo cual será fundamental que el investigador vaya al campo e interactúe en el contexto analizado.

La observación participante y la realización de entrevistas libres y estructuradas son el arma fundamental que el investigador cualitativo tiene a efectos de obtener los datos que servirán de sustento para la realización de la investigación. Con los datos recogidos en campo y su respectivo procesamiento y análisis, se tendrán las herramientas para proceder a elaborar el respectivo informe de campo.

La estancia del investigador en campo es el signo distintivo de la investigación cualitativa, la cual a diferencia de la práctica cuantitativa, le interesa mucho más las aseveraciones brindadas por los sujetos con los cuales interactúa en el campo, quienes son los protagonistas que coadyuvarán al investigador a dilucidar las preguntas de investigación que busca responder. Tal como lo señala Vasilachis, “La fuerza particular de la investigación cualitativa es su habilidad para centrarse en la práctica real in situ, observando cómo las interacciones son realizadas rutinariamente”. (Vasilachis: 2006, 26), siendo esta relacional, basándose, fundamentalmente, en la comunicación. (Vasilachis: 2006, 36).”

La observación de los sujetos en su naturalidad, en el desarrollo de las actividades que se busca describir, explicar y comprender, así como la

comunicación que se llegue a establecer con ellos, son las tareas fundamentales que el investigador busca en el campo. La observación desplegada, permitirá al investigador participar de las actuaciones estudiadas, pudiendo establecer relaciones y comunicación con los sujetos estudiados, con la finalidad de obtener la información que le permitirá expresar los datos recolectados en un informe etnográfico.

Así, la relación existente entre investigador y los sujetos de estudio ha sido referida como una característica especial de las investigaciones cualitativas, existiendo un espacio de reflexividad importante en el análisis de la información percibida en base a dicha relación. Al respecto, resultan esencial lo señalado por Flick, quien manifiesta:

“los métodos cualitativos toman la comunicación del investigador con el campo y sus miembros como una parte explícita de la producción de conocimiento, en lugar de excluirla lo más posible como una variable parcialmente responsable. Las subjetividades del investigador y de aquellos a los que se estudia son parte del proceso de investigación. Las reflexiones de los investigadores sobre sus acciones y observaciones en el campo, sus impresiones, accesos de irritación, sentimientos, etc., se convierten en datos propios de derecho, formando parte de la interpretación, y se documentan en diario de investigación o protocolos de contexto”. (Flick: 2004, 20).

El tipo paradigmático de la investigación cualitativa es la etnografía, la cual es el resultado de la instancia del antropólogo en el campo, quien busca dar cuenta de las actividades desplegadas por los “otros”. Tal como lo hemos citado en el capítulo anterior, entendemos por etnografía “la interpretación/descripción sobre lo que el investigador vio y escuchó. Una

etnografía presenta la interpretación problematizada del autor acerca de algún aspecto de la "realidad de la acción humana". (Guber: 2001, 4).

Si bien se han efectuado críticas y se ha cuestionado la autoridad de los informes etnográficos desde la llamada antropología interpretativa o postmoderna³¹, es necesario recalcar que las herramientas metodológicas antes señaladas (observación participante y realización de entrevistas) no dejan de ser el arma fundamental de la investigación cualitativa. La presencia del investigador en el campo y el contacto que este establece con los sujetos de estudio, es una labor que es reconocida como una característica fundamental de los estudios cualitativos.

Si nos preguntamos, finalmente, que es lo que busca desentrañar la investigación cualitativa o a qué tipo de preguntas se busca responder siguiendo dicha metodología, resulta por demás claro lo señalado por Vasilachis, quien al respecto manifiesta que:

“La investigación cualitativa se interesa por la vida de las personas, por sus perspectivas subjetivas, por sus historias, por sus comportamientos, por sus experiencias, por sus interacciones, por sus acciones, por sus sentidos, e interpreta a todos ellos de forma situada, es decir, ubicándolos en el contexto particular en el que tienen lugar. Trata de comprender dichos

³¹ Al respecto, James Clifford señala: “Si la etnografía produce interpretaciones culturales a partir de intensas experiencias de investigación, ¿Cómo es que la experiencia, no sujeta a reglas, se transforma en informe escrito autorizado? ¿Cómo es, precisamente, que un encuentro transcultural, locuaz y sobredeterminado, atravesado por relaciones de poder y desencuentros personales, puede ser circunscrito como una versión adecuada de “otro mundo” más o menos discreto, compuesto por un autor individual?

Al analizar estas complejas transformaciones se debe tener en mente el hecho de que la etnografía está atrapada en la red de la escritura. Esta escritura incluye, mínimamente, una traducción de a experiencia a una forma textual. Este proceso está complicado por la acción de múltiples subjetividades y de constricciones políticas que se encuentran más allá del control del escritor. En respuesta a estas fuerzas, la escritura etnográfica pone en juego una estrategia de autoridad específica”. (Clifford: 2001, 42-43).

contextos y sus procesos y de explicarlos recurriendo a la causalidad local". (Vasilachis: 2006, 33).

Al ser catalogada la presente investigación como una de carácter cualitativo, significa que el resultado etnográfico que presentamos ha sido consecuencia del trabajo de campo desplegado por un lapso aproximado de dos años, en el cual hemos aplicado la técnica de la observación participantes y hemos mantenido una relación cercana con los sujetos a quienes hemos entrevistado, ya sea mediante entrevistas libres o a profundidad.

Asimismo, debemos manifestar que nuestra experiencia en el ejercicio práctico de la abogacía ha servido de fuente importante para la elaboración de la presente investigación. La experiencia obtenida, nos ha ayudado a ubicarnos en el campo y a establecer las relaciones respectivas para el recojo de información en campo.

Lo mencionado acredita que, para la elaboración de la presente tesis, se han utilizados las herramientas características de toda investigación cualitativa, a saber: i) la presencia del investigador en campo (observación participante), ii) el establecimiento de relaciones con sujetos que interactúan en el campo estudiado y iii) el aporte invaluable de la experiencia personal como fuente esencial de información para la recolección de datos.

3.2. Diseño de Investigación

El diseño de la presente investigación es de carácter flexible; es decir, que para el desarrollo de la investigación no se ha seguido un parámetro lineal ni una estructura que haya fijado desde un inicio el recorrido de la investigación realizada. El diseño plasmado permitió que en el transcurso de la investigación se puedan hacer modificaciones y replanteamientos que ayudaron a un mejor abordaje de la problemática tratada.

Lo mencionado anteriormente, acredita que nos encontramos ante un diseño flexible, el cual se ha definido de manera certera del siguiente modo:

“El concepto de flexibilidad alude a la posibilidad de advertir durante el proceso de investigación situaciones nuevas e inesperadas vinculadas con el tema de estudio, que puedan implicar cambios en las preguntas de investigación y los propósitos; a la viabilidad de adoptar técnicas novedosas de recolección de datos; y a la factibilidad de elaborar conceptualmente los datos en forma original durante el proceso de investigación. Este proceso se desarrolla en forma circular; opuesto, por lo tanto, al derrotero lineal unidireccional expuesto anteriormente. Por lo tanto, la idea de flexibilidad abarca tanto al diseño en la propuesta escrita, como al diseño en el proceso de la investigación”. (Mendizábal: 2006, 67).

En efecto, el diseño de investigación flexible permite al investigador tener mayor libertad en el proceso de investigación, dado que no se encuentra sujeto a parámetros que condicionen el decurso de esta³². La flexibilidad a la que aludimos permite que el problema de investigación, así como las preguntas y objetivas puedan replantarse, siendo bastante provechosa la variedad de perspectivas que este diseño de investigación provee para el desempeño de esta.

Lo mencionado anteriormente, ha sido señalado por Mendizábal, quien señala las principales características de este diseño de investigación:

³² A diferencia del diseño de investigación flexible, tenemos al diseño estructural, el cual es definido como: “un plan o protocolo línea riguroso, con una secuencia unidireccional, cuyas fases preestablecidas se sucede en el tiempo y las realizan quizá diferentes personas; esta secuencia se inicia con los propósitos de la investigación hasta arribar a la recolección y análisis de los datos. Parte de objetivos finales precisos, un marco teórico que delimita y define conceptualmente su campo de estudio, y una metodología rigurosa para obtener datos comparables. Este diseño no podrá ser modificado en el transcurso del estudio y solo captará aquello que los conceptos operacionalizados delimiten”. (Mendizábal: 2006, 66).

“Una de las características fundamentales del tipo de investigación cualitativa que deseamos presentar, dentro de la gran diversidad de sus manifestaciones, es la de ser principalmente emergente, inductiva, más que fuertemente configurada; por lo tanto el diseño flexible presentado es el que propicia esta particularidad. Durante el transcurso de la indagación el investigador podrá estar abierto a lo inesperado, modificará sus líneas de investigación y los datos a recabar en la medida en que progresa el estudio, y será proclive a revisar y modificar imágenes y conceptos del área que estudia. Además, los datos producidos con este diseño flexible son descriptivos, ricos, son las palabras de los entrevistados, ya sea habladas o escritas, y/o la conducta observable; el análisis de la información es no matemático; se intenta captar reflexivamente el significado de la acción atendiendo a la perspectiva del sujeto o grupo estudiado; la información surge de la actitud naturalista del investigador al realizar el trabajo de campo, ya que interacciona con las personas en su propio ambiente y habla su lenguaje (por lo tanto está lejos del laboratorio o de las aulas, que serían no naturales), y utiliza una multiplicidad de métodos para registrar datos; se aborda en forma holística las situaciones sociales complejas y es indicada para analizar sus procesos y trayectorias”. (Mendizábal: 2006, 68-69).

El carácter inductivo de la investigación, hace que no se parta de postulados generales y abstractos que conduzcan el proceso de investigación. Como bien lo señalan Taylor y Bogdan:

“La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar

modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. En los estudios cualitativos los investigadores siguen un diseño de investigación flexible. Comienzan sus estudios con interrogantes solo vagamente formulados”³³. (Taylor y Bogdan: 1994, 20).

El presente trabajo ha contado ciertamente con un diseño flexible, puesto que durante la etapa de investigación y del trabajo de campo, hemos podido reformular postulados que en un inicio no estaban previstos en el presente trabajo. No obstante, debido al diseño empleado, hemos podido acoplar nuevas perspectivas que han permitido que la etnografía elaborada pueda ser presentada.

3.3. Observación Participante

El método que hemos utilizado para la elaboración de la presente investigación es la “observación participante”, que constituye la herramienta metodológica más importante de la investigación antropológica. Es mediante dicho método de trabajo, que hemos podido obtener la información que presentamos en el siguiente capítulo, en donde damos cuenta de las prácticas corruptas que los estudios de abogados de Lima, utilizan en el ejercicio de su práctica profesional.

Siguiendo a Guber, podemos señalar lo siguiente:

³³ Siguiendo a Taylor y Bodgan, ellos establecen las siguientes características de la investigación cualitativa: i) La investigación cualitativa es inductiva, ii) En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas en una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo, iii) Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio, iv) Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas, v) El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones, vi) Para el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas, vii) Los métodos cualitativos son humanistas, viii) Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez de su investigación, ix) Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y las personas son dignos de estudio y x) La investigación cualitativa es un arte. (Taylor y Bodgan: 1994, 20-23).

“La observación participante consiste en dos actividades principales: observar sistemática y controladamente todo aquello que acontece en torno del investigador, se tome parte o no de las actividades en cualquier grado que sea, y participar, tomando parte en actividades que realizan los miembros de la población en estudio o una parte de ella”. (Guber: 2004, 172).

De lo manifestado por Guber, podemos entender que la observación participante se encuentra conformada por dos dimensiones: Observar detalladamente el contexto y las prácticas que constituyen el objeto de la investigación y, participar, es decir, ser parte y tomar acción en las relaciones que se instauran en el contexto estudiado. Hablamos, por tanto, de un binomio metodológico si cabe el término, en el cual el sujeto cognoscente no se contenta con desarrollar un plano meramente contemplativo, sino que también busca y se esfuerza, en participar de las acciones que se desenvuelven dentro del contexto estudiado.

La observación participante no implica solo la mera observación contemplativa, ni la participación irreflexiva en las relaciones que uno busca estudiar; implica ante todo una preparación que busque entrar en el campo con una serie de herramientas que coadyuven a delimitar y facilitar el objeto de estudio. Así, concordamos con lo señalado por Ameigeiras, quien señala lo siguiente:

“La observación participante constituye el eje vertebrador del trabajo de campo a partir del cual se lleva a cabo la construcción del producto etnográfico. Si bien existen distintas técnicas de observación, la llamada «observación participante» (OP) supone un tipo de propuesta en la cual intervienen distintas técnicas y métodos, vinculados tanto con formas de observación, modalidades de interacción, como tipos de entrevistas. En

cuanto metodología que supone la combinación de distintas técnicas, la OP constituye un método complejo y riguroso de desarrollar el trabajo de investigación en el campo". (Ameigeiras: 2006, 124).

La observación participante, por ende, implica poseer una adecuada preparación, la cual debe ser realizada desde un plano teórico como metodológico. El plano teórico implica el manejo de herramientas teóricas que nos ayuden a entender y contextualizar el objeto de estudio. De allí, que la ejecución de la herramienta metodológica materia de comentario, no le baste solo con observar de manera pura y contemplativa el objeto estudiado, el cual por más que sea "la realidad", necesita inexorablemente de un marco teórico desde donde se pueda partir para realizar un adecuado análisis y procesamiento de datos.

De la misma manera, la participación del investigador en las situaciones y relaciones que son objeto de estudio, no pueden ser realizadas desde un enfoque meramente empirista, confiando en que la experiencia y el registro de acciones obtenido resulta más que suficiente para la construcción del conocimiento etnográfico. La participación del investigador, implica también, la utilización de herramientas metodológicas adicionales (entrevistas estructuradas o a profundidad, entrevistas libres, etc.) que coadyuven a poder registrar datos e información que coadyuve a entender, describir y explicar el objeto de estudio.

Lo mencionado en los párrafos anteriores, tienen por finalidad develar el carácter eminentemente reflexivo que tiene la ejecución de la observación participante. En efecto, la observación participante, lejos de ser una herramienta que sea utilizada desde un marco teórico positivista, implica ante todo una actividad de mucha interpretación y reflexividad, dado que lo que se busca conseguir es información, la cual se presenta a través de datos y

acciones que deben ser adecuadamente interpretadas y procesados por el investigador. Es por dicha razón que compartimos lo señalado por Guber, quien al respecto señala lo siguiente:

“En resumen, la observación participante ha sido replanteada en su lógica interna, en tanto técnica de obtención de información y metodología de producción y elaboración de datos; en una y otra el investigador desempeña un papel central que se orienta a registrar – por cualquier vía – material del referente empírico. Si la participación es entendida como una instancia necesaria de aproximación a los sujetos, que entraña la reciprocidad de comunicación y de sentidos, no tiene por qué ubicarse en la antípodas de la observación, la cual puede ser entendida, a su vez, como la disposición general del investigador hacia lo real: su conocimiento. Hablaremos, pues, de la observación participante concibiendo a dicho conocimiento no como una captación inmediata de lo real, sino como una elaboración reflexiva teórico-empírica que emprende el investigador en el seno de relaciones con sus informantes”. (Guber: 2004, 184).

La observación participante, por ende, “implica ir más allá de la recolección de información y ligar la información teórica y metodológica desde el principio de reflexividad” (Vélez y Galeano: 2002, 41). Reflexividad es la característica esencial que identifica y acompaña a la ejecución de la observación participante en campo, toda vez que mediante dicha actividad se obtendrá, procesará e interpretará la información que servirá de base para la construcción de la etnografía propuesta.

En el trabajo de campo ejecutado para la presente investigación, el diseño y la realización de la observación participante ha sido fundamental para la realización de la etnografía esbozada en el último capítulo de la tesis. En

efecto, la etnografía realizada ha tenido como sustento, el trabajo de observación participante que se ha realizado en los espacios de desarrollo de la práctica jurídica privada, mediante la observación de la construcción y acción de las redes de corrupción existentes entre los estudios de abogados de Lima (sector privado) y los diversos organismos del Poder Judicial (sector público).

El diseño de la etnografía realizada ha tenido lugar gracias a la preparación teórica que ha implicado un análisis de los principales estudios sobre la manera cómo operan las distintas redes de corrupción existentes, así como las diversas teorías que tratan de explicar las diversas consecuencias que la generación de actos corruptos producen en detrimento de la sociedad. Todo ello, con la finalidad de entender como el fenómeno de la corrupción incide también en la práctica del Derecho, lo cual ha sido visibilizado, principalmente, en las redes de corrupción que se presentan en el sector público.

Asimismo, la realización del trabajo de campo ha implicado el diseño de un modelo de entrevista, a efectos de conseguir la información necesaria que alimentará el objetivo de la presente investigación y constatará la hipótesis planteada. El hecho de haber ejercido la práctica jurídica por un buen tiempo en estudios de abogados de Lima y conocer el manejo y las actuaciones ejercidas en las redes de corrupción facilitó, en cierta manera, la obtención de la información que se presenta en el capítulo siguiente.

Teniendo en cuenta lo mencionado en los párrafos anteriores, resulta pertinente lo mencionado por James Clifford, quien señala lo siguiente:

“Observación participante sirve como taquigrafía para un oscilar continuo entre el “adentro” y el “afuera” de los sucesos: por un lado, atrapar empáticamente el sentido de acontecimientos y gestos específicos; por el otro, dar un paso atrás para situar esos

significados en contextos más amplios. De esta manera los sucesos particulares adquieren una significación más profunda o más general, reglas estructurales, etcétera. Literalmente entendida, la observación participante es una fórmula paradójica y equívoca, pero se la puede tomar en serio si se la reformula en términos hermenéuticos como una dialéctica entre la experiencia y la interpretación”. (Clifford: 2001, 53).

El desarrollo del trabajo de campo para la realización de la presente etnografía fue accesible debido al rol que desempeñábamos en el ejercicio de nuestra profesión de origen. En efecto, el investigador al momento de ingresar a campo debe cumplir un rol que le permita tener acceso al fenómeno que busca estudiar. En nuestro caso, el hecho de ser abogado de profesión facilitó el análisis de la relación existente entre corrupción y práctica jurídica.

En efecto, la reflexividad es uno de los puntos centrales del trabajo de campo realizado, el cual toma como una de sus fuentes la experiencia como asistente y abogado en estudios de abogados que pudimos obtener al estudiar y finalizar la carrera de Derecho. El rol que desempeñamos nos ayudó a comprender de mejor manera el fenómeno estudiado y a dilucidar la información de más utilidad para la elaboración de la investigación. La observación participante se sustentó en el rol de investigador efectuado al momento de realizar el trabajo de campo y, a su vez, en ser parte del objeto materia de estudio.

Asimismo, cabe mencionar que el registro de información contó con el consentimiento de los informantes, quienes accedieron a las entrevistas libres y a profundidad que les realizamos, a efectos de registrar los casos más relevantes que se generaban como consecuencia de la relación entre corrupción y práctica jurídica. La información brindada sobre los objetivos de la investigación a los terceros que fueron entrevistados con ocasión de la

presente tesis, se realizó con la finalidad de cumplir con los estándares éticos que demanda toda investigación cualitativa.

Lo mencionado anteriormente, ha sido advertido por Galeano Marín, quien al respecto manifiesta lo siguiente:

“La relación que se establece entre el observador y los sujetos de observación, gracias a la permanencia en los escenarios y a que se comparte la vida (a veces privada) con los actores sociales, y el tipo de información que se obtiene (muchas veces confidencial, y “del fuero interno”), le plantean al investigador una responsabilidad ética por los efectos que la investigación pueda tener sobre los miembros del grupo. Aunque estos efectos difícilmente lleguen ser eliminados, el investigador debe intentar controlarlos o reducirlos mediante una vigilancia atenta y reflexiva. Durante todo el proceso de investigación, hay que tener presente que es necesario obtener consentimiento informado y salvaguardar la confidencialidad y el anonimato, y lograr acuerdos permanentes sobre el manejo de la información que se recolecta, sobre todo si se va a difundir o publicar”. (Galeano Marín: 2009, 56).

Lo expuesto por Galeano Marín en la cita antes expuesta, ha sido cumplido en la presente investigación, dado que en todo momento se comunicó a las personas que participaron de las entrevistas libres y a profundidad realizadas, sobre los objetivos y fines de la presente investigación. A pesar del tema que involucra la presente tesis, no fue muy difícil tener acceso a los contactos y al consentimiento sobre la información brindada, toda vez que debido al rol que hemos desempeñado por muchos años en la práctica jurídica, hemos sabido obtener y mantener una relación de confianza.

Asimismo, es preciso señalar que el mensaje transmitido por los informantes en las entrevistas realizadas y en las conversaciones mantenidas con ocasión de la presente investigación, no generó ningún problema de entendimiento por nuestra parte, toda vez que al haber ejercido la práctica jurídica en litigios ante el Poder Judicial, permitió que el dialogo establecido entre los informantes y nosotros sea óptimo.

Si bien es cierto la generación de los contactos y la información que se nos brindó fue conseguido gracias al ejercicio profesional del Derecho que realizábamos en su momento, cabe manifestar que la obtención de los testimonios y el nivel de detalle de estos, en algunas ocasiones, fue de difícil acceso toda vez que muchos de los estudios de casos que describimos en la etnografía constituyen actuaciones ilegales que revelan la comisión de delitos, lo cual en cierto sentido constituyó una limitación a la investigación realizada.

3.4. Instrumentos de recolección de datos

Los instrumentos que hemos desarrollado para la recolección de datos en la presente tesis son los siguientes:

- Elaboración de un diario personal, en donde hemos dado cuenta de las prácticas observadas durante la realización del trabajo de campo.
- Entrevistas libres, mediante conversaciones mantenidas con actores y partícipes de las redes de corrupción que hemos analizado
- Entrevistas a profundidad, las cuales se han realizado teniendo en cuenta una serie de preguntas bases que obtuvieron información concreta sobre las prácticas de corrupción estudiadas.

3.5. Procedimiento de análisis de los datos

En base a lo mencionado, el procedimiento de análisis de datos que hemos desarrollado en la presente investigación es el siguiente:

- Análisis exploratorio: Se generaron las categorías a partir de los datos obtenidos.
- Descripción: En esta etapa del procedimiento se evaluaron las categorías realizadas contrastándolas y estableciendo patrones entre los datos observados.
- Interpretación: Se establecieron relaciones entre las categorías obtenidas.

3.6. El estudio de casos

El estudio de casos que sustenta la presente tesis, está conformado por cuatro estudios de abogados de Lima que patrocinan a particulares en litigios judiciales de diferentes especialidades.

El estudio de casos elegidos presenta a cuatro estudios de abogados que participan en el mercado de prestación de servicios de asesoría jurídica en la ciudad de Lima. Los estudios escogidos cuentan con distinta participación en el mercado, toda vez que uno de ellos puede ser catalogado como estudio “grande” de Lima, dos pueden ser señalados como estudios “medianos” que se están abriendo paso en el mercado y uno de ellos, constituye un estudio jurídico que recién empieza, el cual no cuenta con más de 6 personas en su estructura.

El estudio jurídico al cual podemos denominar como “grande” es un estudio que tiene una presencia importante y mediática en el mercado de prestación de servicios legales (notoriedad). Es un estudio que cuenta en su haber con

más de 20 abogados que prestan asesoría legal en diversas ramas del Derecho. En lo concerniente al área de litigios (área procesal del estudio), cuentan con un grupo de abogados especializados en esta rama, quienes se encargan de llevar los procesos judiciales, para lo cual trabajan de manera coordinada y permanente con un “procurador”, sujeto que será analizado en un apartado especial de la etnografía que se presentará en el siguiente capítulo.

Los dos estudios jurídicos que pueden ser catalogados como “medianos”, pueden ser caracterizados como estudios que interactúan en el mercado de servicios legales en busca de un reconocimiento aún no logrado, a diferencia del estudio catalogado como “grande”. Estos estudios no cuentan en su haber con más de 10 abogados y su área de especialización más importante es el área de litigios, para lo cual también cuentan con un procurador.

Por último, el estudio jurídico “pequeño” al que estudiamos está constituido por una oficina que no cuenta con más de 6 personas en su espacio, cuya particularidad a diferencia del estudio “grande” y los estudios “medianos” es que no cuenta con un procurador en su planilla, pero que sí los contrata para determinadas ocasiones.

Los estudios de casos que sirvieron de sustento para la elaboración de la presente investigación obedece al interés de investigar cómo en los litigios llevados ante las instancias del Poder Judicial, se producían actuaciones ilegales que tenían como protagonistas a los estudios de abogados. Para ello, cuidamos en observar las dinámicas que se presentan en diferentes tipos de estudios de abogados. No obstante, el interés en apreciar las diferencias existentes entre los casos presentados en los estudios de casos (posición en el mercado, marca, dinero, etc.), no se reflejan en los resultados obtenidos en virtud de la ejecución del trabajo de campo.

CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos

En el presente capítulo daremos cuenta del trabajo de campo que hemos desarrollado a lo largo de la presente investigación, citaremos los testimonios que hemos recogido como consecuencia de la observación participante y la realización de entrevistas libres y a profundidad que han servido de fuente de información para el presente trabajo. En ese sentido, daremos cuenta de las prácticas corruptas que se han ido constituyendo en los estudios de abogados de Lima en el ejercicio de la abogacía. Las prácticas que describiremos se han ido naturalizando y normalizando a tal punto que se han transformado en *parte* del desarrollo profesional y de los servicios brindados por los estudios de abogados en los litigios llevados a cabo ante el Poder Judicial.

Los casos y testimonios que presentaremos a continuación se sustentan en el trabajo de campo desarrollado en los años 2014 y 2015. El trabajo de campo implicó el recorrido de los cuatro estudios de abogados que sirven de estudios de casos, mediante la elaboración de entrevistas libres y a profundidad que realizamos a los miembros de los estudios que pudimos contactar.

Asimismo y, tal como lo hemos señalado en las páginas anteriores, debido a que ejercimos el rol profesional de la abogacía durante el ejercicio de nuestro trabajo de campo, el conocimiento de los procesos y de las prácticas transgresoras que se actuaban regularmente en los litigios judiciales pudieron ser apreciados con mayor nitidez, toda vez que conocíamos el proceso regular y, en casos en los cuales conocíamos la materia del litigio, era posible deducir las razones que podrían ser catalogadas de “sospechosas” en las actuaciones y resultados que arrojaban los casos analizados.

La idea de elaborar una etnografía en este sentido surge a raíz de la participación que tuvimos en un estudio de abogados, desempeñándonos como asistente y, posteriormente, como abogado del área procesal del estudio. El patrocinio de los procesos judiciales que se llevaban a cabo en el estudio donde laborábamos nos permitió conocer algunos de los casos que presentaremos más adelante, cuya regularidad en el ejercicio de los procesos que se patrocinaban nos resultaba alarmante. Si bien es cierto, es muy común encontrar en la opinión pública y en el imaginario social la idea de que la corrupción es una práctica cercana al ejercicio profesional de la abogacía, resultaba interesante describirla mediante un recuento de las principales actuaciones que se suelen desarrollar en la actuación de los litigios judiciales.

En atención a lo mencionado, procederemos a describir las prácticas que hemos podido apreciar y recolectar con ocasión del trabajo de campo que hemos ejecutado para la presente investigación.

4.1.1. El espacio de análisis: Los estudios de abogados y su participación en litigios judiciales

Los estudios de casos que sirven de sustento a la presente etnografía fue escogida con la finalidad de apreciar las dinámicas y las formas de actuación que se podría apreciar en la práctica jurídica en distintos estudios de abogados. Por tal motivo, nos enfocamos en la recolección de información mediante nuestro recorrido en las áreas procesales de los estudios jurídicos.

El área procesal de un estudio de abogados está conformada por abogados cuya especialidad es el litigio. Hablamos de litigio en general, debido a que el área de actuación no solo se enfoca en litigios judiciales, dado que existen litigios arbitrales e, incluso, administrativos. No obstante, en nuestro análisis de casos, nos enfocamos en los litigios judiciales, los cuales se desarrollan ante los distintos juzgados e instancias del Poder Judicial. El área procesal de

un estudio de abogados, por ende, se encuentra en constante interacción con los órganos jurisdiccionales, puesto que su trabajo consiste en llevar de manera efectiva y exitosa los casos que los clientes les encomiendan.

Sin embargo, no solo abogados conforman el área procesal de un estudio. También tenemos la participación de asistentes, quienes son egresados de la escuela de Derecho y que aún no cuentan con el título profesional, así como también encontramos la presencia de practicantes, quienes la mayoría de las veces, desempeñan una labor de apoyo administrativo y de impulso de casos, debido a que se encuentran en periodo de formación profesional al no haber culminado aún la carrera. El conjunto de personas antes mencionadas (abogados, asistentes y practicantes) son quienes han estudiado en una Facultad de Derecho y conocen teóricamente los procesos judiciales que patrocinan en el estudio en donde laboran.

En el área procesal de los estudios de abogados también encontramos personal de carácter administrativo que constituye el soporte de las actuaciones que deben llevarse a cabo para el desarrollo de los procesos. Así, tenemos el soporte de secretarias, asistentes administrativos, fotocopistas (estudio grande) y procuradores, siendo este último personaje esencial para el desarrollo de los procesos judiciales. Este conjunto de personas descrito, no son de la especialidad de Derecho, es decir, no han cursado estudios en una Facultad de Derecho, sino que son técnicos que brindan soporte administrativo para que los procesos puedan llevarse en orden.

Con el soporte del conjunto de personas antes mencionadas, los estudios de abogados llevan los casos que sus clientes les encargan. Los casos pueden versar sobre distintas especialidades, así tenemos litigios civiles, penales, comerciales, laborales, tributarios, etc. En el trabajo de campo desarrollado, los estudios de casos a los que haremos referencia se sustentan en la

actuación de litigios civiles, penales y comerciales, ya sea a nivel de juzgados o salas judiciales.

La magnitud del área procesal de un estudio jurídico depende del tipo de estudio que analicemos. Los estudios de casos que sirven de sustento a la presente investigación se dividen en estudio “grande”, “mediano” y “pequeño”. Los estudios grandes y medianos van a tener una mayor posibilidad de recurrir a la actuación de prácticas corruptas, toda vez que cuentan con los recursos necesarios para hacerlo, como es el soporte de mayor personal.

Tal como lo hemos manifestado en el capítulo anterior, el estudio jurídico al cual podemos denominar como “grande” es un estudio que tiene una presencia importante y mediática en el mercado de prestación de servicios legales (notoriedad). Es un estudio que cuenta en su haber con más de 20 abogados que prestan asesoría legal en diversas ramas del Derecho. En lo concerniente al área de litigios (área procesal del estudio), cuentan con un grupo de abogados especializados en esta rama, quienes se encargan de llevar los procesos judiciales, para lo cual trabajan de manera coordinada y permanente con un “procurador”, sujeto que será analizado en un apartado especial de la etnografía que se presentará seguidamente.

Los dos estudios jurídicos que pueden ser catalogados como “medianos”, pueden ser caracterizados como estudios que interactúan en el mercado de servicios legales en busca de un reconocimiento aún no logrado, a diferencia del estudio catalogado como “grande”. Estos estudios no cuentan en su haber con más de 10 abogados y su área de especialización más importante es el área de litigios, para lo cual también cuentan con un procurador.

Por último, el estudio jurídico “pequeño” al que estudiamos está constituido por una oficina que no cuenta con más de 6 personas en su espacio, cuya particularidad a diferencia del estudio “grande” y los estudios “medianos” es

que no cuenta con un procurador en su planilla, pero que sí los contrata para determinadas ocasiones.

Tanto el estudio jurídico grande, los dos estudios jurídicos medianos y el estudio jurídico pequeño interactúan con los distintos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, mediante los litigios judiciales llevados a cabo en favor de sus clientes. El trabajo que se realiza en el área procesal de estos estudios consiste en la presentación de diversos documentos denominados en la jerga judicial como “escritos”, los cuales pueden versar desde la presentación de una demanda judicial, la contestación de demanda, la apelación de una sentencia, entre otras actuaciones que se enmarcan dentro de los procesos judiciales que se llevan a cabo.

El personal de un área procesal de un estudio de abogados, por ende, no solo se limita a trabajar desde su escritorio mediante la elaboración de “escritos”, sino también que debe ir a brindar seguimiento a cada uno de los procesos judiciales que tiene a su cargo. Es por ello, que el abogado, asistente o practicante que labora en dicha área, debe conocer la manera en que se tramitan los procesos judiciales, puesto que debe apersonarse regularmente a los Juzgados o Salas en donde se encuentre el respectivo expediente judicial. En la práctica jurídica enfocada en litigios judiciales ante el Poder Judicial, se tiene muy en cuenta que el trabajo no solo consiste en presentar los documentos necesarios para la resolución de un caso judicial, sino que resulta fundamental brindar seguimiento e impulso a los casos que se encuentran en evaluación.

En atención a lo mencionado, el espacio de actuación se encuentra comprendido por los estudios de abogados y el personal que labora en este siendo, en concreto, el personal que labora en el área procesal o de litigios, el cual se encuentra en constante interacción con los distintos juzgados y salas del Poder Judicial. El espacio de actuación referido ha sido el objeto de estudio

y análisis que se presenta en las siguientes páginas, el cual nos permitirá describir las actuaciones que se despliegan en las redes de corrupción que se forman entre el sector privado, reflejado por los estudios de abogados y, el sector público conformado por el Poder Judicial.

El espacio de actuación que venimos describiendo puede ser graficado de la siguiente manera:

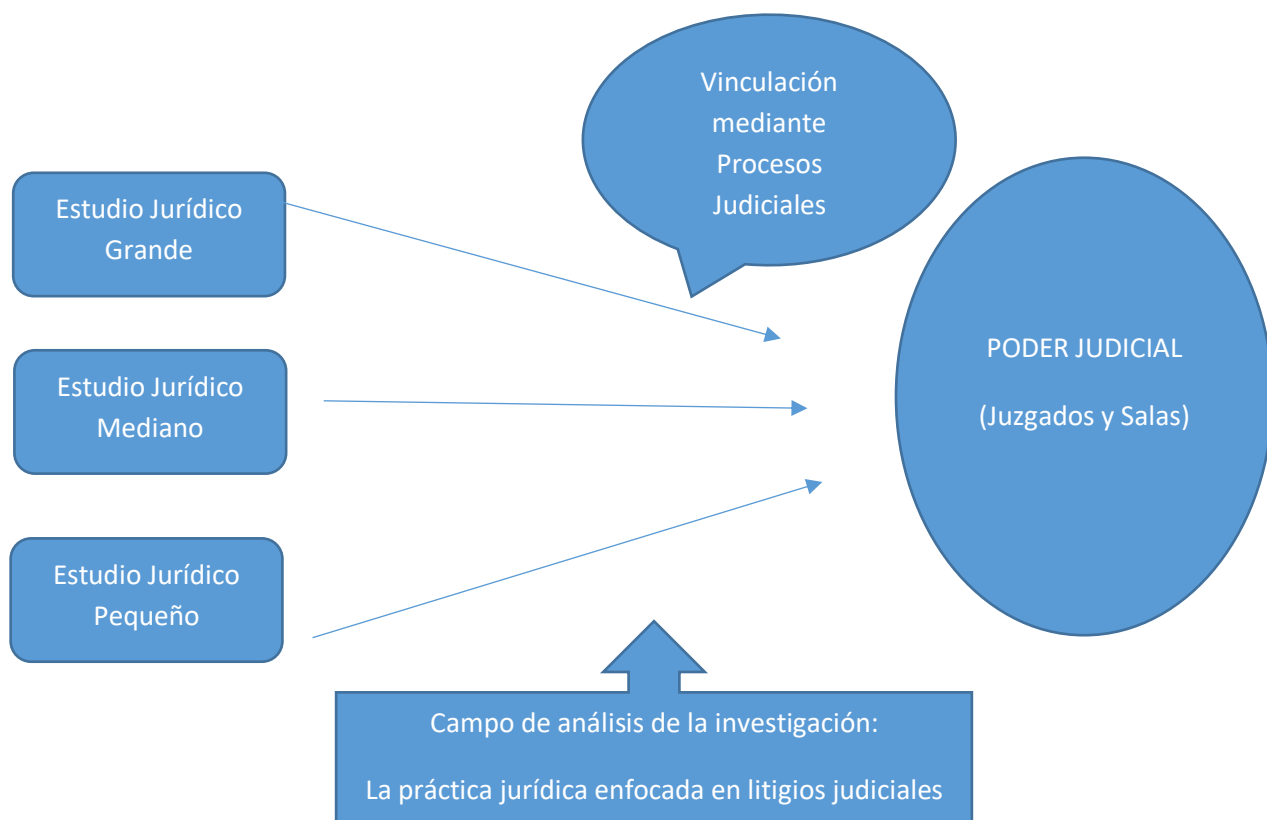


Gráfico N° 01: Campo de análisis de la investigación

Fuente: Elaboración Propia

4.1.2. Sujetos en la sombra: Los procuradores

Cuando uno revisa las páginas web de los estudios de abogados de Lima o acude a solicitar los servicios de dichos estudios en el mercado, se les presenta al staff profesional, el cual está conformado por los abogados que

forman parte del equipo legal que se encuentra a cargo de las distintas labores encomendadas de acuerdo a su especialidad.

El staff profesional es presentado como un equipo de profesionales altamente calificados que se encuentran capacitados para llevar a cabo los distintos casos asignados, quienes tienen la tarea de procurar que las labores encargadas sean desarrolladas de manera eficiente. Para ello, el equipo profesional tiene a su cargo a asistentes y practicantes, quienes constituyen el soporte material e intelectual en las labores encargadas.

No obstante lo mencionado, existe un personaje que se encuentra en las sombras del trabajo jurídico, que tiene como labor la realización del apoyo logístico en la presentación de documentos, entre los cuales se encuentra la presentación de los escritos judiciales. Este personaje es asiduamente llamado *procurador*.

El procurador es aquel sujeto que presenta los escritos elaborados por los abogados. Este personaje tiene como tarea hacer que dichos escritos ingresen a los distintos juzgados (civiles, penales, comerciales, de familia, etc.) y a otras instituciones públicas (Municipalidades, organismos reguladores, etc.) dependiendo del tipo de trámite que se esté siguiendo.

El personaje antes mencionado no es un abogado. Es por lo general una persona sin estudios superiores que ha encontrado en la realización y agilización de trámites una forma de subsistir. Su labor, como hemos mencionado, consiste en hacer que los documentos sean entregados de manera oportuna y sin retardo a las instituciones públicas designadas. Asimismo, tienen como tarea averiguar e impulsar el desarrollo de los trámites, ya sean a nivel judicial o administrativo. La propia palabra “procurador” en la jerga judicial hace referencia a aquella persona que “procura” que los escritos

y los trámites judiciales se realizan a tiempo, en el marco del proceso judicial respectivo.

Por lo general, los estudios de abogados contratan como procuradores a personas que cuenten con experiencia en la realización de dichos trámites, dado que dicha experiencia será *esencial* para el desarrollo del trabajo jurídico. Es mediante dicha experiencia que los procuradores se convierten en sujetos importantes para la práctica jurídica, dado que los años de trabajo han hecho posible que conozcan a distintas personas que laboran en el sector público, con las cuales han desarrollado toda una serie de relaciones que les permiten actuar, cuando la ocasión lo requiere, de manera paralela al plano formal.

En nuestro trabajo de campo enfocado en litigios (lo que se conoce como el área procesal de los estudios de abogados), la importancia del trabajo de los procuradores es crucial, puesto que son ellos quienes conocen y mantienen relaciones con los trabajadores de la mesa de partes, los asistentes de juzgados, secretarios judiciales, relatores, entre otros trabajadores de los distintos juzgados y salas judiciales. Dichas relaciones no son las únicas que mantienen los procuradores. Durante su labor conocen a otros procuradores, quienes debido a las labores ejercidas conocen a otros trabajadores que engloban toda una red de relaciones que hacen posible que ante cualquier *eventualidad* puedan recurrirse mutuamente.

El trabajo realizado por el sujeto estudiado en este apartado, ha hecho posible que en el transcurso de su experiencia sea parte de toda una red de relaciones que hagan posible la realización de prácticas corruptas. El hecho que el procurador conozca a trabajadores que tengan a su cargo el destino de los distintos procesos judiciales hace posible que pueda recurrir a ellos mediante una serie de *favores* que rebasen el plano formal y estrictamente normativo. Favores como la copia y/o desaparición de expedientes, la entrega de Resoluciones Judiciales elaboradas por una de las partes (Autos, Sentencias),

el impulso y/o demora de procesos judiciales dependiendo de la parte (demandante, demandado), entre otras prácticas, son posibles gracias a toda esa red de la cual forman parte los procuradores.

El circuito de actuación de este sujeto se encuentra conformado por el estudio de abogados en donde labora y los locales y pasillos de los juzgados y salas del Poder Judicial. Este sujeto recorre diariamente dichos espacios cumpliendo los encargos otorgados por los abogados. El procurador, ciertamente, realiza un trabajo de campo reflejado en su constante interacción con los abogados del estudio y los trabajadores del Poder Judicial.

Estos sujetos son quienes hacen el trabajo paralelo; es decir, los que buscan y generan el contacto, entregan el monto de dinero, participan de las redes establecidas, entre otras prácticas, las cuales son de pleno conocimiento de los abogados quienes, ante la necesidad de recurrir a una práctica informal, requieren a los procuradores, lo cuales se encargan de cumplir con el encargo solicitado.

En el desarrollo de nuestro trabajo de campo, pudimos corroborar la red de relaciones que los procuradores han creado a lo largo de los años de experiencia. Al caminar con uno de ellos de manera asidua en los alrededores de los juzgados civiles con ocasión de nuestro trabajo de campo, resultaba sorprendente el número de personas que saludaba, desde las personas que trabajaban como porteros en el edificio en donde se encuentran los juzgados y salas, pasando por los ascensoristas y el personal que se encontraba en ventanilla recibiendo los documentos, hasta los propios asistentes y secretarios judiciales, con quienes inclusive se bromeaba. Los años de trabajo en la tramitación de procesos judiciales generaron una amplia red de “conocidos” que con el lapso del tiempo se afianzaban mediante relaciones de amistad y lealtad para la ejecución, cuando estas lo requieran, de prácticas corruptas.

Las relaciones de amistad se afianzan mediante la asistencia a reuniones, fiestas, encuentros deportivos y demás oportunidades en donde el personal trabajador del Poder Judicial concurre. Dos de los procuradores con quienes tuvimos ocasión de conversar para la presente investigación, nos informaron que asiduamente asistían a las reuniones y “pichangas” como ellos la llamaban (partidos de fútbol) con los trabajadores del Poder Judicial e, inclusive, con algunos jueces, en donde afianzaban los lazos de amistad existentes.

El espacio de actuación del procurador y las redes de las cuales forma parte, pueden ser expresados en el siguiente gráfico:

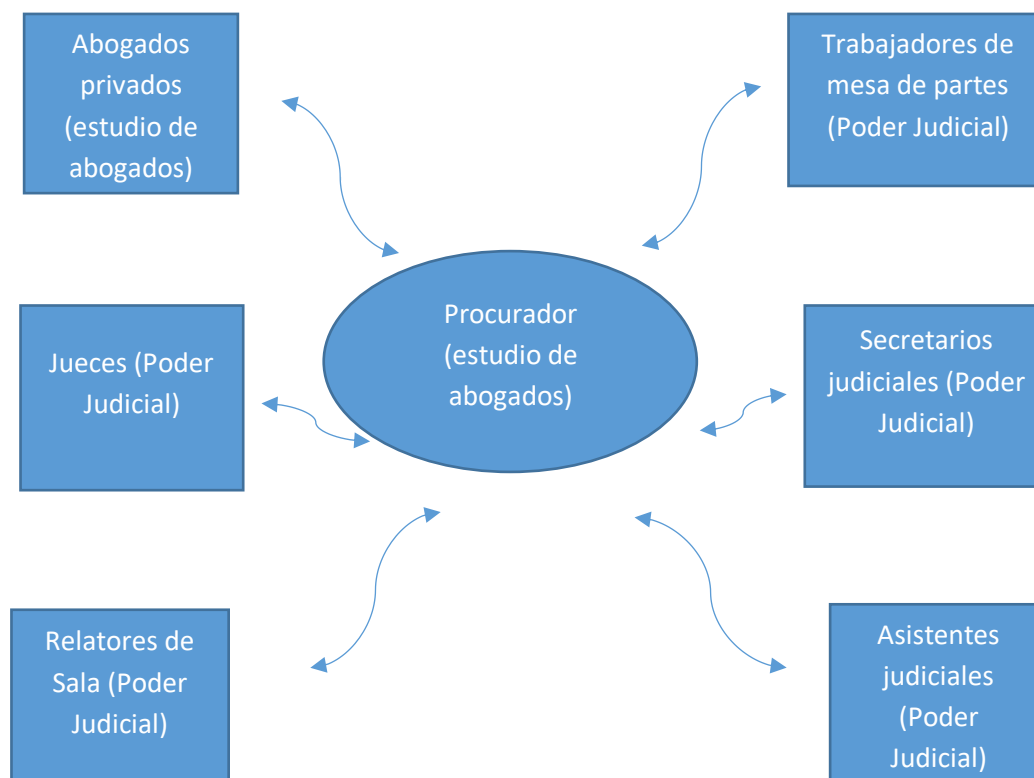


Gráfico N° 02: Relaciones mantenidas por el Procurador

Fuente: Elaboración propia

Las redes de corrupción antes mencionadas, no están conformadas solo por un lado, es decir por los trabajadores públicos que ejercen funciones en el Poder Judicial, sino también por sujetos privados, quienes son los que recurren

y forman parte de las redes de corrupción establecidas, solicitando toda una serie de actuaciones que se encuentran fuera del plano formal, y que constituyen una manera distinta (corrupta) de hacer posible el trabajo jurídico.

Hemos podido apreciar la importancia de los procuradores en los estudios de abogados. Su importancia radica en su participación en todas esas relaciones y redes que conocen a la perfección, en las cuales se pueden encontrar soluciones ante dificultades que se adviertan en el desarrollo de los procesos judiciales. A pesar de ser un empleado valioso en los estudios de abogados, el procurador no forma parte del staff de abogados que se ofrecen y se presentan al cliente a efectos de resolver sus asuntos. El procurador es un trabajador administrativo, pero que tiene una especial llegada con los abogados litigantes, toda vez que coordina con ellos las actuaciones que requieran su participación al momento de actuar en las redes de corrupción para el ejercicio de prácticas ilegales.

Como podemos apreciar, los estudios de abogados conocen perfectamente las dinámicas que se generan en el desarrollo de las prácticas corruptas. Las conocen y son parte de ella, considerando a dichas prácticas como parte del trabajo jurídico que se les brinda a los clientes. El objetivo es realizar de manera eficiente los encargos recibidos, y si para ello es preciso recurrir a dichas prácticas, recurren a los procuradores, quienes forman parte de esas redes de corrupción existentes. Los procuradores son el engranaje y la bisagra con la que cuentan los estudios de abogados para poder acceder a dichas relaciones.

Prueba de la importancia que los estudios de abogados asignan a las relaciones mantenidas por los procuradores, es que se le brindan gastos para que puedan mantener el contacto generado. Gastos que se reflejan en invitaciones a comer, en la asistencia de reuniones, transporte, entre otros, los cuales implican el hecho de que los sujetos materia de comentario, no pierdan

la posibilidad de seguir generando mayores lazos de confianzas con los actores que participan en estas redes.

Y es que como lo hemos señalado, los procuradores son el enlace que existe entre los estudios de abogados y los trabajadores del Poder Judicial. Debido a los años de experiencia en la labor desplegada, han establecido una serie de relaciones que constituyen un capital social sumamente importante para que, ante cualquier eventualidad, se pueda recurrir a las amistades mantenidas. Este capital social es aprovechado al máximo por los estudios de abogados, dado que tienen en su plana laboral, a una persona que puede facilitar la obtención de resultados eficientes en los litigios llevados a cabo ante el Poder Judicial.

En los estudios de casos sobre la cual se realizó el trabajo de campo que sustenta la investigación, se pudo advertir que la presencia de los procuradores es considerada relevante en los litigios llevados a cabo ante el Poder Judicial. Un estudio jurídico con importante presencia en el mercado y que ha sido denominado “grande” en el presente texto, cuenta con más de dos procuradores en su plana laboral, debido a la gran carga procesal existente en su cartera. En cuanto al estudio “mediano” analizado, este contaba con dos procuradores, uno de los cuales contaba con la mayoría de contactos en su haber, mientras que el otro se enfocaba en la realización de actuaciones de apoyo. Por último, si bien el estudio jurídico “chico” no contaba con un procurador permanente, contrataba los servicios de un procurador (trabajador de otro estudio “grande”), quien prestaba los servicios cuando su presencia era necesaria para el éxito de un proceso judicial.

Como se puede apreciar, la presencia de este sujeto es muy bien valorada para los estudios de abogados que se dedican al litigio judicial. La necesidad de contar con una persona que realice seguimiento a los litigios llevados a cabo ante las distintas instancias del Poder Judicial, incentiva a que se

contrate a personas que cuenten con experiencia en el seguimiento de estos trámites.

La presencia y dinámica de este sujeto con los estudios de abogados y el Poder Judicial se representa de la siguiente manera:

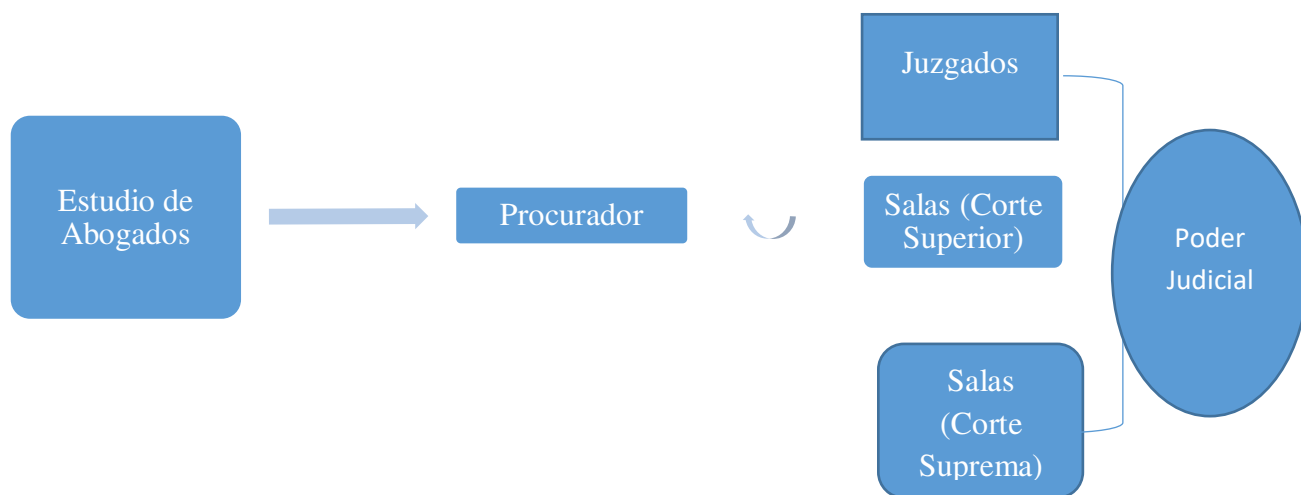


Gráfico N° 03: Relación del estudio de abogados, los procuradores y el Poder Judicial

Fuente: Elaboración propia

El procurador constituye el engranaje entre los estudios de abogados y el Poder Judicial. El procurador es el sujeto que, debido al trabajo desarrollado, tiene la posibilidad de generar y encontrar los contactos necesarios en los distintos juzgados y salas del Poder Judicial, que le posibilitarán el ejercicio de actuaciones que, desde el plano de la ilegalidad, coadyuvarán a la obtención de un resultado provechoso en los litigios judiciales a su cargo.

Las redes a la cual tiene acceso el procurador, hace que su utilidad sea valorada por los estudios de abogados. En el transcurso del trabajo de campo desarrollado, se pudo comprobar que el nivel de contactos con los cuales cuenta el procurador, constituye un activo fundamental para su contratación en un estudio de abogados. Como lo hemos manifestado anteriormente, si bien el procurador es un trabajador administrativo de la empresa, su calidad y

valor se mide en atención en cuan útil puede resultar cuando se deba acceder a las redes de corrupción.

A lo largo del trabajo de campo desarrollado, pudimos percatarnos de diversas “eventualidades” que se presentan en los litigios llevados a cabo ante el Poder Judicial, las cuales pueden ser solucionadas recurriendo a las redes de corrupción existentes. Presentación de escritos fuera de plazo, desaparición de expedientes judiciales, elaboración de sentencias o resoluciones por una de las partes en litigio, entre otras actuaciones, son posibles gracias a la entrada y participación que se tiene en las redes de corrupción establecidas.

Las técnicas utilizadas pueden estar dirigidas a subsanar un error cometido en el litigio llevado a cabo, como lo es el caso de presentar escritos fuera del plazo estipulado, o asegurar el resultado mediante el pago de una determinada “coima”, como es el caso del pago por sentencias o resoluciones favorables o, inclusive, favorecer la estrategia en un litigio que se está siguiendo, como es el caso de la obtención de copias de las resoluciones antes de que estas sean notificadas.

En el trabajo de campo efectuado hemos podido advertir y tomar en cuenta diversas prácticas. El desarrollo de estas prácticas se realizará en los apartados siguientes.

4.1.3. Presentación de escritos fuera de plazo

Una de las prácticas habituales es la presentación de escritos judiciales fuera de plazo. En todo proceso judicial se establecen plazos, ya sea para contestar demandas, proponer puntos controvertidos, impugnar resoluciones, entre otros actos procesales. Dichos plazos deben ser cumplidos, toda vez que la presentación de escritos fuera de los plazos establecidos hace que estos se

tengan por no presentados, ocasionando un enorme perjuicio a la parte interesada.

En el mundo del Derecho existe lo que se conoce como la “preclusión” de los actos procesales, lo cual quiere decir que cada acto procesal reflejado en la presentación de demandas, contestaciones, propuestas de puntos controvertidos, apelaciones, entre otros, debe ejecutarse en los plazos establecidos por Ley. Esta preclusión obedece a que todo proceso judicial se desarrolla en diversas etapas, en las cuales las partes litigantes tienen la oportunidad de presentar sus argumentos de defensa.

Todo litigio judicial, ya sea la especialidad a cuya materia obedezca (civil, penal, laboral, etc.) se encuentra sujeto a la preclusión de los actos procesales, razón por la que los estudios de abogados que ejercen la profesión jurídica como litigantes deben tener especial cuidado en cumplir los plazos establecidos por Ley, toda vez que un incumplimiento de estos plazos, implica consecuencias negativas para la defensa que vienen ejerciendo. Así, si estamos frente a un caso en el cual el estudio de abogados tiene un plazo de diez días hábiles a fin de presentar un recurso de apelación en un proceso judicial en materia civil, la no presentación del respectivo escrito de apelación hace que la parte afectada pierda la oportunidad de que su caso pueda ser visto por una instancia superior, lo cual significa inexorablemente la pérdida del caso y, en consecuencia, la imposibilidad de seguir discutiendo a nivel judicial el litigio que se viene llevando a cabo.

De lo antes mencionado, se puede deducir que el no cumplimiento de los plazos establecidos en los procesos judiciales acarrea consecuencias funestas para los estudios de abogados y para sus clientes. El hecho de que un estudio de abogados no cumpla con presentar los actos procesales en el plazo fijado, no solo significa la pérdida del caso, sino también una afectación grave a su reputación profesional como especialistas, toda vez que dicha

actividad forma parte del deber de diligencia profesional que todo prestador de servicios en general tiene con sus clientes.

A pesar de la magnitud e importancia que significa cumplir con los plazos establecidos en los procesos judiciales, en algunas ocasiones los estudios de abogados no cumplen con presentar los escritos judiciales en los plazos fijados. Nos encontramos frente a casos en los cuales por negligencia o descuido no se cumple con la diligencia debida y se está ante un problema cuyas consecuencias resultan bastante graves.

Así, en el ejercicio de nuestro trabajo de campo pudimos apreciar que, ante el vencimiento de un plazo, los estudios de abogados encargan la labor al procurador, quien en base a las relaciones y redes a las cuales forma parte, realiza los contactos necesarios. Un par de llamadas telefónicas y la presencia en el juzgado hace posible que el escrito sea ingresado fuera del horario habitual con fecha retrasada, lo cual significa que el escrito “ha sido ingresado y presentado dentro del plazo jurídicamente establecido por la norma”.

Luis³⁴, practicante de un estudio jurídico mediano y estudiante de una universidad pública, es uno de los informantes en el trabajo de campo desarrollado. Un día, el estudio en donde trabaja lo envió a presentar un escrito a los Juzgados Civiles, el cual no pudo ser ingresado por llegar fuera de la hora establecida. Ante ello, fue llamado por el procurador del estudio, quien le manifestó que esperara a la espalda del local donde se encontraban los juzgados. Mientras esperaba se le acercó un trabajador de mesa de partes, quien lo llamó por su nombre y le solicitó el escrito. Después de 15 minutos de espera, el mismo procurador fue en su encuentro llevando el cargo sellado e ingresado al sistema.

³⁴ Cabe señalar que Luis y los demás nombres a los que se haga referencia no constituyen los nombres reales de nuestros informantes, cuya identidad no será revelada para los fines del presente trabajo.

Al ser consultado Luis sobre el monto cancelado, manifestó que el procurador había cancelado la suma de US\$ 100. En la conversación mantenida, Luis manifestó:

“Me sorprendió que todo el mundo conociera a Renato (procurador). Todos lo saludaban y él me indicaba uno por uno quien era asistente, secretario, Juez, Relator, etc. Asimismo, me dijo que él siempre anda con un promedio de S/. 500, dado que siempre suceden este tipo de cosas”.

El testimonio antes citado revela que la actuación del procurador fue esencial para que el escrito sea ingresado como si hubiese sido presentado dentro del plazo reglamentario. Luis solo cumplió la función de ingresar el escrito y entregarlo a la persona que el procurador le indicó, lo cual revela la existencia de una *negociación* previa entre el procurador y su contacto en el Poder Judicial. La negociación efectuada fue exitosa toda vez que el contacto llamó a Luis por su nombre, quien solo tuvo que esperar que el procurador vaya a su encuentro con el escrito como si hubiese sido presentado en el horario ordinario.

Los precios que se cancelan por la presentación de escritos fuera de plazo dependen del tipo de escrito que se están presentando (contestación de demanda, impugnación, etc.) y del juzgado en donde se está llevando el proceso judicial. Asimismo, depende de la dificultad del encargo, es decir, si el escrito será presentado uno o dos días después del vencimiento fijado. Los montos van desde los US\$ 100 a US\$ 300. En caso nos encontremos ante un trabajo difícil, el monto podría ascender hasta US\$ 1,000.00. Los pagos se realizan en lugares fuera del juzgado, en las cercanías de este, en los cafés, bares, chifas y otros restaurantes que son utilizados como focos de transacción en donde se entrega el dinero por la labor realizada. Renato,

procurador de un estudio jurídico mediano, al ser consultado por el monto de los precios, refiere:

“Los precios son así porque los hombres (refiriéndose a los trabajadores) se juegan su puesto. Ellos saben que, si son agarrados, pierden su empleo y se acaba todo”.

En la conversación mantenida, Renato resaltó la importancia de la “llegada” y los “contactos” para el ejercicio de esta práctica. En otras palabras, si un individuo sin experiencia en este tipo de situaciones se aventurase a presentar un escrito fuera del plazo estipulado, se encontraría ante una situación bastante difícil e incómoda para él, dado que nos encontramos ante un acto ilegal que exige la *cooperación* de otra persona para su éxito. En el caso de los procuradores, debido a la experiencia y al trabajo que ellos realizan, el conocimiento que tienen de los “sujetos” y de los “contactos” en el Poder Judicial les facilita la toma de decisiones para un adecuado ejercicio de la práctica ilegal.

José, estudiante de una universidad privada y practicante de un estudio de abogados mediano especializado en temas civiles y empresariales manifestó lo siguiente:

“Tres veces he tenido oportunidad de ir al Juzgado y entregar el escrito fuera de plazo. Todo lo hacía conjuntamente con el tramitador (procurador) de mi estudio, quien hacía las llamadas respectivas y se reunía con el secretario y los asistentes judiciales. Una vez acordado el trámite, me presentaba al Juzgado y se me entregaba el cargo debidamente sellado”.

La práctica descrita en el presente apartado es común en los juzgados civiles y comerciales, en donde hemos podido tener acceso a la información

proporcionada. Cabe señalar que el ejercicio de esta práctica toma en cuenta el número de personas que participan en las actuaciones, dado que las coordinaciones que se efectúan no solo se limitan al personal del Juzgado en donde reside el expediente, sino al personal de ventanilla y de sistemas, quienes tienen acceso al registro de escritos presentados diariamente.

Un principio fundamental en esta práctica es que todas las personas que participan en el ingreso de un escrito fuera del plazo estipulado deben recibir “su parte”. En los casos que presentamos en el presente apartado, la información que recabamos iba en ese sentido, toda vez que el pago a realizar era esencial para compensar el “riesgo” que implica incumplir una norma. Debido a que nos encontramos frente a una actuación que debe seguir el curso normal de todo trámite, cada una de las personas intervinientes a cambio de la colaboración prestada, debían recibir una compensación económica.

Marcial es un estudiante de una universidad privada que práctica en un conocido estudio de abogado de Lima (estudio grande). En la entrevista mantenida manifestó que en una ocasión olvidó impugnar una Resolución judicial de primera instancia que finalizaba un proceso judicial. Ante ello y en consulta con su superior (abogado litigante del estudio), contactó de manera inmediata al procurador, con quien asistió a la sede de los juzgados en donde se llevaba a cabo el proceso. El procurador ingresó a hablar con el personal administrativo que laboraba en el Juzgado, quienes le manifestaron que necesitaban la suma de US\$ 300.00 para ingresar el escrito con fecha atrasada y realizar los arreglos respectivos en el sistema.

Marcial, al respecto, nos comentó:

“No pensé que el procurador de mi estudio tenía tanta llegada. Me encontré con él, realizó un par de llamadas, nos constituimos al Juzgado, salió a hablar con una persona. Esperemos unos

veinte minutos. Volvió a hablar con esa persona y me comentó lo que estaban pidiendo. Me señaló que el precio era así porque la gente del Juzgado tenía que coordinar con los que ingresan los escritos por el sistema”.

La práctica descrita en el presente apartado es bastante regular en el ejercicio de la práctica profesional en los estudios de abogados. Casi la totalidad de personas que fueron entrevistadas para la presente investigación, afirmaron conocer de casos en los cuales se tuvo que pagar una “coima” a un trabajador del Poder Judicial a efectos de que el escrito vencido ingrese por conducto regular con fecha atrasada.

La intervención de los procuradores en este tipo de casos es crucial. Ellos son los que generan el contacto, los que buscan al especialista, secretario o asistente judicial que tiene acceso al expediente judicial, a efectos de consultar si resulta factible “alterar” el cauce normal del proceso judicial con las consecuencias que se deberían seguir con ocasión de la presentación de un escrito fuera de plazo. Asumir las consecuencias de dicho error constituye una negligencia grave (lo que en la responsabilidad civil en el Derecho Civil se podría llamar culpa inexcusable) en el ejercicio profesional de la abogacía, razón por la cual la importancia de “subsana” y “corregir” dicho error mediante el ejercicio de una práctica ilegal es considerada bastante oportuna por los estudios de abogados de Lima.

En caso el procurador no conozca al personal del juzgado en el que se encuentre el expediente a “subsana”, se vale de las relaciones que tiene con otros trabajadores del poder judicial o, incluso, con otros procuradores, quienes intervienen para coadyuvar a cumplir el encargo que se le ha brindado al procurador. En estos casos, la experiencia que el procurador ha capitalizado durante los años en los que ha trabajado es sumamente importante para generar el contacto y evaluar si es factible o no la realización del encargo.

De lo manifestado podemos señalar que la práctica materia de comentario es sumamente importante en el desarrollo del proceso judicial llevado a cabo, toda vez que el vencimiento de un plazo debidamente establecido, conlleva a una serie de perjuicios que debilita la defensa que se viene efectuando durante el desarrollo del proceso judicial, y que incluso, puede costar el patrocinio legal del caso asignado. Es por dicha razón que los precios solicitados por los trabajadores que tienen acceso al expediente judicial son cancelados, puesto que nos encontramos ante un escenario que resulta perjudicial para el estudio de abogados que tiene a su cargo el caso.

Una manera de remediar esta práctica por parte de los propios litigantes, ha sido mediante el trámite de un “reporte judicial”, el cual es un documento en donde constan las actuaciones procesales que las partes han desarrollado desde el inicio de proceso judicial. Muchos abogados litigantes, a fin de tener constancia de las actuaciones efectuadas, fijado el término en el que su contraparte ha debido presentar algún escrito con vencimiento, se apersonan a la oficina pertinente a tramitar dicho reporte y así tener un documento que acredite la no presentación de ningún escrito adicional a la fecha de dicho reporte.

Esta práctica como se puede entender, rebasa el plano formal de actuaciones legales, puesto que se ingresa escritos en procesos judiciales cuando estos deben ser rechazados por extemporáneos. Al ingresar con fecha atrasada, se logra que la parte que resultaría perjudicada no sea pasible de los efectos jurídicos que debería tener por no haber presentado el escrito vencido y, por tanto, pueda seguir realizando las actuaciones procesales requeridas para sustentar su defensa.

4.1.4. Impulsos procesales

Kathy es una asistente egresada de una universidad privada que trabaja en un estudio jurídico mediano y que asiduamente frecuenta los juzgados comerciales. Ella tiene a su cargo la cartera de “recuperos”³⁵ de un estudio de abogados especializado en litigios judiciales; es decir, todos aquellos casos de ejecución en donde los Bancos deciden cobrar sus acreencias con las garantías firmadas por sus deudores³⁶. Dichas garantías pueden consistir en una hipoteca (bienes inmuebles) o en una garantía mobiliaria (bienes muebles).

Nuestra informante manifiesta que los impulsos procesales se encuentran sujetos a *incentivos*, los cuales tiene que asiduamente pagar a los secretarios y asistentes de juzgados a efectos de que les programen sus audiencias, agilicen sus escritos y puedan llevar adelante la ejecución. Lo mencionado, implica que sus procesos sean atendidos de manera prioritaria, a pesar de existir un orden de prelación por razones de tiempo e importancia.

Kathy nos informa al respecto:

“tú siempre debes de pagarles S/. 50 en promedio para que te atiendan y te programen tu expediente. Si no haces ello, tu proceso se va a mantener parado, a la espera de que se les ocurra impulsarlo”.

³⁵ “Recuperos” constituye una jerga que se utiliza en el mundo de la práctica jurídica a efectos de hacer referencia a las áreas que tienen por finalidad iniciar los procesos judiciales de cobranza. Generalmente se patrocina a una entidad financiera que tiene cuentas por cobrar a sus clientes.

³⁶ Los procesos judiciales de ejecución son procesos de carácter civil, en donde a diferencia de los procesos ordinarios y abreviados, se tiene certeza sobre el derecho de crédito que se reclama. Es decir, estamos frente a un proceso judicial en donde no se va a discutir si una persona resulta ser o no titular del crédito, sino lo que se discute es la manera en la cual se va a proceder con el pago, ya sea que el deudor pague lo que efectivamente se le está exigiendo o que, ante su negativa, se proceda a exigir la ejecución de su patrimonio.

Las entregas de dinero se realizan fuera del juzgado. Sin embargo, según la información obtenida, estas se realizan también dentro del juzgado. Así, Camila, otra de nuestras informantes, también asistente de un estudio mediano y egresada de una universidad privada nos manifiesta:

“En lugares en donde no hay cámara, allí se les da el dinero. También cuando se les entrega documentos, allí tú debes poner el billete. Ellos lo cogen y después se lo guardan. Todo está calculado”.

La información brindada por Camila, nos revela que, a pesar de los controles establecidos por los órganos fiscalizadores, los agentes siempre buscan la manera de transgredirlos, optando por crear y seguir toda una serie de prácticas que poco a poco se van sofisticando. La instalación de cámaras y controles no ha resultado impedimento para que los agentes infractores sigan utilizando el pago de *incentivos (coimas)* para la prestación del trabajo jurídico.

Lo mencionado anteriormente, también es práctica frecuente en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia de la República. Así Alex, abogado penalista de una universidad pública, litigante en un estudio pequeño nos manifestó lo siguiente:

“En la corte suprema, una vez en la Sala Penal y otro en la Sala Laboral y Constitucional contacté con dos asistentes, quienes eran los que manejaban los expedientes. Con ellos pude adelantar la vista de la causa que, si seguían su curso normal, iban a ser programadas para el mes de noviembre. A raíz del contacto realizado y del pago de dinero, la fecha fue adelantada para el mes de julio”.

Asimismo, los informes recibidos en nuestro trabajo de campo revelan que la utilización de estos canales informales se realiza aun cuando los trámites realizados se encuentran dentro de su cauce normal. Es decir, nos encontramos frente a un acto de transgresión que busca mayor agilidad en los procesos a seguir, los cuales si siguen su curso formal demorarían mucho más tiempo en ser resueltos. Aquí, podemos apreciar la utilización de prácticas corruptas para la obtención de un resultado esperado, pagándose por el tiempo de resolución de estos. El resultado puede estar garantizado (no hay la necesidad de torcer la voluntad del juez o del asistente). Solo se paga un *incentivo* para que el resultado esperado pueda ser resuelto a la brevedad, sin mayor espera.

Lo señalado, es confirmado por Juan, un procurador de un estudio grande quien nos manifestó al respecto:

“Lo que pagamos es por celeridad. Si los procesos fuesen rápidos, no existiría la necesidad de darles plata a los trabajadores. Por eso, uno paga por impulso, para que tus temas salgan rápido”.

Otro ejemplo de lo mencionado anteriormente, es el testimonio de Adrián abogado egresado de una universidad pública y miembro de un estudio jurídico pequeño, quien nos da cuenta de la realización de un *impulso* que tuvo que hacer:

“Teníamos un tema en juzgados comerciales, era necesario que se emita la Resolución que daba cuenta de la adjudicación de un bien inmueble al postor que participó y obtuvo su propiedad. El cliente estaba bastante apurado con el tema. Así las cosas, hablé con el especialista encargado, con quien me encontré en un chifa cerca de juzgados comerciales. Le entregué US\$ 1,000.00 (Mil

con 00/100 dólares americanos) a efectos de que se emita con celeridad la Resolución. Al día siguiente la Resolución estaba descargada en el sistema Web y lista para notificar”.

El testimonio de Adrián nos demuestra que el pago de una “coima” no se da necesariamente para cambiar el sentido de una Resolución Judicial, sino que también sirve para impulsar y acelerar los trámites que siguen su cauce normal. Así, ante la pregunta realizada a Adrián consistente en cuanto fue el tiempo que se “ahorró” con el pago de la coima, nos señaló lo siguiente:

“Si es que no pagaba al secretario la suma que te mencioné, el trámite hubiese demorado unos 5 o 6 meses. El cliente necesitaba con urgencia el documento, dado que tenía planeado obtener el inmueble y de inmediato ponerlo en circulación en el mercado”.

Los testimonios evidencian que el pago de coimas para agilizar los trámites en los juzgados de Lima es constante, significando una práctica recurrente que se ha hecho habitual para obtener resultados concretos y eficientes en el patrocinio de procesos judiciales. Los estudios de abogados y litigantes son conscientes en muchos casos de la generalidad de estas prácticas, actuando en las redes que hacen posible su funcionamiento a fin de poder conseguir resultados rápidos para sus clientes.

La práctica descrita ha generalizado al punto tal que es habitual encontrar el ofrecimiento de los mismos trabajadores del poder judicial para la agilización del trámite respectivo. En efecto, en el trabajo de campo desarrollado, hemos encontrado testimonios que daban cuenta de que, gran parte de las veces, son los propios trabajadores del Poder Judicial quienes se ofrecen a “apurar” la ejecución de los actos procesales que se encuentren pendientes de realización en un proceso judicial.

Esta práctica se desarrolla con bastante regularidad, toda vez que es conocida la lentitud con los que se desarrollan los procesos judiciales en nuestro país. La demora en la tramitación de los expedientes judiciales, hace que los sujetos privados recurran a este tipo de actuaciones en las que, por obtener celeridad y prontitud, se termina agenciando de un dinero a los trabajadores para que puedan acelerar los trámites pendientes.

Debido al contexto descrito, los estudios de abogados optan por transgredir los canales formales de actuación y deciden realizar actos informales dirigidos a que el expediente que patrocinan pueda tramitarse de manera mucho más rápida que el resto. El éxito en el patrocinio de un caso judicial se mide también por la celeridad con la que se consiguen los resultados esperados por los clientes. Por dicho motivo, el pago de incentivos y la generación de toda la serie de actos previos para su éxito, constituyen un punto fundamental en el ejercicio de la práctica jurídica.

Lo mencionado en el párrafo anterior es un criterio que nos ayuda entender del porqué de la actuación de estas prácticas. En efecto, hemos conceptualizado en nuestro marco teórico que los estudios de abogados son agentes que interactúan en el campo jurídico. Al participar en este campo, lo que buscan es obtener una posición predominante en el mercado, siendo uno de los criterios fundamentales para contar con una mayor cantidad de casos en su cartera, la posibilidad de resolver un litigio judicial de manera rápida y efectiva.

De la misma manera, los trabajadores judiciales a cargo del expediente judicial ven en estas ocasiones una oportunidad para obtener un ingreso extra, razón por la cual ofrecen “apurar” un expediente judicial que está a su cargo previo pago de un incentivo. El razonamiento de los trabajadores sigue la misma lógica que el ejecutado por los estudios de abogados. La aceleración de los trámites judiciales es vista como una oportunidad de beneficio para las dos

partes, es decir, para los estudios de abogados y para los trabajadores del Poder Judicial.

4.1.5. Emisión de Resoluciones Judiciales en interés de una de las partes

La emisión de resoluciones judiciales puede obedecer a un tema de impulso procesal, es decir para que la Resolución pendiente pueda ser emitida con prontitud, o también para que esta pueda ser emitida a la medida de los intereses de una sola parte. En el apartado anterior hemos tratado de actuaciones que tienen por finalidad adelantar la obtención de un resultado a fin de ganar tiempo y no seguir los pasos del proceso burocrático en trámite. En el presente apartado nos enfocaremos a supuestos en donde se “tuerce” la decisión del órgano decisor y se busca contar con la plena seguridad que el resultado esperado será absolutamente favorable para los intereses de la parte.

Kathy, quien anteriormente nos brindó un testimonio en relación a los impulsos procesales, en su experiencia en Juzgados Comerciales nos manifestó lo siguiente:

“Para que una Resolución salga en el día me cobran S/. 300. Para emitir un auto final de acuerdo a lo que quiere el cliente me cobran S/. 1000. La entrega de dinero lo ve el procurador, quien se los entrega en un lugar público que está cerca al juzgado, o también en casinos o cines. Hay un secretario de juzgado que pide que el dinero se lo lleven a la tienda que tiene en el centro de Lima”.

Como se puede apreciar, resulta factible conseguir una Resolución Judicial a la medida. Ello, depende de la materia e importancia del caso que se está manejando, toda vez que a partir de allí se establecerá o no su importancia y

magnitud. Los pagos realizados se realizan en lugares exteriores a los juzgados, toda vez que nos encontramos frente a una modalidad transgresora que implica una mayor coordinación entre los agentes infractores, quienes deben hablar y coordinar el sentido de la Resolución que se busca a obtener. Para ello, el contacto con los trabajadores de la institución pública es esencial, dado que en la medida en que se desarrolle una mayor relación con estos sujetos, se podrá obtener un mejor resultado que implica previamente el pago de un *incentivo*.

Es menester recalcar que nos encontramos ante una práctica transgresora que implica la obtención de una decisión acorde con los intereses de la parte que paga la coima. Si bien estamos ante un supuesto que es muy común hallarlo en el imaginario social de la ciudadanía (basta recordar al respecto la reputación con la que cuenta la profesión de la abogacía), su ejecución resulta bastante delicada, puesto que no se está buscando saltar plazos o ahorrar la realización de trámites burocráticos, sino nos encontramos ante supuestos de obtención de resoluciones que brindan la razón a una de las partes del litigio con independencia del análisis de la materia controvertida.

En nuestro trabajo de campo, conocimos de un caso en donde se pagó U\$ 5,000.00 a un Juzgado penal a efectos de que la Sentencia emitida salga a la medida. Carlos, abogado penalista de un estudio grande egresado de una universidad privada, quien fungió de informante para este caso, manifestó lo siguiente:

“Yo estaba a cargo de un proceso penal en donde defendíamos a una persona que había sido denunciada por estafa. A efectos de que la sentencia salga favorable a nuestro cliente, mi jefe coordinó el pago de US\$ 5,000.00, el cual fue entregado directamente al especialista quien manifestó que la sentencia sería de carácter absolutorio. Una vez efectuado el pago, el

proceso duró dos meses más y, efectivamente, la sentencia fue absolutoria”.

Este tipo de prácticas corruptas revisten de mucho cuidado, toda vez que implica someter la voluntad del órgano decisor al deseo de una de las partes litigantes, quien con el pago del dinero obtiene una sentencia o resolución favorable a sus intereses. Debido a que nos encontramos ante un acto que, en la mayoría de las veces, contiene la decisión final de un proceso judicial, su consumación implica una serie de coordinaciones en donde los sujetos intervinientes deben garantizar el resultado ofrecido.

Las coordinaciones a las cuales hacemos referencia deben ser concretas y efectivas, puesto que un mal entendido en la ejecución de estas o, en el peor de los casos, un incumplimiento de los acuerdos a los que se arribaron hace peligrar el resultado final que se tuvo como objetivo al momento de la generación de los contactos.

Asimismo, y dado que nos encontramos ante una práctica que puede determinar el fin de una controversia jurídica mantenida por años, el costo que se suele cobrar es relativamente alto. De las entrevistas realizadas a abogados y procuradores sobre el tema, se nos manifestó que en promedio y dependiendo de la especialidad y complejidad del caso, se puede cobrar desde US\$ 5,000.00 hasta US\$ 9,000.00.

El costo puede aumentar si nos encontramos ante el trámite del proceso judicial en segunda instancia. En efecto, cuando existe una Sentencia emitida en primera instancia que va a ser objeto de revisión, la dificultad para la realización de una práctica corrupta es mayor, toda vez que los canales de comunicación y las relaciones existentes a dicho nivel se vuelven más estrechas.

Nos encontramos ante una práctica sumamente delicada, toda vez que no implica impulsar actuaciones judiciales ni efectuar “subsanações” presentando escritos fuera del plazo legal, nos encontramos frente a un caso en el cual se está “torciendo” la voluntad del órgano decisor, “comprando” una Resolución Judicial. La gravedad de este tipo de prácticas y la importancia de lo que se encuentra en juego en un proceso judicial, hace que las coordinaciones y gestiones para la realización de este tipo de práctica sean muy reservadas.

Asimismo, cabe mencionar que, de la información obtenida, es preciso mencionar que no todos los casos sometidos a un proceso judicial pueden ser pasibles de esta práctica. En efecto, esta práctica debe tener en cuenta el estado procesal en el que se encuentra el litigio judicial, así como la materia controvertida, a fin de evaluar si es posible que el caso pueda resolverse de la manera en la que se quiere.

En otras palabras, antes de la realización de esta práctica resulta relevante que se haga un análisis de cuán creíble puede resultar el contenido de la Resolución emitida, toda vez que nos encontramos ante un supuesto en el cual se está resolviendo de manera independiente al criterio jurídico que debe aplicarse al caso concreto. Así, si el caso no puede ser presentado de la manera en la cual la parte interesada la requiere, el trato no se acuerda y se sigue el proceso judicial de acuerdo al trámite que le corresponde.

Lo mencionado acredita que los sujetos que buscan realizar esta práctica buscan generar la apariencia de que la Resolución emitida fue resuelta conforme a Derecho. La información recabada en este apartado fue bastante precisa y resaltada, haciéndose hincapié en que el riesgo que se corre debe ser proporcional a la existencia de argumentos que puedan moldear la decisión al interés de la parte impulsora del acto transgresor.

4.1.6. Elaboración de Resoluciones Judiciales por una de las partes

Otras de las prácticas advertidas consisten en la elaboración de Resoluciones Judiciales. Estas resoluciones pueden ser elaboradas por los mismos abogados del estudio que es parte del proceso judicial, quienes gracias a las relaciones que han logrado entablar con los miembros del juzgado, obtienen así la posibilidad de *aminorar* el trabajo judicial del Juez a cargo y elaborar la Sentencia o cualquier otra Resolución Judicial que se encuentre pendiente. Nos encontramos aquí frente a una práctica transgresora que implica la participación de una de las partes del proceso judicial en trámite en la decisión final que se fijará en el respectivo auto final o sentencia.

A diferencia de la práctica anteriormente descrita en donde solo se realiza el pago de dinero a efectos de que la Sentencia o Resolución salga a medida; aquí una de las partes ostenta la posibilidad de elaborar la misma Resolución o Sentencia que le va a ser notificada, resolviendo la controversia jurídica o algún incidente en el proceso judicial en curso. Esta posibilidad de elaboración de la Resolución Judicial que se le va a notificar al estudio de abogados que patrocina el caso, asegura que el resultado esperado en el curso del proceso judicial sea el plenamente esperado.

No nos encontramos ante un supuesto en el cual se está a la espera de la notificación de la Resolución Judicial que se acordó previamente con los miembros del Juzgado o de la Sala en la que se realizó el acuerdo. En el presente supuesto, el texto de la Resolución que será notificada se encuentra, posiblemente, en las computadoras del estudio de abogados, lugar en donde la Resolución fue elaborada en coordinación con el personal del Juzgado o de la Sala en donde se encuentra el expediente judicial.

Por la magnitud de esta práctica, los contactos que se generan son no solo realizados por los procuradores, sino también por los abogados pertenecientes

al staff profesional, quienes en base a relaciones de amistad conocen al Juez o al Secretario de Juzgado, con quienes logran llevar a cabo la realización de Resoluciones Judiciales, que después son entregados a efectos de que sean debidamente notificadas y formen parte del expediente judicial que dio lugar al caso materia de controversia.

Adrián, nos manifestó:

“Una vez realicé un auto que declaraba la nulidad de una Resolución concediendo la apelación que había elaborado. En realidad, para mí el tema estaba claro. El Juez había fallado. Me encomendaron que yo haga la Resolución, porque mi jefe era amigo del Juez”.

Como se puede apreciar en el testimonio, es el profesional perteneciente al staff de abogados quien elabora la Resolución que debería ser confeccionada por el Juez. De la misma manera Franco, abogado penalista de un estudio grande y egresado de una universidad pública, nos manifestó al respecto:

“En el estudio me encomendaron realizar una Sentencia absolutoria. Realicé la Resolución y se la di a mi jefe, quien iba a encontrarse con el Juez para entregársela personalmente”.

La labor que se realiza no solo consiste en la elaboración de la Resolución judicial que se notificará a las partes litigantes, sino también algunas veces, en la revisión de la Resolución elaborada por el Juez o el secretario judicial respectivo, quien previamente se lo cursa a la parte interesada, la cual podrá modificar el contenido de la Resolución si así lo estima conveniente.

Así, Alex abogado penalista de un estudio mediano egresado de una universidad pública nos manifestó lo siguiente:

En el tiempo que trabajé en un estudio dedicado a ver litigios penales (no más de 10 meses), revisé dos veces sentencias penales, las cuales eran elaboradas y corregidas en el mismo estudio a efectos de que se le entreguen al juez de acuerdo a lo conversado”.

Lo señalado por Alex en esta ocasión no implica la elaboración total de la Resolución Judicial que se va a notificar a las partes del proceso judicial. Estamos frente a un caso en el cual la Resolución es cursada al estudio de abogados para que pueda ser revisada. En dicha revisión, se puede cotejar el sentido y la decisión de la Resolución que se va a notificar, y así, asegurar el resultado esperado a lo largo del trámite del expediente judicial. Nos encontramos ante la intervención de quien es parte del proceso judicial, en la elaboración de la Sentencia o Resolución Judicial la cual, en teoría, debería ser elaborada y revisada por el Juez que tiene a su cargo la resolución del caso.

Como se puede ver, los informantes a quienes recurrimos en el presente apartado, nos manifestaron que el contacto había sido realizado por sus jefes, quienes eran abogados que mantenían una relación con el juez a cargo de la resolución de la controversia.

En cuanto a los costos por elaboración de Sentencias, Alex nos manifiesta al respecto:

“Según lo que se conoce, el precio por elaboración de sentencias judiciales no baja de US\$ 5,000.00, todo ello dependiendo de lo que se encuentre en juego”.

Estas prácticas nos revelan indudablemente que las redes de corrupción advertidas en la práctica jurídica no solo son utilizadas para la realización de

actos procesales de trámite (presentación de escritos fuera de plazo, impulsos procesales), sino también para la resolución de cuestiones de fondo, implicando en varios casos la resolución final que se espera en la finalización del proceso judicial. Estamos, pues, en presencia de una intervención evidente en la decisión que se tomará en algunas de las resoluciones que se deben emitir en el curso del proceso judicial.

De la misma manera que la práctica antes descrita, el nivel de coordinación y evaluación que debe existir entre el estudio de abogados y el personal del Poder Judicial debe ser bastante preciso, toda vez que se tiene que presentar la Resolución Judicial de manera creíble, mediante un sustento que posibilite la creencia de que la Resolución emitida fue dada de conformidad a Derecho.

4.1.7. Desaparición de expedientes judiciales

En el desarrollo de nuestro trabajo de campo, advertimos la realización de una práctica que en palabras de dos procuradores a los cuales entrevistamos, recalcaron su especial dificultad y peligro, toda vez que implica la desaparición de la totalidad de un expediente judicial, el cual contiene todas las actuaciones generadas en el proceso judicial³⁷.

³⁷ Resulta interesante el trabajo desarrollado por Leticia Barrera, titulado “La Corte Suprema en escena. Una etnografía del mundo judicial”, en el cual se analizan las dinámicas desplegadas por la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina. Uno de los principales temas tratados en dicha etnografía es la referida a la constitución del expediente judicial, el cual es presentado no como un medio para llegar a la solución jurídica respectiva, sino como un ente que constituye y se presenta como un acto de creación constante del Derecho. En relación al expediente judicial, la autora afirma lo siguiente: “La figura del expediente representa por antonomasia el funcionamiento de la burocracia y del aparato judicial modernos. De hecho, se trata de objetos mundanos, y quizá los más comunes de la administración de justicia. Ellos son las formas que ponen en movimiento y visibilizan la dinámica de trabajo de un tribunal, organizando además su actividad.

En el sistema legal argentino, como en la mayoría de las culturas jurídicas civilistas construidas sobre una tradición muy acentuada de procedimientos legales escritos y generalmente impersonales, son los procedimientos y prácticas de archivo y documentación, y los expedientes en particular, los que materializan la actividad judicial. Pero, aún más significativamente, estos documentos funcionan como dispositivos que fijan el marco de la acción del cuerpo judicial; esto significa que la verdad (legal) se persigue, determina, cuestiona y negocia dentro de los contornos del expediente”. (Barrera: 2012, 80).

El expediente judicial viene a ser el acervo documentario que se encuentra en los despachos de los juzgados y salas, que contiene todos los documentos relacionados a un determinado proceso judicial. En un expediente encontramos, por ejemplo, el acto que da inicio a un proceso judicial de carácter civil (demanda), la respectiva contestación elaborada por el demandado, así como toda la serie de Resoluciones Judiciales (Decretos, Autos, etc.) que encauzan el proceso que se viene llevando a cabo.

De lo anteriormente descrito, podemos apreciar que el expediente judicial es el “espacio material” en el que se encuentra cada una de las actuaciones de un proceso judicial. El expediente puede contar con una serie de tomos, los cuales deben contener cada una de los documentos que representan las actuaciones procesales de manera ordenada. En el expediente encontramos, por ejemplo, los medios probatorios ofrecidos por las partes en litigio, sobre los cuales el juez o a la Sala que decida el caso, se deberá sustentar para emitir una resolución al litigio.

La importancia de un expediente judicial resulta vital, dado que es sobre la base de todo lo actuado (y que forma parte del contenido del expediente) que se obtendrá una solución al litigio iniciado. De allí que la pérdida de algunos de los documentos que obren en el expediente, o la desaparición total de este, constituya un supuesto bastante grave en la labor jurisdiccional.

Como lo mencionamos al inicio, nos encontramos ante una práctica que reviste una especial dificultad. Dicha dificultad radica en que los sujetos intervinientes en la realización de esta práctica corrupta, tienen por finalidad desaparecer del local del Juzgado o Sala, el expediente judicial de un determinado proceso, el cual contiene los documentos que materializan la controversia mantenida por las partes procesales.

En la entrevista mantenida con Juan, procurador de un estudio jurídico grande, nos manifestó al respecto lo siguiente:

“La pérdida de un expediente judicial implica la coordinación con al menos dos personas dentro del juzgado en donde se encuentra el expediente. El costo que se exige es bastante alto, dado que implica no dejar ningún rastro del expediente, ya que interviene la OCMA y comienza a investigar a cada uno de los que tuvieron acceso al expediente perdido”.

El testimonio consignado en el presente apartado resulta revelador, ya que presenta la necesidad de la ocurrencia de ciertas condiciones para el éxito de la práctica analizada. En efecto, se precisa un necesario nivel de coordinación que permita que el expediente judicial salga del lugar en el cual se encuentra, para lo cual resulta necesario que se contacte a dos o más personas que conozcan de la existencia del expediente. Asimismo, se necesita tener mapeado el contexto y la posibilidad de que la pérdida del expediente no genere consecuencias mayores para los trabajadores que intervienen en la práctica.

Renato nos manifestó una experiencia en donde participó en la desaparición de un expediente judicial:

“Una vez agencié la pérdida de un expediente de familia. El dinero que se pagó fue de US\$ 2,000.00. Tenía por encargo la desaparición del expediente, puesto que ya se encontraba para resolver. Menos mal que tenía al especialista, quien con la ayuda de dos asistentes se encargó de borrar del juzgado el expediente.

El costo del dinero depende de la magnitud y dificultad de la labor encargada. La pérdida generalmente implica que el expediente va a ser entregado a la

parte que paga la coima, toda vez que es mediante dicha actuación que la parte interesada se asegura que el expediente no sea encontrado y que no se tuerza la voluntad a alguno de los participantes del acto transgresor.

Debido a que nos encontramos ante una práctica que enciende las alarmas de la Oficina de Control del Poder Judicial, su consumación reviste absoluto cuidado. Las partes intervinientes tienen que garantizar que no existirá ningún rastro de la pérdida efectuada, dado que como hemos señalado, la Oficina de Control audita a todo el personal del local del Juzgado en donde el expediente se encontraba.

En atención a que nos encontramos ante una práctica de especial dificultad, para el presente trabajo solo conseguimos los testimonios citados en el presente apartado, el cual dio cuenta de que cada vez resulta más difícil procurar la desaparición de un expediente judicial. Los costos que se suelen cobrar han aumentado considerablemente, ya que la fiscalización posterior resulta bastante incisiva, la cual suele desembocar en procedimientos administrativos contra el personal del juzgado que se encontraba a cargo del trámite del expediente judicial.

4.1.8. Obtención de copias simples de Resoluciones y expedientes judiciales

Una de las prácticas más comunes que encontramos consistió en la obtención de copias simples de documentos obrantes en el expediente judicial respectivo o, incluso, de la totalidad de un determinado expediente judicial que se encontraba en trámite. Esta práctica es agenciada por una de las partes en litigio que desea saber el contenido de una Resolución antes de su notificación, o también de un tercero interesado en una determinada controversia que se encuentra en trámite judicial y de la cual no es parte.

La presente práctica no implica la desaparición de todo un expediente judicial. La parte que realiza esta práctica tiene interés en conocer las actuaciones que se vienen dando en un determinado expediente judicial. No es su interés borrar de la historia judicial un determinado expediente, sino lo que busca es obtener la información que se ha generado en este.

Teniendo en cuenta lo antes señalado ¿Dónde radica la ilegalidad de esta actuación si solo se busca obtener información de un determinado proceso judicial? La ilegalidad radica en el hecho de que la parte que busca obtener información mediante la extracción de una copia no se encuentra legitimada para hacerlo, ya sea porque no es parte del proceso judicial o que, la información que se encuentra en el documento que busca obtener, es de carácter reservado según el tipo de proceso que se esté siguiendo, como lo es por ejemplo, el pliego interrogatorio que la parte contraria ha presentado y que solo es abierto al momento en que se produzca la audiencia de pruebas.

Al igual que los casos mencionados anteriormente, la obtención de una copia simple de un expediente judicial, implica, el pago de una contraprestación de dinero. Los montos de dinero que se pagan por copias varían. Dependen de la cantidad de copias que se requiere, de la magnitud del proceso que se está llevando a cabo, así como el interés y la voluntad del trabajador que tiene acceso al expediente judicial. Esto último es de especial consideración, toda vez que el trato se realiza generalmente con la persona encargada del expediente, quien evalúa el monto a cobrar dependiendo de la parte que solicita dicha copia, así como de lo que se encuentra en juego en la controversia judicial.

Los montos a los que hemos tenido acceso en nuestras entrevistas iban desde los S/. 120 hasta los US\$ 500 a más. No existe un monto estándar o que se encuentre dentro de un margen establecido. Como señalamos, se trata de

actuaciones que dependen mucho de la persona con quien se esté realizando el acuerdo y de la controversia que se viene llevando a cabo.

En uno de los casos a los que tuvimos acceso, el procurador del estudio tenía por encargo conseguir copias de todas las contestaciones de demanda que iban presentando las partes demandadas en un proceso judicial de reivindicación (en donde se discute el derecho de propiedad de un bien y el demandante, supuesto propietario, exige la restitución de este). Cada vez que se ingresaba en el sistema un escrito judicial de una de las partes demandadas, el procurador se apersonaba al Juzgado y obtenía copia de los documentos ingresados. El precio que pagaba por las copias oscilaba entre los S/. 100 a S/. 200.

La práctica antes mencionada tenía por finalidad conocer de antemano los escritos presentados por las partes demandadas, a efectos de poder anticipar la estrategia legal y así, tomar mejores decisiones que puedan coadyuvar a un mejor posicionamiento en el proceso judicial. Como lo hemos descrito anteriormente, todo proceso judicial se desarrolla en etapas y tiempos, razón por la que resulta sumamente importante anticiparse a las actuaciones venideras y contar con mayor espacio temporal para la preparación y presentación de escritos judiciales.

A efectos de contrastar el monto cobrado tuvimos acceso a un caso en donde la suma que se llegó a cancelar fue de S/. 1200, dado que se logró conseguir copia de la totalidad de un expediente judicial que constaba de cinco tomos. El testimonio que nos brindó Juan al respecto fue el siguiente:

“Una vez pude sacar copia de cinco tomos de un expediente judicial. El contacto lo hice la especialista del juzgado, que es bastante conocida por realizar este tipo de actos. La especialista tenía tanta confianza con el personal que trabajaba en el Juzgado

que inclusive pudo sacar los expedientes a los alrededores y allí mismo sacar las copias que le encargué”.

De la misma manera, en otro testimonio que obtuvimos se dio cuenta de que la obtención de copias simples constituye una práctica casi cotidiana y usual en los Juzgados y Salas, depende mucho de los contactos con que se cuente en el lugar en donde se encuentra el expediente, dado que ello facilitará que se pueda obtener el documento que se busca conseguir.

Así, Renato en una conversación que mantuvimos, nos manifestó al respecto:

“La obtención de copias se te hace fácil si conoces a la gente que está en el Juzgado. Solo vas, hablas con tu contacto, le das el monto que te pide y listo, obtienes los documentos sin ningún problema. El documento incluso te lo dan en el mismo Juzgado.

Oscar, procurador que trabaja en un estudio jurídico mediano, señala lo siguiente:

“Yo puedo conseguir copias de resoluciones en expedientes no notificados. El contacto es con el Secretario o especialista. Los precios varían. Van desde los S/. 100”.

Lo mencionado anteriormente, rebela que nos encontramos ante una práctica asidua, la cual es utilizada a efectos de obtener información que se considera relevante en el desarrollo de un litigio judicial. El precio que se cancela, se paga por la celeridad en obtener la información o por tener acceso a un documento que la parte litigante no ha podido obtener. Aquí nos encontramos ante una actuación que busca información para variados intereses, ya sea para estar atento a la resolución de una determinada controversia jurídica o

tener acceso antes de los escritos que formalmente le deben ser notificados según el procedimiento regular de actuación del proceso judicial.

4.1.9. Gastos de procuración

En los párrafos expuestos líneas arriba, hemos podido apreciar cada uno de los estudios de caso que sustenta la presente etnografía. Las actuaciones descritas constituyen prácticas que se desarrollan al margen de los procedimientos establecidos y que tienen por finalidad la obtención de un beneficio. Este beneficio no se obtendría sin la realización de la práctica transgresora, dado que lo que se ha efectuado es crear una práctica paralela que contraviene el desarrollo del litigio judicial.

La realización de las actuaciones descritas implica la prestación de una suma de dinero. No encontramos actuaciones que puedan ejecutarse a título gratuito. Cada uno de los actos expuestos se dio en virtud del pago de una contraprestación en dinero, popularmente conocida como “coima”. Este pago sale de las cuentas y de los fondos del estudio de abogados, quienes deben desembolsar las cantidades de dinero solicitadas. El dinero que se paga por concepto de *coimas* varía conforme lo hemos mencionado anteriormente. Se tiene en cuenta la importancia del caso, el riesgo existente y la cantidad de personas que participan en la práctica corrupta, quienes esperan recibir su *parte* por su intervención en la red establecida.

Los pagos de dinero no solo son recibidos por una persona, sino que esta al pertenecer a la red de corrupción debe repartir los montos a las personas intervinientes en la labor. Así, por ejemplo, en la presentación de escritos fuera de plazo, el contacto debe pagar su respectiva parte a los trabajadores que hicieron posible el ingreso del escrito al sistema fuera del plazo estipulado. De la misma manera, la persona que quiere desaparecer un expediente judicial, debe coordinar el monto de dinero teniendo en cuenta el personal que

participará de la práctica, ya que como hemos observado, esta práctica requiere necesariamente la coordinación de las personas que conocen de la existencia del expediente.

Como se aprecia, al ejecutarse los actos corruptos dentro de una red de corrupción, el dinero cancelado debe ser pagado a los actores que hicieron posible el acto realizado, quienes deben ser satisfechos a plenitud puesto que, si se les falla, posteriormente son reticentes a realizar otro *favor* solicitado. Recordemos que la realización de estas prácticas implica un riesgo considerable para los trabajadores públicos; de allí, que el incumplimiento ante algunos de los acuerdos arribados con la obtención del resultado, signifique una ruptura que hace que en otras ocasiones no se pueda llevar a cabo las prácticas analizadas.

En las conversaciones mantenidas con los procuradores se incidió claramente en lo antes mencionado. Es decir, en la necesidad de que las actuaciones acordadas y los pagos comprometidos, deben ser efectuados tal como había sido pactado. Un incumplimiento de lo acordado implicaría que nunca más se pueda realizar una actuación similar a la ejecutada. La palabra brindada mediante el acuerdo arribado tiene un valor muy fuerte en la realización de prácticas transgresoras.

El hecho de que se incumpla con el pago acordado, no significa solo que ya no se pueda realizar a futuro una práctica similar, sino que la parte que incumple comienza a ser vista como aquella que no cumple con la palabra dada, cuya impresión no solo se mantiene para las personas que participaron de la actuación transgresora, sino que se difunde en las diversas redes existentes en los juzgados y salas, lo cual hace que muy pocas personas vuelvan a depositar su confianza y realicen actos similares con el sujeto que no cumplió con lo acordado. Las personas que quieren seguir siendo parte de las redes de corrupción, deben procurar cumplir con cada uno de los

compromisos asumidos. El incumplimiento de cualquiera de estos, hace que a esta persona le sea muy difícil volver a participar de estas redes.

Resulta interesante analizar y valorar la magnitud de las consecuencias negativas que implica el no cumplimiento de un acuerdo. Si una persona no cumple con el pago de un *incentivo* para el impulso procesal o el pago de una coima por presentar un escrito fuera de plazo, su reputación en los espacios de juzgados y salas se ve mermada. Ni qué decir en supuestos más graves, en donde no se cumple con el pago de una Resolución Judicial o, al final, se paga una cantidad menor a la acordada. Estos supuestos constituyen actos que cambian radicalmente la percepción no solo de la persona a la que se ha incumplido, sino también a todos aquellos sujetos que interactúan en las redes de corrupción existentes.

El respeto a la palabra dada en un acuerdo arribado, así como el cumplimiento estricto de la contraprestación pactada son los pilares que coadyuvan a que las redes de corrupción se desenvuelvan con normalidad. La lealtad entre los actores resulta crucial para el adecuado desenvolvimiento de prácticas corruptas, toda vez que la ocurrencia de un error o incumplimiento, puede propiciar el descubrimiento de la práctica cometida. Por tal razón, conforme se nos fue relatado en las entrevistas y conversaciones mantenidas, la confianza es un activo esencial para la correcta ejecución de una práctica corrupta.

Los estudios de abogados conocen efectivamente lo mencionado, razón por la que siempre buscan cumplir con el pago de las sumas acordadas. De la información recaba en campo, no conocimos ningún supuesto en el cual un estudio de abogados haya incumplido con el pago acordado. De las conversaciones mantenidas, sí conocimos de casos en los que los trabajadores de juzgados y salas no lograron cumplir el cometido propuesto, lo cual afecta menos a ellos que a los propios estudios, puesto que si bien no vuelven a ser contactados por los sujetos a los cuales defraudó, sí pueden ser

contactados por otras personas que intenten conectarse con las redes de corrupción existentes.

Los montos a los que hemos hecho referencia en el presente apartado son todos aquellos gastos que el estudio de abogado asume como consecuencia de *favores* e *incentivos* realizados (pago de coimas). De la información encontrada en campo, pudimos advertir que el pago de coimas está conformado por montos de dinero que, posteriormente, son remitidos a los clientes bajo el rubro de *gastos de procuración* y que salen de la denominada *caja chica*³⁸ que se maneja asiduamente en las áreas administrativas de los estudios de abogados.

Los estudios que forman parte del estudio de casos trasladaron los costos que implicaba el pago de coimas a sus clientes. Tanto el estudio grande, los medianos y el estudio pequeño eran conscientes que el pago que se realizaba para el ejercicio de las prácticas debían ser cancelados de los fondos de sus clientes quienes, en algunos casos, conocían de la necesidad de las actuaciones realizadas para el adecuado éxito del caso encargado.

El conocimiento que los clientes tenían en algunos casos de las prácticas corruptas ejercidas muestra que ellos también consideran que la obtención de un resultado favorable no solo puede conseguirse mediante la utilización de la técnica jurídica, sino también por la consecución de actuaciones ilegales. La existencia de la *caja chica* y la posibilidad de recurrir a esta para el pago de las coimas, comprueba que la posibilidad de recurrir a este tipo de actuaciones se mantiene *latente* en el ejercicio de la práctica jurídica en el patrocinio de procesos judiciales. Esta posibilidad latente, nos muestra a su vez, que el

³⁸ La “caja chica” viene a ser una denominación coloquial que se utiliza en el argot de los estudios de abogados, el cual hace referencia al dinero disponible en las cuentas del estudio a efectos de agilizar los trámites judiciales que se presentan en el día a día. La caja chica se encuentra custodiada por el personal administrativo del estudio que se encarga de llevar la administración y contabilidad en orden. Ante una eventual urgencia, la caja chica dispone el dinero necesario que será utilizado para resolverla.

ejercicio de estas prácticas constituye una herramienta adicional que, inclusive, puede ser ofrecida en el mercado de servicios legales ante los propios clientes.

Los gastos de procuración en los que se incurren son remitidos mediante facturas, cuyo detalle está conformado por pasajes, copias, viajes y demás conceptos que permitan poder obtener la suma desembolsada. No podemos esperar que estos gastos sean expresamente llamados “gastos de corrupción” por las implicaciones que ello pudiera tener. Los sujetos buscan la manera de poder encauzar y justificar las transferencias de los montos pagados. Lo mencionado, constituye nuevamente un ejemplo de cómo los agentes buscan crear canales y vías que les permitan entrar e incentivar las redes de corrupción existentes.

En el trabajo de campo hemos encontrado testimonios que dan cuenta de que los estudios de abogados disponen y discuten la manera como dichos gastos de procuración se deben efectuar, a efectos de no tener problema alguno con la disposición de dinero en la denominada *caja chica*. Lo mencionado, muestra que nos encontramos ante la existencia de una estructura que no solo cuenta con el personal indicado, como lo es el caso de los procuradores, sino también con los recursos necesarios para poder obtener los resultados esperados. Ante la necesidad de ejecutar algunas de las prácticas descritas, el procurador hace el trabajo de contactar al personal judicial pertinente para coordinar la realización de una práctica, contando con el respaldo del estudio de abogado, el cual le proveerá del recurso económico necesario.

4.2. Prueba de hipótesis y discusión de los resultados

Como lo hemos manifestado en el apartado anterior, los casos que hemos citado en el presente estudio producto de la observación participante y la realización de entrevistas libres y a profundidad, respaldan la hipótesis que dio

origen a la investigación presentada. La práctica jurídica realizada por los estudios de abogados de Lima recurre, en algunos casos, al ejercicio de acciones corruptas, las cuales resultan esenciales para la obtención de resultados eficientes. Práctica jurídica y corrupción caminan en determinadas ocasiones juntas, dado que esta última es necesaria para el éxito del resultado jurídico que se espera en el final de un proceso judicial. Es necesario precisar que a partir de la información recogida no es posible realizar una generalización que defina por igual a todos los estudios de abogados.

Los estudios de abogados de Lima estudiados conocen y participan de manera efectiva en estas redes. Para ello, como lo hemos expuesto en el apartado referido a la presentación de los casos, cuentan con personas que conocen y forman parte de las redes de corrupción existentes. Los estudios de abogados, esto es el sector privado, forma parte de estas redes de corrupción, toda vez que incentivan su actuación y desenvolvimiento.

La existencia de los procuradores, por ejemplo, revela que el plano formal y técnico del trabajo jurídico no es suficiente a efectos de obtener buenos resultados, sino que es necesario realizar y estar al tanto de toda una serie de prácticas que ayudarán a asegurar el resultado positivo que se busca con el patrocinio de un caso. Los procuradores y los abogados buscan conocer a los funcionarios encargados de los casos llevados. El establecimiento de las relaciones con dichos trabajadores permite y facilita la formación y participación en las redes de corrupción existentes.

¿Hasta qué punto la realización de prácticas corruptas se ha vuelto un elemento importante en el ejercicio del trabajo jurídico? De la información que obtuvimos de la realización de nuestro trabajo de campo, podemos afirmar que, en los casos analizados, la recurrencia a prácticas corruptas fue considerada *esencial* para el resultado eficiente del trabajo jurídico.

En efecto, en cada uno de los casos analizados, se consideró que la recurrencia a actuaciones corruptas era de vital importancia para la obtención de un resultado exitoso. Asimismo, las personas que fungieron de informantes en la presente investigación consideraron que las prácticas descritas se cometían con mucha regularidad, llegando a afirmar que estas constituían actuaciones asiduas que se consideran normales dentro del ejercicio del trabajo jurídico.

Lo mencionado anteriormente revela lo que hemos percibido a lo largo del desarrollo de la presente investigación; esto es, que la *recurrencia a actuaciones corruptas en el ejercicio de la actividad jurídica privada es considerada una herramienta adicional a la defensa técnica legal que se desarrolla en el patrocinio de un proceso judicial*.

La posibilidad de poder entrar en las redes de corrupción e incentivar la generación de una práctica de corrupción se encuentra latente en el desarrollo de un proceso judicial. Esta posibilidad es vista como una herramienta adicional que puede facilitar la obtención de un resultado exitoso. Si nos encontramos ante una negligencia cometida (no presentación de un escrito judicial en el plazo establecido), o ante la necesidad de asegurar un determinado resultado (elaboración de una resolución judicial por una de las partes en litigio), existe la posibilidad de recurrir el sistema “paralelo” de administración de justicia a fin de lograr el resultado esperado.

Lo señalado a lo largo de estas páginas revela que los actos de corrupción se han *naturalizado y normalizado* (Foucault: 2002) a tal punto que forman parte del trabajo jurídico desarrollado en el ejercicio de la práctica jurídica. Los testimonios esbozados en el presente trabajo, dan cuenta que el desembolso de dinero para la realización de *labores* e *incentivos*, constituye una práctica asidua que da lugar a que los estudios de abogados puedan contar siempre con fondos disponibles para la realización de prácticas corruptas. Asimismo,

se ha podido apreciar que los clientes, en muchos casos, son conscientes de los pagos que muchas veces hay que realizar para la obtención de resultados. Tanto los estudios de abogados como sus respectivos clientes no tienen problema alguno en entrar a estas redes de corrupción. *Ello, evidencia que dichas prácticas se han vuelto y constituyen parte y, a su vez, contenido del trabajo jurídico.*

A partir de una eficiencia en los resultados que implica la participación en redes, el patrocinio de clientes en litigios judiciales llevados a cabo ante el Poder Judicial constituye un servicio legal fundamental en el mercado, para lo cual los estudios de abogados se especializan para obtener la mayor cantidad de resultados positivos y eficientes en beneficio de sus clientes. La obtención de resultados favorables en los litigios judiciales patrocinados posibilita la obtención de una mayor cantidad de clientes y, por ende, una mejor reputación en el mercado de servicios legales.

Ser un estudio de abogados exitoso y ganador en los litigios asumidos permite que nuevos clientes se interesen en el patrocinio judicial de estos estudios, para lo cual resulta esencial que el nivel de éxito mostrado pueda ser mantenido. Como lo hemos apreciado de los resultados obtenidos, la defensa técnica de los casos sometidos a litigio judicial no constituye el único mecanismo que coadyuva a la obtención de resultados eficientes, sino también el ejercicio de prácticas corruptas.

Los casos estudiados corroboran lo mencionado. Los estudios de abogados en los cuales se realizó el trabajo de campo consideraban la importancia de ganar los litigios judiciales que patrocinaban a fin de “fidelizar” a los clientes y seguir generando réditos en el mercado. Estos réditos si bien son percibidos en el plano económico, también implica el “prestigio” y el nivel de efectividad que el estudio jurídico tiene en la prestación de servicios legales que oferta.

El estudio al cual calificamos como grande tiene interés en mantener su estatus y prestigio en el mercado jurídico, para lo cual debe mantener el nivel de excelencia y efectividad en el patrocinio de procesos judiciales, lo cual no solo se condice con el número de casos judiciales ganados, sino también con el nivel de eficiencia en la resolución que implica el patrocinio de un caso (tiempo y celeridad). De la misma manera, los estudios jurídicos medianos buscan ganar presencia en el mercado legal, a efectos de poder competir y llegar a una posición que le permita una mayor cantidad de clientes y un mayor prestigio en el campo jurídico. Lo mencionado no resulta ajeno al estudio jurídico pequeño que, si bien se concentra más en los réditos económicos que puede obtener con una mayor cantidad de clientes, no renuncia al hecho de crecer mediante la obtención de presencia y prestigio en el mercado de prestación de servicios legales.

La competencia que existe entre los estudios de abogados, resulta un criterio a tomar en cuenta para entender por qué se recurre al ejercicio de actuaciones corruptas en determinados casos. Nos encontramos ante un escenario en el cual los diversos estudios jurídicos que prestan sus servicios profesionales en el campo jurídico buscan obtener una posición de predominio y autoridad en el mercado legal.

En virtud a los hallazgos descritos, podemos señalar que el trabajo de campo responde las preguntas de investigación formuladas³⁹. En efecto, podemos manifestar que los estudios de abogados acceden, intervienen y participan en las redes de corrupción mediante la contratación de personas que resultan ser participantes activos en estas redes, puesto que conocen a individuos que intervienen y forman parte de ellas, con quienes coordinan la actuación de

³⁹ Las preguntas de investigación son: i) ¿De qué manera los estudios de abogados de Lima acceden, intervienen y participan en las redes de corrupción que se desarrollan en la práctica jurídica, específicamente en las cortes y juzgados de Justicia de Lima?, ii) ¿Por qué los estudios de abogados de Lima recurren al ejercicio de prácticas corruptas en el desarrollo de su práctica jurídica?, iii) ¿En qué casos los estudios de abogados de Lima recurren al ejercicio de prácticas corruptas en el desarrollo de su actividad profesional?

prácticas corruptas. La razón de la participación de los estudios de abogados en estas redes se sustenta en la necesidad de brindar un servicio legal exitoso a sus clientes, para lo cual consideran que conjuntamente con la defensa técnica en un litigio judicial, existen mecanismos informales y paralelos al sistema que pueden asegurar un resultado exitoso. Finalmente, los hallazgos presentan que los casos en los cuales los estudios de abogados recurren a estas prácticas varían, puesto que pueden ser utilizados para corregir errores o negligencias, brindar celeridad a los procesos judiciales, obtener ventajas en la estrategia legal o asegurar el resultado exitoso de un caso.

Expuestas algunas ideas producto de los resultados encontrados en campo, corresponde cuestionarnos ¿Cómo dialogan nuestros hallazgos con el conocimiento propuesto por las investigaciones realizadas sobre el tema?

Existe una coincidencia general entre la investigación realizada y los estudios expuestos en los antecedentes de investigación, reflejada en que existe una relación innegable entre práctica jurídica y corrupción. Tanto los estudios de Mujica, la Comisión Andina de Juristas, Poole, Coahila y Pásara son conscientes de ello. No obstante, las investigaciones de Poole y Coahila solo se enfocan en el lado público en sentido estricto, toda vez que sus investigaciones se centran en actuaciones exclusivas de funcionarios públicos, como lo es el caso de los depositarios judiciales como en el estudio de Coahila (2013) y el de los juzgados de paz letrado, como lo refiere Poole (2005). Estas investigaciones no mencionan como el sujeto privado interviene en las prácticas corruptas.

Mientras tanto, si nos enfocamos en los estudios de la Comisión Andina de Juristas (2003), Mujica (2011) y Pásara (2005), podemos apreciar que en sus escritos intentan relacionar y presentar a la práctica jurídica privada como parte de las actuaciones corruptas que se generen en el Poder Judicial. Así Mujica es consciente de que los trámites que se realizan en los alrededores

del Palacio de Justicia son ejecutados por sujetos privados, mientras que la Comisión Andina de Juristas y Pásara van un poco más allá y señalan que, en algunos casos, los propios estudios de abogados buscan realizar actuaciones corruptas.

Es preciso manifestar que un aporte fundamental de los antecedentes para la construcción de la presente investigación es el trabajo de Mujica (2011), puesto que a diferencia de las demás investigaciones considera que la corrupción debe analizarse en virtud a las redes que hacen posible que este fenómeno opere. En efecto, Mujica considera que la corrupción en la práctica jurídica se produce en el marco de un entramado de relaciones que hace posible que los sujetos participantes interactúen. Dicho marco teórico ha sido bastante útil para el entendimiento de la corrupción en nuestra investigación, toda vez que compartimos la idea de Mujica en el entendido de que, para analizar la relación entre práctica jurídica privada y corrupción, hemos tenido que acoger el concepto de redes, así como entender su lógica de funcionamiento.

Podemos afirmar que los antecedentes de investigación, si bien intuyen que los sujetos privados pueden participar de las redes de corrupción existentes en el Poder Judicial, no cumplen con demostrarlo. Los antecedentes solo se centran en visibilizar a la corrupción como un problema central de la práctica jurídica, pero no nos presentan la manera en que esta se expresa mediante actuaciones descritas de manera concreta.

Así, por ejemplo, en los estudios de Mujica (2011), Pásara (2005) y Comisión Andina de Juristas (2003), se manifiesta que los estudios de abogados recurren a estudios satélites y otros profesionales a efectos de que sean estos los que ingresen en las redes de corrupción y consigan los resultados encargados de manera paralela al plano formal. En el trabajo de campo hemos podido apreciar que los estudios de abogados no tienen ningún problema en

entrar por su cuenta a las redes de corrupción existentes. Para ello, cuentan entre su personal a sujetos que tienen acceso a las redes antes mencionadas. Si bien pueden existir estudios que contraten a los denominados “estudios satélites”, existen estudios que no se ven en la necesidad de realizar ello, puesto que conocen en las redes establecidas y tienen la posibilidad de incentivar la realización de manera directa de prácticas transgresoras.

Lo mencionado anteriormente revela, a diferencia de los estudios de Pásara (2005), Mujica (2011) y la Comisión Andina de Juristas (2003) que el sector privado, mediante los estudios de abogados de Lima, forma parte efectiva de las redes de corrupción que se tejen, para la consecución de objetivos que no se podrían obtener siguiendo las reglas del sistema legal formal. Los resultados obtenidos en el trabajo de campo desarrollado, evidencian que la corrupción no se haya únicamente en el lado público, sino también en el sector privado. De lo mencionado, podemos señalar que nuestro trabajo complementa las investigaciones antes mencionadas.

La diferencia que existe entre la investigación realizada y los antecedentes que han sido tomados en cuenta, *es el trabajo de campo ejecutado*. En efecto, mediante el trabajo de campo hemos podido concretizar muchos de los planteamientos esbozados en los antecedentes de la investigación y, sobre todo, hemos podido identificar a un sujeto crucial en las prácticas jurídicas transgresoras: *el procurador*. En efecto, el procurador, tal como lo hemos expuesto líneas arriba, constituye en la mayoría de casos, la bisagra que los estudios de abogados utilizan para entrar a las redes de corrupción existentes.

La existencia del procurador en la etnografía elaborada constituye un aporte sumamente importante y un paso adelante para futuros trabajos de investigación. En efecto, ninguno de los antecedentes de investigación expuestos en el segundo capítulo consigna al procurador como un personaje clave para entender la relación entre práctica jurídica privada y corrupción.

El personaje antes mencionado no ha sido tomado en cuenta por los antecedentes de la investigación, toda vez que su aparición implica la realización de un trabajo de campo que utilice herramientas cualitativas, las cuales nos han permitido advertir su importancia y la manera en cómo este personaje se involucra en las redes de corrupción establecidas en el Poder Judicial. Asimismo, y tal como lo hemos afirmado a lo largo de la presente investigación, nuestra experiencia en el ejercicio profesional de la abogacía, lo que hemos llamado “reflexividad”, constituye una fuente de información fundamental de cómo los estudios de abogados entran en las redes de corrupción establecidas y cuentan con personal que conoce e ingresa con facilidad en estas redes.

En efecto, el hecho de que hayamos actuado en el campo como parte de los sujetos a los cuales ha sido enfocada nuestra investigación, nos permitió diferenciar a los sujetos que interactúan con mayor habilidad y conocimiento en las redes de corrupción. El conocimiento del manejo administrativo de los estudios de abogados y del personal que forma parte de estos, nos ayudó a identificar a la figura del procurador el cual, hasta el momento, ha sido desconocido en las investigaciones que se han gestado en materia de corrupción en el mundo jurídico.

Oro aporte fundamental que se diferencia de los antecedentes de investigación resulta la descripción de casos concretos que revelan cómo los estudios jurídicos privados se relacionan mediante la realización de prácticas corruptas con las diversas instancias del Poder Judicial. Los casos presentados son evidencia empírica de supuestos específicos en el cual se puede apreciar la ejecución de prácticas transgresoras, las cuales sustentan las conclusiones esbozadas, así como las ideas plantadas por Mujica (2011) y la Comisión Andinas de Juristas (2003).

Ninguno de los antecedentes de investigación tomados en cuenta, menciona los estudios de casos citados en el presente trabajo. El aporte al cual aludimos, se sustenta en la visibilización no solo de la relación entre práctica jurídica y corrupción (advertidas por los antecedentes), sino también en las modalidades y técnicas ilegales que los estudios de abogados ejecutan en el ejercicio de su práctica profesional en los litigios llevados a cabo ante el Poder Judicial. Esto ha podido ser advertido en la etnografía, en la cual describimos de manera concreta y detallada algunas las principales actuaciones corruptas realizadas por los sujetos privados, respaldadas por la observación participante, las entrevistas libres y a profundidad, así como en la reflexividad del autor de la tesis.

Los resultados del trabajo de campo realizado acreditan de manera fehaciente que el sector privado en el mundo jurídico, reflejado en la participación de los estudios de abogados, tiene interés en la participación y realización de actos corruptos dirigidos a obtener resultados beneficiosos en los litigios judiciales llevados a cabo ante el Poder Judicial. El sector privado, en este caso, es plenamente consciente de que tiene que entrar al sistema paralelo informal e ilegal, para que en algunos casos pueda conseguir los resultados esperados.

La normalización de las prácticas corruptas que se han insertado en el ejercicio de la abogacía debe ser entendida más allá de incentivos económicos o explicaciones institucionales, sino que debe ser vista como parte de un fenómeno transgresor que ha instalado en la vida misma de la sociedad. Si entendemos que existe una cultura de la corrupción instalada en la sociedad misma y que esta engloba al ejercicio de la práctica jurídica, debemos estudiar y analizar la actuación de dichas prácticas, la manera en que operan y se desenvuelven, a efectos de procurar soluciones que ataquen el mantenimiento de dicha cultura, la cual por el hecho de ser tal, es susceptible de ser modificada y aminorada.

CONCLUSIONES

- La corrupción debe ser analizada en su cotidianeidad; es decir, estudiando la manera como las prácticas transgresoras se desenvuelven y desarrollan en las redes de corrupción existentes. Para ello, la antropología cuenta con herramientas teóricas y metodológicas que pueden coadyuvar a un mejor entendimiento de la corrupción como fenómeno social.
- La Antropología del Derecho en nuestro país se ha enfocado en temas tradicionales, los cuales tienen como base la distinción clásica que atribuía a la antropología el estudio de sociedades simples, tradicionales o rurales. No obstante, apostamos por el desarrollo de una Antropología del Derecho que se desarrolle más allá de los márgenes, la cual se desenvuelve en el estudio y análisis de temas que no solo se enfoquen en el estudio de las llamadas sociedades rurales, sino también en problemáticas urbanas.
- Los resultados del trabajo de campo efectuado en la presente investigación, han demostrado que la realización de prácticas corruptas en el ejercicio profesional de la abogacía en los procesos judiciales llevados a cabo ante el Poder Judicial, se han naturalizado a tal punto que, en muchas ocasiones, son consideradas una herramienta esencial para la obtención de resultados eficientes.
- Los estudios de casos presentados en la presente investigación, han sido obtenidos mediante la utilización de metodologías cualitativas, a través de la ejecución de entrevistas libres y a profundidad, así como la realización de un trabajo de campo en donde la observación participante y la reflexividad en el análisis y recopilación de los casos, muestran que el ejercicio profesional de la abogacía en los litigios

llevados a cabo ante el Poder Judicial de Lima, se valen de herramientas corruptas para la obtención de resultados eficientes. Es preciso mencionar que la reflexividad del autor, reflejado en su experiencia como asistente y abogado en estudios de abogados, ha sido una herramienta esencial de información y recopilación de datos que coadyuvó a precisar el objeto de estudio.

- La presente investigación, a diferencia de otras que han abordado la problemática de la corrupción en el Derecho y en la Antropología, se enfoca en el estudio de los sujetos privados que intervienen en las redes de corrupción existentes. Las redes de corrupción antes mencionadas, no están conformadas solo por un lado, es decir por los trabajadores públicos que ejercen funciones en el Poder Judicial, sino también por sujetos privados, quienes son los que recurren y forman parte de las redes de corrupción establecidas, solicitando toda una serie de actuaciones que se encuentran fuera del plano formal, y que constituyen una manera distinta (corrupta) de hacer posible el trabajo jurídico. Estos agentes privados son los estudios de abogados, quienes conocen de la existencia de las redes de corrupción existentes y que buscan contar con personal que tengan facilidad de acceso a este tipo de redes.
- No podemos seguir entendiendo que el problema de la corrupción en la profesión jurídica se centra solo en el Poder Judicial y sus trabajadores. No se puede seguir entendiendo que la corrupción es solo un fenómeno que se presenta en el espacio público, en las sedes y pasillos de los distintos juzgados y salas del Poder Judicial. La corrupción, como fenómeno relacional que es, se presenta siempre constituida por dos partes, las cuales tienen el mismo grado de participación y responsabilidad en las actuaciones ilegales realizadas. Tanto los estudios de abogados que recurren y demandan estas prácticas son

igualmente responsables como los trabajadores del sector público que ofrecen soluciones al margen del sistema judicial formal instaurado. Este es el aporte que creemos la presente investigación revela, la visibilización consistente en que los problemas de corrupción en la profesión jurídica no solo atañen al sector público mediante el Poder Judicial, sino que también involucran al sector privado mediante la participación de los estudios de abogados que, ante cualquier incidente ocurrido en los litigios judiciales a su cargo, tienen la posibilidad de recurrir al ejercicio de prácticas corruptas.

- Nos encontramos ante una “cultura de la corrupción” en nuestra sociedad, la cual ha incidido en el ejercicio profesional del Derecho; por dicha razón, no solo bastan reformas estructurales e institucionales, sino también reformas académicas y culturales que incentiven a los sujetos a la no realización de prácticas transgresoras.

RECOMENDACIONES

- Resulta fundamental que se pueda analizar y estudiar los grandes acuerdos o lobbies fomentados desde los grandes estudios de abogados, quienes no solo se enfocan en el patrocinio de litigios judiciales, sino también en la representación de corporaciones y empresas, quienes celebran contratos con diversas instituciones del Estado.
- La presente tesis evidencia que la existencia de prácticas corruptas se ejecuta en la cotidianidad, mediante una serie de prácticas que son cometidas regularmente en los litigios llevados ante el Poder Judicial. La lectura de la presente investigación puede ayudar a implementar mecanismos que coadyuven a erradicar las prácticas corruptas halladas.
- El escándalo de corrupción que se ha generado en nuestro país en virtud del caso “Oldebrecht”, muestra un terreno fértil de investigación en el sentido expuesto en la presente tesis, dado que se ha acreditado la participación de estudios de abogados en el ejercicio de las prácticas ilícitas lesivas a los intereses del Estado peruano. Se hace necesario un estudio y análisis de las prácticas advertidas, a efectos de conocer la operatividad de las redes de corrupción que animaron el escenario nacional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDERS, Gerhard and NUIJTEN, Monique

(2007). *"Corruption and the secret of Law: An Introduction"*, en Nuijten, M & G. Anders (eds.) *"Corruption and the secret of Law: A Legal Anthropology Perspective"*, Aldershot, Ashgate, pp. 2-24.

ADONON, Akuavi.

(s/a) *"La antropología jurídica: más allá de las dicotomías"*.

<http://www.ibcperu.org/doc/isis/12611.pdf>

AMEIGUEIRAS, Aldo Rubén

(2003) *"El abordaje etnográfico en la investigación social"* en Vasilachis de Gialdino, Irene (coord.). *"Estrategias de Investigación Cualitativa"*. Barcelona: Gedisa.

AMES, Rolando y ROTTA, Samuel

(2005) *"Corrupción, sociedad y crisis del Estado en el Perú"* en Ugarteche, Óscar. *"Vicios Públicos: Poder y Corrupción"*. Lima: SUR. Casa de Estudios del Socialismo.

APPADURAI, Arjun.

(2001) *"La modernidad desbordada: Dimensiones culturales de la globalización"*. México, Fondo de Cultura Económica.

ARDILA AMAYA, Edgar.

(2002) *"Pluralismo Jurídico: Apuntes para el Debate"* en *"El Otro Derecho"* número 26-27. Abril, Bogotá: ILSA.

ARJONA TRUJILLO, Ana María.

(2002). *“La corrupción política. Una revisión de la literatura”*. Departamento de Economía: Universidad Carlos III de Madrid.

AROCHE, Fidel.

(2005). *“Apuntes desde la perplejidad. La teoría económica y el análisis económico de la corrupción”* en Ugarteche, Óscar. *“Vicios Públicos: Poder y Corrupción”*. Lima: SUR. Casa de Estudios del Socialismo.

AUGÉ, Marc.

(1998) *“Hacia una antropología de los mundos contemporáneos”*. Barcelona, Gedisa.

AUGÉ, Marc y Jean Paul COLLEYN

(2005) *“¿Qué es la antropología?”*. Barcelona, Paidós.

BARRERA, Leticia.

(2012). *“La Corte Suprema en escena. Una etnografía del mundo judicial.”*. Buenos Aires: Sigo XXI Editores.

BLUNDO, Giorgio

(2007). *“Hidden acts, open talks. How Anthropology can observe and describe corruption”* en Paru in Nuijten, M & G. Anders (eds.) *“Corruption and the secret of Law: A Legal Anthropology Perspective”*, Aldershot, Ashgate, pp. 27-52.

BOEHM, Frederic y GRAF LAMBSDORFF, Johann

(2009). *“Corrupción y anticorrupción. Una perspectiva neoinstitucional”* en *“Revista de Economía Institucional”* Vol. II, N° 21, Segundo Semestre, pp. 45-72.

BOURDIEU, Pierre.

(1990). *“Sociología y cultura”*. México: Editorial Grijalbo S.A.

(2000). *“Elementos para una sociología del campo jurídico”* en Bourdieu, Pierre y Teubner, Gunther. *“La fuerza del Derecho”*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

(2001). *“Poder, Derecho y Clases Sociales”*. 2ºed. Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer.

(2008). *“Homo Academicus”*. 1º ed. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

BOURDIEU, Pierre y WACQUANT, Loic.

(2008). *“Una invitación a la sociología reflexiva”*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

CLIFFORD, James.

(2001). *“Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva postmoderna”*. Barcelona: Gedisa.

COAHILA, Edwin, QUINTEROS, Víctor, CASTILLO, Rafael y CHÁVEZ, Carlos.

(2013). *“Micro corrupción en el Poder Judicial. El caso de los depositarios judiciales”* en http://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2013/04/INFORME-DJ_final.pdf.

COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS.

(2003). *“Corrupción judicial. Mecanismos de control y vigilancia ciudadana”*. Lima: CAJ.

COURTIS, Christian.

(2003). *“Enseñanza jurídica y dogmática en el campo jurídico latinoamericano: apuntes acerca de un debate necesario”* en AAVV. *“Derecho y Sociedad en América Latina: Un debate sobre los estudios jurídicos críticos”*. Colección en Clave Sur. Bogotá: ILSA.

DAS, Veena y POOLE, Deborah.

(2008). *"El Estado y sus márgenes. Etnografías comparadas"* en *"Cuadernos de Antropología Social"* N° 27, pp. 19-52.

DEGREGORI, Carlos Iván.

(2009). *"Panorama de la antropología en el Perú: del estudio del Otro a la construcción de un Nosotros diverso"* en *"No hay país más diverso. Compendio de Antropología Peruana"*. VOL. I. Lima: IEP.

(2012). *"La década de la antipolítica: auge y huída de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos"*. Lima: IEP.

DELGADO, Manuel.

(1999). *"El animal público. Hacía una antropología de los espacios urbanos"*. Barcelona: Editorial Anagrama.

DE SOUZA SANTOS, Boaventura.

(1998). *"La Globalización del Derecho. Los nuevos caminos de la regulación y la emancipación"*. Bogotá: ILSA.

(2009). *"Sociología Jurídica Crítica. Para un nuevo sentido común en el Derecho"*. ILSA: Editorial Trotta.

DEZALAY, Yves y GARTH, Bryant.

(2002). *"La internacionalización de las luchas por el poder. La competencia entre abogados y economistas por transformar los Estados Latinoamericanos"*. Colombia: ILSA.

DURAND, Francisco.

(2005). *"Dinámica política de la corrupción y participación empresarial"* en PORTOCARRERO, Felipe. *"El pacto infame. Estudios sobre la corrupción en el Perú"*. Lima: PUCP, IEP, Universidad del Pacífico.

FALK MOORE, Sally (Ed).

(2005). *"Law and Anthropology. A reader"*. Blackwell Publishing.

FERNANDEZ, Sergio.

(2005). *"La corrupción sistémica en el Perú de los noventa. Medición del impacto de los recursos desviados por casos de corrupción sobre el crecimiento económico"* en Ugarteche, Óscar. *"Vicios Públicos: Poder y Corrupción"*. Lima: SUR. Casa de Estudios del Socialismo.

FERRARI, Vincenzo.

(2006). *"Derecho y Sociedad. Elementos de Sociología del Derecho"*. Traducido por Santiago Perea Latorre. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

FLICK, Uwe.

(2004). *"Introducción a la investigación cualitativa"*. Madrid: Ediciones Morata.

FORTICH NAVARRO, Mónica y MORENO DURÁN, Álvaro.

(2002). *"Elementos de la Teoría de los campos de Pierre Bourdieu para una aproximación al Derecho en América Latina: Consideraciones previas"* en *"Verba Iuris"* N° 27. Bogotá: Colombia.

FOUCAULT, Michel.

(1999). *"Estrategias de Poder"*. Obras esenciales. Volumen II. Barcelona: Ediciones Paidós.

(2002). *"Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión"*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

GALEANO MARÍN, María Eumelia.

(2009). *"Estrategias de investigación social cualitativa. El giro en la mirada"*. Medellín: La Carreta Editores E.U.

GARCÍA VILLEGAS, Mauricio.

(2010). *“Sociología y crítica del Derecho”*. México: Fontamara.

GONZALES MANTILLA, Gorki.

(2008). *“La enseñanza del Derecho o los molinos de viento. Cambios, resistencias y continuidades”*. Lima: Palestra Editores.

GORDON, W. Roberto.

(2009). *“Como descongelar la realidad legal: una aproximación crítica al derecho”* en Courtis, Christian. *“Desde otra mirada. Textos de Teoría Crítica del Derecho”*. Buenos Aires: Eudeba, pp. 519-548.

GROSSI, Paolo.

(2003). *“Mitología jurídica de la modernidad”*. Madrid: Editorial Trotta S.A.

GUBER, Rosana.

(2004). *“El salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo”*. Buenos Aires: Paidós.

(2011). *“La etnografía: Método, campo y reflexividad”*. 1° ed. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

GUEVARA GIL, J. Armando.

(2009). *“Diversidad legal y complejidad legal. Aproximaciones a la Antropología e Historia del Derecho”*. PUCP: Lima.

GUPTA, Akhil.

(2005). *“Narrating the State of Corruption”* en Haller, Dieter y Shore, Cris (Ed.) *“Corruption. Anthropological Perspectives”*. London: Pluto Press, 2005.

HALLER, Dieter y SHORE, Cris.

(2005). *“Corruption. Anthropological Perspectives”*. London: Pluto Press.

HUBER, Ludwig

(2005) *“Una interpretación antropológica de la corrupción”* en <http://cies.org.pe/files/active/0/LHuber-Corrupcion.pdf>

KAUFMANN, Daniel

(2000). *“Corrupción y reforma institucional: el poder de la evidencia empírica”* en *“Perspectivas”*. Universidad de Chile, Vol. 3, N° 2.

KELSEN, Hans.

(1982). *“Teoría pura del Derecho. Introducción a la ciencia del Derecho”*. Traducción de Moisés Nave. Eudeva: Buenos Aires.

KENNEDY, Duncan.

(2012). *“La enseñanza del Derecho como forma de acción política”*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

(2009) *“La educación legal como preparación para la jerarquía”* en COURTIS, Christian (Compilador). *“Desde otra mirada. Textos de Teoría Crítica del Derecho”*. 2da edición. Buenos Aires: Eudeba.

KROTZ, Esteban

(2002). *“Sociedades, conflictos, cultura y derecho desde una perspectiva antropológica”*. KROTZ, Esteban. *“Antropología Jurídica: Perspectivas socioculturales en el estudio del Derecho”*. Barcelona, Anthropos.

MALEM SEÑA, Jorge.

(2002). *“La corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos”*. Barcelona: Editorial Gedisa.

MATEO, Miguel Ángel.

(2005). *“Corrupción política. Enfoques y desenfoques desde la cultura, la economía y la propia política”* en Ugarteche, Óscar. *“Vicios Públicos: Poder y Corrupción”*. Lima: SUR. Casa de Estudios del Socialismo.

MARCUS, George y FISCHER, Michael.

(2000). *“La antropología como crítica cultural. Un momento experimental en las ciencias humanas”*. Traducción de Eduardo Sinnott. Buenos Aires: Amorrortu editores.

MENDIZÁBAL, Nora.

(2006). *“Los componentes del diseño flexible en la investigación cualitativa”* en Vasilachis de Gialdino, Irene (coord.). *“Estrategias de Investigación Cualitativa”*. Barcelona: Gedisa.

MUJICA, Jaris.

(2011) *“Micropolíticas de la corrupción. Redes de poder y corrupción en el Palacio de Justicia”*. Lima: Asamblea Nacional de Rectores.

NADER, Laura

(2003) *“Le forze vive del diritto. Un'introduzione all'antropologia giuridica”*. A cura di Elisabetta Grande. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.

ORTIZ DE ZEVALLOS, Gabriel y CALDERÓN, Carlos.

(2005). *“Un enfoque neoinstitucional sobre la corrupción en el Perú”* en PORTOCARRERO, Felipe. *“El pacto infame. Estudios sobre la corrupción en el Perú”*. Lima: PUCP, IEP, Universidad del Pacífico.

PÁSARA, Luis.

(2005). *“Los abogados de Lima y la administración de justicia. Una aproximación preliminar”*. Lima: Instituto de Defensa Legal.

PEREZ LUÑO, Antonio Enrique.

(2005). *“Trayectorias contemporáneas de la Filosofía y la Teoría del Derecho”*. Lima: Palestra Editores.

POOLE, Deborah.

(2005). *“Los dos cuerpos del Juez: Comunidad, Justicia y Corrupción en el Perú de los neoliberales”* en Ugarteche, Óscar. *“Vicios Públicos: Poder y Corrupción”*. Lima: SUR. Casa de Estudios del Socialismo.

(2006). *“Los usos de la costumbre. Hacia una antropología jurídica del Estado neoliberal”* en ALTERIDADES. Número 16. pp. 9-21.

PORTOCARRERO, Gonzalo.

(2005) *“La sociedad de cómplices como causa del (des)orden social en el Perú”* en Ugarteche, Óscar. *“Vicios Públicos: Poder y Corrupción”*. Lima: SUR. Casa de Estudios del Socialismo.

(2010). *“Rostros criollos del mal. Cultura y transgresión en la sociedad peruana”*. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.

QUIROZ, Alfonso.

(2005). *“Costos históricos de la corrupción en el Perú Republicano”* en PORTOCARRERO, Felipe. *“El pacto infame. Estudios sobre la corrupción en el Perú”*. Lima: PUCP, IEP, Universidad del Pacífico.

(2013). *“Historia de la Corrupción en el Perú”*. Lima: IEP, IDL.

RODRÍGUEZ GOMEZ, Gregorio, GIL FLORES, Javier y GARCÍA JIMENEZ, Eduardo.

(1999). *“Metodología de la investigación cualitativa”*. Málaga: Ediciones Aljibe.

SAID, Edward

(2008) *“El Orientalismo”*. España. Debolsillo.

SISSENER, Tone Kristin.

(2001). *"Anthropological perspectives on corruption"*. Development Studies and Human Rights: Michelsen Institute.

SOTO, Raimundo.

(2003). *"La corrupción desde una perspectiva económica"*. Pontificia Universidad Católica de Chile. Documento de Trabajo N° 234.

STARN, Orin

(1992). *"Antropología andina, Andinismo y Sendero Luminoso"*. En *"Alpanchis"*, Año XXIII, N° 39, IPA, Cusco, pp. 15-72.

SUPIOT, Alan.

(2007). *"Homo Juridicus: Ensayo sobre la función antropológica del Derecho"*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

TAYLOR, S.J. y BOGDAN, R.

(1994). *"Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados"*. 2° reimpresión. Barcelona: Ediciones Paidós.

TORSELLO, Davide.

(2011). *"The ethnography of corruption: research themes in political anthropology"* en

https://www.sahlgrenska.gu.se/digitalAssets/1357/1357836_2011_2_torsello.pdf

(2014). *"Corruption as social Exchange: The view from anthropology"*. En http://anticorrp.eu/wp-content/uploads/2014/12/D1.1_Part5_Corruption-as-social-exchange-the-view-from-anthropology.pdf

UGARTECHE, Óscar.

(2005). *“Notas sobre la nueva corrupción económica en el Perú finisecular: desde la mafia, el mercantilismo y la teoría económica”* en PORTOCARRERO, Felipe. *“El pacto infame. Estudios sobre la corrupción en el Perú”*. Lima: PUCP, IEP, Universidad del Pacífico.

VELEZ RESTREPO, Olga y GALEANO MARIN, María

(2002). *“Investigación Cualitativa. Estado del arte”*. Medellín.

VASILACHIS DE GIALDINO, Irene. (Coord.)

(2006). *“Estrategias de Investigación Cualitativa”*. Barcelona: Gedisa.

WOLKMER, Carlos Antonio.

(2003). *“Introducción al pensamiento jurídico crítico”*. Bogotá: ILSA.

ZINN, Dorothy Louise.

(2005). *“Afterword – Anthropology and Corruption: The state of the Art”* en Haller, Dieter y Shore, Cris (Ed.) *“Corruption. Anthropological Perspectives”*. London: Pluto Press, 2005.